

2. Tensiones

- Durante 2016 se registraron 87 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (34) y Asia (20), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (14), Oriente Medio (11) y América (ocho).
- Los niveles de violencia política en Mozambique aumentaron de manera significativa, convirtiéndose en los más elevados desde los episodios registrados durante el año 2013.
- La oposición política venció en las elecciones presidenciales en Gambia y acabó con 22 años en el poder del mandatario Yahya Jammeh.
- En Nigeria, el aumento de las tensiones en Biafra, Delta del Níger, Kaduna y la región del “Middle Belt” deterioraron gravemente la situación de seguridad y estabilidad.
- Etiopía sufrió un grave deterioro de la situación como consecuencia de la represión gubernamental de las amplias protestas y movilizaciones sociales que causó la muerte de centenares de personas.
- Diversos hechos de violencia en Túnez provocaron la muerte de casi un centenar de personas, la mayoría de ellas en un incidente protagonizado por ISIS y fuerzas de seguridad en una ciudad próxima a Libia.
- La violencia en la región centroamericana del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) agravó la crisis de desplazamiento forzado.
- Bangladesh fue escenario de una grave tensión con múltiples asesinatos de activistas seculares y atentados por parte de grupos armados islamistas.
- Las relaciones entre India y Pakistán se deterioraron notablemente, con graves enfrentamientos diplomáticos y militares, incluyendo el intercambio de fuego en la frontera que separa a los dos países.
- La tensión en la península coreana se incrementó después de que Corea del Norte llevara a cabo dos ensayos nucleares y lanzara numerosos misiles balísticos.
- Turquía hizo frente a múltiples focos de tensión, incluyendo atentados atribuidos a ISIS y un golpe de Estado fallido, al que siguieron purgas masivas.
- En Egipto organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando medidas de acoso contra sectores disidentes y la desaparición de cientos de personas tras ser detenidas.
- Líbano siguió viéndose afectado por las dinámicas del conflicto armado en Siria y fue escenario de diversos episodios de violencia, mayoritariamente en zonas fronterizas.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2016. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2016. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2016.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2016

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
África⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka	2
	Recursos		=
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	3
	Autogobierno, Recursos		↑
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel	2
	Gobierno		=
Chad	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	1
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)	1
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	2
	Territorio		↑
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↑
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	2
	Gobierno		↑
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		=
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		=
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2016 con la del año 2015 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2016 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
5. Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en el 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Lesotho	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, oposición política	1
	Gobierno		↓
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁶	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Mozambique	Interna	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO	3
	Gobierno		↑
Níger	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)	2
	Gobierno, Sistema		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		↑
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda ⁷	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda ⁸	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	1
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		↓
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

7. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, en el informe *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

8. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, Fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)	3
	Gobierno		=
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares	2
	Gobierno		=
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		=
México	Interna	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.	2
	Sistema, Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		↓
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islami, JMB)	3
	Gobierno		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China – Japón	Internacional	China, Japón	2
	Territorio, Recursos		↑
Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁹	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	3
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	3
	Sistema		=
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	3
	Autogobierno, Identidad		=
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	3
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑

9. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Indonesia (Aceh)	Interna	Gobierno indonesio, Gobierno regional de Aceh, oposición política	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Kazajistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Nepal	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	3
	Gobierno, Sistema		↓
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Tailandia – Camboya	Internacional	Tailandia, Camboya	1
	Territorio		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		=
Europa			
Armenia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Chipre	Interna internacionalizada	Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Macedonia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Rusia (Ingushetia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Ingushetia, grupos armados de oposición	1
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Rusia (Kabardino-Balkaria)	Interna	Gobierno ruso, Gobierno de la República de Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición	1
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Serbia – Kosovo	Internacional ¹⁰	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	3
	Gobierno, Sistema		↑
Ucrania – Rusia	Internacional	Gobierno de Ucrania, Gobierno de Rusia, oposición política y social de Crimea, EEUU, OTAN, UE	2
	Gobierno, Territorio, Autogobierno, Identidad		↑
Oriente Medio			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	2
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel¹¹	Internacional	Irán, EEUU, Israel	1
	Sistema, Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)	3
	Sistema, Recursos, Territorio		↓
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

10. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

11. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Oriente Medio			
Yemen (sur)	Interna	Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur /Al-Hiraak al-Janoubi)	2
	Autogobierno, Recursos, Territorio		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2016

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2016, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2016 se identificaron 87 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 34 casos (39%), seguida de Asia, donde se registraron 20 casos (23%). Europa y Oriente Medio fueron escenarios de 14 y 11 casos cada una (16 y 13%), mientras en América se identificaron ocho (9%). Cabe destacar la existencia de ocho nuevos escenarios de tensión, con respecto a 2015. Entre ellos, en el continente americano los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras. En Asia, los escenarios de India (Assam) –considerado como conflicto armado en años anteriores– y Kazajistán. Y en Europa, los casos de Armenia, Turquía y Ucrania-Rusia. Por otra parte, varias situaciones de crisis sociopolítica dejaron de considerarse como tales, ante la reducción de la tensión en los últimos años.

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en la gran mayoría de los casos. El análisis del panorama de crisis en 2016 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con años anteriores, el 69% de los casos tuvo entre sus causas principales **la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** o la oposición al sistema político, social o ideológico de los Estados, lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder. Este factor de oposición al gobierno o sistema fue especialmente predominante en América (presente en todos los casos de tensión), África (74% de sus tensiones) y en Europa (71%), donde tuvo una presencia mayor que en años anteriores. En segundo lugar, cerca de la mitad de las tensiones (48%) tuvo como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. Se superó esa media en el continente europeo (79%), Oriente Medio (55%)

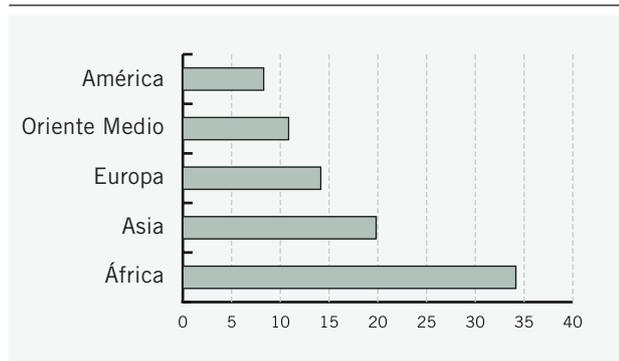
y Asia (55%). En tercer lugar, cabe destacar que en una tercera parte de los casos, el elemento de disputa por el control del territorio y/o recursos fue un factor especialmente relevante entre las causas principales, con mayor presencia en Asia (40%) y África (38%), si bien se trata de un elemento que alimenta de manera directa o indirecta, y en grados diversos, numerosas situaciones de tensión.

En línea con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (46 casos o un 53%), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (25 casos o un 29%) y casi una quinta parte fueron tensiones internacionales (16 casos o un 18%). En cuanto a la evolución de las tensiones, algo más de la mitad de los casos no experimentó cambios significativos (45 casos o un 52%), una tercera parte registró un deterioro con respecto a 2015 (29 casos o un 33%) y en cerca de un 15% de los casos se produjo una cierta mejoría (13 casos).

En términos de intensidad de las tensiones, durante 2016 más de la mitad presentaron una intensidad baja (47 casos o 54%), mientras cerca de una cuarta parte fueron tensiones de alta intensidad (21 casos o 24%) y algo más de una quinta parte fueron escenarios de intensidad media (19 casos o 22%). Como en años anteriores, África y Asia fueron los continentes con mayor número de tensiones de alta intensidad, con ocho y siete casos respectivamente. **Las tensiones de mayor gravedad en 2016 fueron: Angola (Cabinda); Etiopía; Etiopía (Oromiya); Kenya; Mozambique; Nigeria; RDC; Túnez; El Salvador; Bangladesh; RPD Corea-EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India (Assam); India (Manipur); India-Pakistán; Pakistán; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj); Turquía; Egipto; Israel-Siria-Líbano y Líbano.**

Algunas de estas tensiones de alta intensidad fueron escenario de hechos de violencia con unos umbrales de letalidad superiores al centenar de víctimas mortales. Además, algunas tensiones que durante 2015 habían experimentado niveles medios de intensidad, en 2016 sufrieron niveles elevados. Fue el caso en África de Angola (Cabinda), donde el grupo armado FLEC-FAC anunció la vuelta a las hostilidades y donde se registraron los peores incidentes en años; Etiopía, con

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2016



las mayores movilizaciones antigubernamentales de la última década y extrema dureza en la represión de las protestas, con más de medio millar de fallecidos (un millar según algunas fuentes); Etiopía (Oromiya), epicentro de la crisis que padeció el país, que se sumó a dinámicas locales de violencia anteriores; Mozambique, con los niveles de violencia política más elevados desde 2013, principalmente en las provincias cuyo control reclama el grupo opositor RENAMO; y RDC, escenario de una grave crisis política y social en torno a la expiración del mandato del presidente, Joseph Kabila, con decenas de víctimas mortales en las movilizaciones. En Asia, se incrementó notablemente la tensión en torno al programa armamentístico de Corea del Norte, con nuevos ensayos nucleares por Pyongyang, el lanzamiento de nuevos misiles balísticos y alertas sobre los avances tecnológicos del programa atómico. En Europa, Turquía hizo frente a una grave crisis de múltiples dimensiones, que incluyó atentados de gran escala atribuidos a ISIS y un intento fallido de golpe de Estado militar.

Durante 2016 se registraron 21 casos de tensiones de alta intensidad, la mayor parte de las cuales tuvieron lugar en África y Asia

Además de la letalidad, **las situaciones de tensión tuvieron otros impactos graves en seguridad humana. Entre ellos, se produjeron nuevos desplazamientos forzados de población, así como impactos específicos de las tensiones sobre población desplazada y refugiada.** Cabe destacar casos como el de Mozambique, principalmente a causa de las operaciones militares para desarmar a las milicias de RENAMO, con más de 11.000 personas desplazadas, si bien a finales de año las cifras se redujeron; Eritrea, país de origen de 38.791 personas que según Frontex cruzaron el Mediterráneo en 2015, si bien la cifra fue inferior a las 46.000 de 2014; la “región del Triángulo Norte” centroamericana (El Salvador, Guatemala y Honduras), donde se produjo un incremento del desplazamiento forzado, con especial impacto en jóvenes, mujeres y población LGTBI; India-Pakistán, donde el aumento de la tensión en 2016 llevó al desplazamiento de miles de civiles residentes en torno a la frontera, en operaciones de evacuación; Kenya, donde el anuncio del Gobierno de sus planes de cerrar

el campo de refugiados de Dadaab –que en diciembre de 2016 acogía en torno a 275.000 personas– generó numerosas llamadas de alerta humanitarias, si bien finalmente el Gobierno decidió posponer su cierre; y Líbano, donde se produjeron ataques contra población refugiada siria en respuesta a unas ofensivas suicidas atribuidas a ISIS.

Las crisis de 2016 incluyeron otros hechos de violencia específica contra civiles.

Entre ellos, secuestros temporales o continuados, como los cometidos por el LRA en el triángulo entre la RCA, RDC y Sudán del Sur (729 en 2016); asesinatos selectivos contra activistas, como defensores medioambientalistas en Honduras, con más de una decena en 2016 en ese país, o de activistas seculares y de minorías en Bangladesh; las graves cifras de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y prácticas de tortura en México, vinculadas a impunidad en la “lucha contra el narcotráfico”; o la persecución de colectivos profesionales específicos, como periodistas en numerosos países (entre ellos Turquía, el país con más periodistas encarcelados en 2016, con 81; seguido de China, con 38; Egipto, con 25; Eritrea, 17; y Etiopía, 16), entre otros. Además de impactos específicos, la violencia mediante atentados terroristas tuvo impactos indiscriminados sobre la población civil en diversas crisis sociopolíticas. Fue el caso de escenarios como Bangladesh, Turquía y Líbano, entre otros, con graves atentados en 2016, incluyendo ataques suicidas en lugares con gran densidad de civiles. Asimismo, la estrategia contra el terrorismo en muchas de las crisis sociopolíticas de 2016 tuvo graves impactos sobre la población civil organizada, a través del uso abusivo de legislación antiterrorista. Fue el caso, entre otros, de Egipto, donde se denunció la instrumentalización de políticas de “seguridad nacional” en la persecución de sectores disidentes, con el uso de prácticas de tortura, desapariciones, muertes en prisión, entre otras violaciones de derechos humanos; Turquía, donde se llevaron a cabo purgas masivas al amparo de la legislación de emergencia y antiterrorista, con denuncias de vulneraciones de derechos humanos; Bangladesh, donde se alertó de las tácticas de la Policía en la lucha antiterrorista; e Irán, donde se denunció persecución contra población sunní –incluyendo ejecución de presos kurdos– al amparo de la lucha contra ISIS. Asimismo, las tensiones se vieron influidas por dinámicas e impactos de género, que incluyeron el uso de violencia sexual y de género.¹²

Por otra parte, las crisis sociopolíticas durante 2016 incluyeron entre sus elementos aspectos relativos a procesos de justicia transicional.

Entre los hechos ocurridos durante el año, cabe destacar el inicio a finales de enero del proceso judicial en la Corte Penal Internacional contra el ex presidente de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo y el antiguo ministro de juventud Charles

12. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

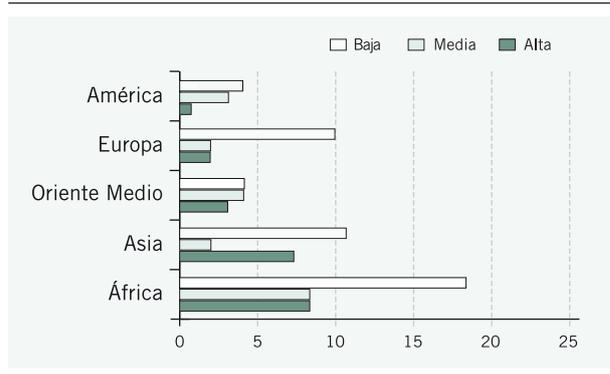
Blé Goudé, acusados de crímenes contra la humanidad por la violencia postelectoral a finales de 2010 y principios de 2011. Mientras, en Sri Lanka se creó una oficina de personas desaparecidas para investigar casos de desapariciones forzadas. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil señalaron que la medida parecía encaminada a servir de contrapeso a la exigencia de la comunidad internacional, incluida la ONU, de un proceso de justicia transicional con implicación internacional. Por otra parte, se acercaba el final del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que cerrará en 2017 tras más de dos décadas de existencia, si bien el trabajo en torno a casos inacabados será continuado por el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MICT, por sus siglas en inglés).

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, en 2016 el continente africano continuó siendo el principal escenario de crisis sociopolíticas a nivel global. Un 39% del total de contextos de tensión se produjeron en África (34 de los 87 casos). La mitad de las tensiones en África tuvo intensidad baja (18 casos), cerca de una cuarta parte una intensidad media (ocho casos) y una cifra similar una intensidad elevada (ocho casos). **Angola (Cabinda), Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenya, Mozambique, Nigeria, RDC y Túnez constituyeron los ocho escenarios de mayor gravedad en África.** Al mismo tiempo, cabe destacar que cerca de la mitad de las crisis sociopolíticas en África experimentaron un deterioro (16 casos) y un número equivalente evolucionaron sin cambios significativos, mientras solo en dos casos se identificó una mejoría (Sudán-Sudán del Sur y Lesotho). En relación a estos últimos, además de la reducción de la tensión en Lesotho, cabe destacar la decisión del régimen sudanés de reabrir las fronteras con su país vecino, cerradas desde 2011, año de la independencia de Sudán del Sur. La reapertura se interpretó como un paso histórico para la normalización de las relaciones entre ambos países y se dio en el marco del proceso de diálogo y medidas de confianza entre ambos.

Por otra parte, la mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (21 casos, o un 62%). El 20% fueron tensiones de carácter interno internacionalizado (siete casos), con elementos de internacionalización que incluyeron la participación de actores armados foráneos, regionales o internacionales (como en Kenya –con acciones del grupo armado islamista de Somalia al-Shabaab y creciente presencia de ISIS–, Burkina Faso –donde se registró un aumento de actividades armadas de grupos yihadistas regionales–, Côte d'Ivoire –con la perpetración del primer atentado yihadista en el país, por al-Morabitoun–, Níger –con acciones armadas de grupos yihadistas externos– y Túnez –con una ofensiva de ISIS contra edificios de la Policía y Guardia Nacional, entre otros hechos de violencia de grupos de adscripción regional

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



o internacional) y el papel activo de actores locales en la diáspora (como en Rwanda), entre otros. Asimismo, el 18% fueron tensiones internacionales (seis casos): África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. Cabe destacar que la tensión entre Eritrea y Etiopía asistió a una de las más graves confrontaciones desde el fin de la guerra entre ambos países (1998-2000), con un enfrentamiento militar en territorio eritreo; y que en el caso de Marruecos-Sáhara Occidental se asistió al despliegue militar marroquí en la “buffer zone” próxima a la frontera con Mauritania, lo que elevó la tensión con el Frente POLISARIO.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, en el continente africano se observó la prevalencia de disputas en torno a la oposición a las políticas de los respectivos gobiernos y/o sistemas. Este elemento estuvo presente en un 74% de los casos (25 contextos), porcentaje similar al del año anterior. Durante el año, esa incompatibilidad se materializó de diversas maneras, incluyendo **tensiones en torno a elecciones.** Así, entre las tensiones electorales, cabe destacar la grave crisis en Gambia, en medio de demandas de reforma electoral y represión de movilizaciones, no aceptación de los resultados por el presidente derrotado, despliegue de tropas de ECOWAS y resolución de la crisis tras una intensa mediación regional; el clima de tensión en las legislativas de Côte d'Ivoire; la tensión política en torno a las elecciones presidenciales en Níger, Djibouti, Chad y Uganda; y el incremento de tensiones en Kenya en torno a la proximidad de las elecciones de 2017, entre otros casos. También **destacaron las tensiones relativas a controversias en torno a límites de mandatos presidenciales en contextos con procesos electorales,** como los casos, entre otros, de RDC, con una grave crisis en 2016 por la expiración del mandato del presidente a finales de año y el aplazamiento de las elecciones; y de República de Congo, que asistió a un aumento de violencia en torno a unos comicios en que el presidente obtuvo un tercer mandato tras la anulación el año anterior del límite de periodos en el poder. También sobresalieron durante el año las **confrontaciones entre el Estado y sectores de oposición social y**

política. Fue el caso, entre otros, de Nigeria, con graves tensiones entre el Estado y el Movimiento Islámico de Nigeria –que pasó a ser calificado como grupo insurgente– y varios centenares de muertos en enfrentamientos entre el Ejército y seguidores del movimiento, en medio de alertas por los riesgos de repetición de un escenario como el relativo a Boko Haram. Cabe destacar también el caso de Etopía, ante la represión de las mayores movilizaciones antigubernamentales acontecidas en el país en la última década; el de Eritrea, donde continuó la grave crisis de derechos humanos; o el de Túnez, con la más grave convulsión social desde la revuelta que provocó la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Ali en 2011.

Asimismo, además de la oposición a los gobiernos o Estados, otras causas significativas durante el año en África fueron las luchas por el control de los recursos o el territorio (presente en un 38% de los casos o 13 escenarios) y las demandas identitarias y/o de autogobierno (otro 38% de los casos o 13 contextos). En relación a los recursos y territorio, continuó durante 2016 la violencia por fricciones comunitarias entre grupos pastoralistas y comunidades agrícolas en el centro de Nigeria, con al menos medio millar de víctimas mortales; y emergió de nuevo la violencia en la región petrolífera del Delta del Níger, alcanzando su punto más álgido desde 2009, año de la firma de la amnistía con los grupos en la región. En lo relativo a tensiones con dimensión identitaria o de autogobierno, sobresalió el caso de Angola (Cabinda), donde el grupo armado FLEC-FAC anunció la vuelta a las hostilidades y donde se registraron los enfrentamientos armados más graves en años. También tuvieron una presencia relevante durante el año las tensiones en Nigeria entre el Estado y movimientos secesionistas de la región sureña de Biafra, reactivadas en 2015 y que continuaron durante 2016.

En relación a las tensiones **en Asia, el continente se caracterizó por una gran heterogeneidad en cuanto a la tipología de las crisis sociopolíticas.** El 45% de las disputas en Asia tuvo carácter interno, mientras el 30% fueron de naturaleza interna internacionalizada y un 25% de carácter internacional. **Las tensiones internacionales incluyeron los casos de China-Japón; RPD Corea-EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India-Pakistán; y Tailandia-Camboya.** En términos de intensidad, un 55% de los casos fueron tensiones de baja intensidad (11 escenarios), mientras el 10% (dos casos) fueron de intensidad media y el restante 35% (siete casos) fueron de alta intensidad. Estas últimas incluyeron los contextos de Bangladesh; RPD Corea-EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India (Assam); India (Manipur); India-Pakistán y Pakistán. En conjunto, **los casos de alta**

El 74% de las tensiones en África tenía entre sus causas principales la oposición a los respectivos gobiernos o Estados

Las tensiones de alta intensidad en Asia constituyeron un tercio de las tensiones globales de mayor gravedad en 2016

intensidad en Asia supusieron una tercera parte de las tensiones de mayor gravedad en todo el mundo.

En lo que respecta a la evolución, el 50% de los casos no experimentaron cambios relevantes durante 2016, mientras que en un 25% se produjo un deterioro de la tensión y en otro 25% se asistió a una mejora de la situación de la conflictividad. Fue especialmente preocupante el deterioro experimentado en varias de las tensiones de carácter internacional. Entre ellas, la escalada de tensión entre India y Pakistán se materializó en enfrentamientos de gravedad y episodios de violencia en la Línea de Control y se vio influida por graves incidentes en Jammu y Cachemira, incluyendo el ataque más mortífero en décadas contra las fuerzas indias en Cachemira. También se deterioró gravemente la tensión política y militar entre China y Japón, así como las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur, con nuevos ensayos nucleares aún si no se produjeron incidentes militares. En clave positiva, cabe destacar la evolución en Nepal, donde la situación mejoró tras el deterioro y disturbios violentos de 2015 en protesta por los planes de reorganización territorial. Así, durante el año se levantó el bloqueo que impedía el abastecimiento de bienes esenciales, aliviando la grave situación humanitaria, y permitiendo el repliegue de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, en lo referente a las causas de las crisis sociopolíticas, el factor predominante en el continente asiático fue la dimensión de demandas identitarias y de autogobierno, presente como uno de los factores principales en un 55% de las tensiones (11 casos). Cabe destacar también que el 50% de las crisis sociopolíticas tenían entre sus factores principales la oposición al gobierno o sistema del país, en línea con años anteriores. Además, en un 40% de los casos, la lucha por el control del territorio y/o de los recursos fue una de las principales causas de la disputa.

América registró ocho tensiones durante el 2016 (un 9% del total global). Todas las tensiones identificadas en el continente americano tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas gubernamentales, lo que tuvo plasmación durante el año en forma de tensión entre sectores de poder (como en Venezuela, entre Presidencia y el nuevo Legislativo); grave represión de activistas (como en Honduras, señalado en 2016 como el país más peligroso para defensores medioambientales y uno de los más peligrosos para activistas de derechos humanos; o en México, con una grave crisis de derechos humanos, vinculada en parte a la impunidad en torno a la llamada “guerra contra el narcotráfico”); tensiones electorales y constitucionales (como en Perú, en torno a los comicios presidenciales, y en Bolivia, en torno a un referéndum constitucional que finalmente resultó en la no ampliación del límite

de mandatos presidenciales). Cabe señalar también que en una cuarta parte de las tensiones la lucha por los recursos y/o el territorio también fue un factor relevante entre las principales causas de las disputas. Por otra parte, los escenarios de tensión tuvieron intensidades diversas, incluyendo cuatro casos de baja intensidad (Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú), tres casos de intensidad media (Haití, México y Venezuela) y un caso de alta intensidad (El Salvador). **En relación a este último caso, El Salvador continuó siendo el país con la tasa de homicidios más alta fuera de zona de guerra, con 5.278 homicidios en 2016, y la tasa de feminicidios también más elevada del mundo**, a lo que se sumaron muertes de presuntos pandilleros a manos de fuerzas de seguridad en un contexto de grave incremento de dicha violencia entre Estado y pandillas.

Las tensiones en América fueron internas en su mayoría (siete de los ocho casos), mientras que la crisis sociopolítica en Haití continuó caracterizándose por su dimensión internacionalizada, estrechamente vinculada a la presencia de la misión de la ONU en el país, MINUSTAH. Cabe destacar también que durante 2016 los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala acordaron poner en marcha una fuerza regional con componente militar y policial para combatir a las bandas criminales y el narcotráfico en la llamada “región del Triángulo Norte”, que entró en funcionamiento con el nombre de “Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado”. Por otra parte, cabe mencionar que aunque no se identificaron contextos de tensión dentro de su territorio, EEUU se vio involucrado en tensiones internacionales fuera del continente americano, tanto en Asia como en Oriente Medio. Así, entre otras, EEUU fue un actor relevante en la tensión internacional en torno al programa nuclear norcoreano, en la disputa sobre el programa atómico iraní, y en la tensión entre Ucrania y Rusia.

En cuanto a Europa, la región registró el 16% (14 casos) de las tensiones a nivel global, si bien en su inmensa mayoría fueron tensiones de baja intensidad (72% o 10 de sus 14 casos). Un 14% de las tensiones (dos casos) fueron tensiones de intensidad media. Otro 14% (dos casos) fueron situaciones de alta intensidad, que además revistieron especial gravedad durante el año. Estos dos últimos incluyeron, en primer lugar, la disputa entre Armenia y Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que fue escenario en 2016 de la crisis violenta más grave desde el fin de la guerra en 1994, con choques durante el año que causaron entre un centenar y dos centenares de víctimas mortales; y, en segundo lugar, la crisis en Turquía, de naturaleza múltiple, y que incluyó un intento fallido de golpe de Estado –con 265

Las tensiones en el continente americano tuvieron un componente mayoritario de oposición a las políticas gubernamentales

En Europa, las dos tensiones de mayor intensidad, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Turquía, fueron escenario de una grave escalada en 2016

víctimas mortales y en torno a 2.200 heridos– y una serie de atentados de gran escala atribuidos a ISIS, con centenares de víctimas mortales. En cambio, la zona del Norte del Cáucaso, escenario otros años de tensiones de alta intensidad asistió a niveles bajos de conflictividad, excepto en el caso de Chechenia, que continuó afectada por la grave crisis de derechos humanos que asola a la república y que asistió a un aumento de las víctimas mortales relativas al conflicto entre el régimen y la insurgencia islamista.

En cuanto a las causas, la mayoría de las tensiones en Europa tenía entre sus causas principales la disputa en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, cuestión presente en un 79% de los casos (11 de las 14). Cabe señalar al respecto, la intentona en la región de Osetia del Sur de celebrar un referéndum relativo a una unión a Rusia, que finalmente fue aplazado. No obstante, a esa causa histórica de autogobierno en el continente europeo, se añade el factor vinculado a las disputas en torno a las políticas gubernamentales o la oposición al sistema, creciente en los últimos años y que en 2016 fue un factor principal en el 71% de los casos (10 tensiones). Fue especialmente relevante en casos como el de Turquía, pero también estuvo presente de forma destacada en forma de dinámicas de tensión localizada en casos tradicionalmente vinculados a disputas de autogobierno como Georgia (Abjasia) y Serbia-Kosovo o en nuevos escenarios de 2016, como Armenia. Por otra parte, el 43% de las tensiones (seis casos) fueron de carácter interno internacionalizado, el 36% (cinco casos) fueron tensiones internas, y el 21% (tres casos) fueron tensiones internacionales. Éstas incluyeron los casos de Serbia-Kosovo, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Ucrania-Rusia. De esas tres, los dos últimos casos experimentaron un nivel de intensidad elevado y una evolución negativa durante el año, generando numerosas alertas por el alcance internacional y posibles repercusiones. Así, cabe destacar que Rusia y Ucrania incrementaron la militarización en torno a Crimea y que dentro de la península anexionada por Rusia se agravó la crisis de derechos humanos y la persecución de la minoría tártara, con la prohibición de su órgano de representación (Mejlis), designado organización extremista. No solo evolucionaron de manera negativa esos dos casos durante el año. Un 36% de las tensiones (cinco casos) registraron un deterioro durante el año, otro 36% no experimentó cambios significativos, y un 28% (cuatro casos) asistió a una reducción de los niveles de tensión.

Por último, en lo que respecta a la situación en Oriente Medio, la región registró 11 tensiones, un 13% de las crisis sociopolíticas en el mundo, incluyendo el 14%

de las tensiones globales de intensidad elevada, frente al 38% de África o el 33% de Asia. Continuó siendo **la segunda región con mayor porcentaje de tensiones elevadas con respecto al cómputo total de tensiones por región**. Así, el 28% de las crisis en Oriente Medio fueron de gran intensidad: Egipto; Israel-Siria-Líbano; y Líbano, en línea con el año anterior. En relación a estos casos, cabe destacar que Egipto albergó durante el año las protestas más multitudinarias desde 2013, mientras continuó la grave crisis de derechos humanos que afecta al país, con múltiples denuncias de abusos, persecución y acoso a activistas y sectores disidentes. Líbano se vio afectado por múltiples elementos, como las consecuencias de la guerra en Siria –incluyendo ofensivas suicidas atribuidas a ISIS– y tensiones con Arabia Saudita. En lo que respecta a Israel-Siria-Líbano, la tensión persistió en niveles elevados, aunque se redujo la violencia con respecto a años anteriores. Además, un 36% (cuatro casos) fueron tensiones de intensidad media y otro 36% de intensidad baja. La inmensa mayoría de las tensiones en la región presentaron una situación similar a la del año anterior. Un caso, el relativo a la cuestión kurda en el noroeste de Irán se deterioró, con un incremento de víctimas mortales por hechos de violencia. Por primera vez en casi dos décadas se produjeron enfrentamientos entre tropas iraníes y el PDKI. Solo una tensión experimentó menor violencia que en 2015, el ya mencionado caso de Líbano, que – pese a la reducción en comparación con el año anterior – mantuvo niveles elevados de conflictividad.

La situación en la zona se caracterizó por su complejidad en cuanto a las causas de las disputas. **Un 64% de las tensiones (siete casos) tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema**. En ese sentido, el quinto aniversario de las revueltas en la región de 2011 motivó manifestaciones durante el año, como en Bahrein. En un 55% de las crisis (seis casos) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las causas principales. Asimismo, como en otras regiones, también la dimensión de disputa por los recursos y/o territorio fue una de las causas principales (en 27% de los casos), si bien este factor alimentó en diverso grado muchas situaciones. Por otra parte, el 46% de las tensiones (cinco casos) fueron de carácter interno internacionalizado. Entre los elementos de internacionalización se cuentan la presencia de grupos de adscripción regional o internacional (como ISIS en Líbano; AQPA en Arabia Saudita) o grupos locales con bases en el exterior o que lanzan ataques desde el exterior (PJAK y PDKI en Irán, entre otros) o la implicación de gobiernos externos. Además, cabe señalar la repercusión que tuvo sobre la región durante el año la tensa relación entre dos potencias clave en la zona, Arabia Saudita e Irán, agravada en 2016. La decisión de Riad de ejecutar a un destacado clérigo chií, Nimr al-Nimr – entre otros 47 condenados por delitos de terrorismo – generó manifestaciones y tensiones en varios países, como Bahrein, Líbano e Iraq e incidentes violentos en el propio Irán, motivando una grave crisis diplomática

y riesgos de más desestabilización en la región. Otro 36% de las tensiones fueron internas (cuatro casos) y el 18% (dos casos) fueron internacionales. Las tensiones internacionales en Oriente Medio abarcaban el caso de la disputa entre Irán y EEUU e Israel –entre otros actores– en torno al programa nuclear iraní, de enorme relevancia simbólica y material en la región, y que pese a la firma del acuerdo nuclear en 2015 asistió a algunos incidentes en 2016; y el caso de Israel-Siria-Líbano, afectado por las dinámicas bélicas regionales. Asimismo, hacia finales de año planeaba la incertidumbre sobre la región por las posibles repercusiones para las tensiones en Oriente Medio de la elección del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Mozambique	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabue) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

Las tensiones entre el Gobierno mozambiqueño y el principal grupo opositor RENAMO se intensificaron durante el año.

El origen de la tensión deriva de la crisis surgida tras las elecciones presidenciales y legislativas de 2014 y la demanda del grupo opositor de gobernar en las seis provincias del centro y norte del país donde obtuvieron la mayoría de votos en los comicios: Manica, Sofala, Tete, Zambesia, Nampula y Niassa. **Durante el 2016, los niveles de violencia política aumentaron de manera significativa, convirtiéndose en los más elevados desde los episodios de violencia que padeció el país en el año 2013.** Desde el mes de enero y hasta octubre, y según datos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), **se registraron 68 eventos de violencia política en diez provincias del país, frente a los 19 registrados durante el 2015 en seis provincias. Al finalizar el año, entre 77 y 110 personas habrían perdido la vida en diferentes incidentes violentos en el país relacionados con el conflicto.**¹³ La mayoría de los actos de violencia se concentraron en las seis provincias que RENAMO demanda y tuvieron que ver con bloqueos de carreteras y emboscadas realizadas por las milicias de RENAMO, principalmente contra población civil, así como enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. Durante el primer cuatrimestre del año se registró el mayor número de incidentes y víctimas mortales en el país. En el que fue el peor episodio registrado durante el año, los días 10 y 12 de abril, en un enfrentamiento directo en las provincias de Manica y Sofala, se reportaron al menos veinte combatientes de RENAMO y un soldado muertos. Ese mismo mes, campesinos del distrito de Gorongosa, provincia de Sofala y principal base de RENAMO, informaron del hallazgo de una fosa común con más de 100 cuerpos, aunque posteriormente la cifra varió, situándola algunos medios en alrededor de 15. Si bien las autoridades mozambiqueñas negaron la existencia de la fosa, la Comisión de Derechos Humanos de Mozambique informó de la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, sobre los cuales se especula sobre su posible vinculación con la violencia desatada en octubre de 2015. Los enfrentamientos armados entre los militantes de RENAMO y las fuerzas de seguridad continuaron a lo largo del año, dificultando los intentos de mediación abiertos en el país para resolver la crisis.¹⁴

La escalada de tensión en el país también se tradujo en un aumento de los desplazamientos forzados de población debido a la violencia. Las ONG Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras denunciaron que el origen principal del desplazamiento forzoso se debió a las operaciones militares del Ejército mozambiqueño destinadas a desarmar a las milicias de RENAMO iniciadas en octubre de 2015 en la provincia de Tete, así como a la intensificación de la violencia en Sofala

Los niveles de violencia política en Mozambique aumentaron de manera significativa en 2016, convirtiéndose en los más elevados desde los episodios registrados en el año 2013

y Zambesia. A raíz de estos hechos, a principios de 2016 ACNUR informó de un aumento significativo de personas que huían de los intensos enfrentamientos

entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes, buscando refugio en Malawi. Durante el mes de febrero, los datos de ACNUR recogieron 6.000 refugiados mozambiqueños en Malawi, en la aldea de Kapise, que ascendieron a 11.500 durante el mes de marzo. A finalizar el año, las cifras se habían reducido sustancialmente, registrando en el campo de refugiados de Kapise 2.300 personas, según datos presentados por la organización Freedom House. Paralelamente, a la situación de inestabilidad política en el país se le añadió

la inestabilidad económica y financiera generada a partir de la revelación de que el Gobierno de Mozambique no había informado de una deuda y préstamos por más de 1.000 millones de dólares frente al Credit Suisse y al banco ruso VTB. Estos hechos generaron que el FMI, el Banco Mundial y Reino Unido, suspendieran durante el mes de abril los préstamos de ayuda al país. Posteriormente, y tras una nueva revelación del no pago de otra deuda que ascendía a 1.400 millones de dólares, el grupo de donantes Programme Aid Partners también suspendió la ayuda financiera al país.

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel

Síntesis: Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites

13. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).

14. Véase el resumen sobre Mozambique en el capítulo 3 (Procesos de paz).

a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas. A finales de 2015, y tras la celebración de elecciones, el país cerró el periodo transicional y devolvió las instituciones a la ciudadanía.

El año en Burkina Faso estuvo marcado por el inicio de la primera legislatura del nuevo Gobierno post transición que logró estabilizar el país, así como por las diferentes causas judiciales que se mantuvieron abiertas contra los responsables de la represión del antiguo régimen, y por los ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista que operan en la región del Sahel. En este sentido, **si bien la situación política nacional mejoró sustancialmente en relación al año 2015, la situación de seguridad se agravó debido a un mayor registro de actividades armadas generadas por grupos yihadistas regionales.** Tras su triunfo en las elecciones presidenciales celebradas el 29 de noviembre de 2015, Roch Marc Christian Kaboré, candidato del partido Movimiento Popular para el Congreso (MPP), se convirtió en el nuevo presidente nacional, jurando el cargo el 29 de diciembre de 2015. **Con su llegada se inició una nueva etapa en el país, cerrando el período de transición iniciado con la caída de Blaise Compaoré a finales de 2014.** El 7 de enero, Kaboré designó nuevo primer ministro a Paul Kaba Thiéga, quien fue ratificado posteriormente por la Asamblea Nacional, conformando de esta forma el nuevo Gobierno burkinés. De manera paralela a la constitución de las nuevas estructuras ejecutiva y legislativa, el Estado prosiguió con las causas pendientes provenientes de la represión generada por el antiguo régimen. Luc-Adolphe Tiao, quien fuera ex primer ministro en la etapa de Compaoré, fue arrestado el 16 de septiembre después de su retorno del exilio en Côte d'Ivoire el 9 de septiembre, siendo acusado por su responsabilidad en los hechos represivos producidos contra el levantamiento ciudadano de octubre de 2014. Por otro lado, y en lo referente a la situación de tensión que aún permanece en el país relativa al intento de golpe de Estado fallido de 2015 por miembros del Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) –hoy ilegalizado–, durante el año se produjeron algunos episodios destacables. A principios de año se reportó que miembros de la disuelta guardia presidencial asaltaron un depósito de armas en Yimdi, a las afueras de la capital, siendo posteriormente detenidos. El 23 de enero, Eddie Komboigo, presidente del partido del expresidente Compaoré, Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP), fue arrestado a su regreso al país acusado de complicidad en el golpe, siendo liberado en mayo a la espera de juicio. Paralelamente, el tribunal militar creado para juzgar el golpe de Estado fallido emitió en enero una orden de arresto contra el presidente de la Asamblea Nacional de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, acusado de participar en el mismo, lo que generó malestar en el país vecino que se negó a extraditarle. Sin embargo, en abril la Corte Suprema de Burkina

Un comando armado vinculado con AQMI atacó en enero la capital burkinesa causando al menos 30 muertos

Faso, amparándose en razones procedimentales, ordenó la cancelación de las órdenes de arresto de los sospechosos de participar en el golpe, incluido Soro, así como también de las personas sospechosas del asesinato del ex presidente Thomas Sankara en 1987, incluida la que pesaba sobre el expresidente Compaoré, exiliado en Côte d'Ivoire y cuyo Gobierno le concedió la ciudadanía el 22 de febrero para evitar una posible extradición a Burkina Faso. Esta situación generó que el Gobierno destituyese al juez instructor del caso, nombrando un nuevo magistrado que reabrió las órdenes de detención. A su vez, en septiembre el Gobierno anunció que el ex general Yacouba Isaac Zida, ex primer ministro en el Gobierno de transición encabezado por Michel Kafando, y quien abandonó el país en febrero, será procesado por desertión. Posteriormente, el 21 de octubre, y tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad burkinesas y ex miembros del RSP producido a principios del mes, donde murieron dos ex guardias presidenciales y fueron detenidos otros 14, el Gobierno denunció que se planeaba un nuevo intento de golpe de Estado. Finalmente, durante el mes de octubre, el partido CDP y otros grupos vinculados con el antiguo régimen formaron un nuevo grupo opositor, denominado Coalición por la Democracia y la Reconciliación Nacional (CODER).

Por otro lado, y en lo que respecta a la violencia producida en el país por organizaciones armadas de corte yihadista que operan en la región del Sahel, durante el año se registraron diferentes incidentes que agravaron la situación de seguridad nacional. **En el peor episodio del año, el 15 de enero la capital burkinesa, Ouagadougou –que hasta el momento no había sufrido ningún atentado–, padeció un ataque reivindicado por el grupo yihadista de origen argelino al-Mourabitoun, vinculado con AQMI.** Un comando armado atacó durante horas varias instalaciones turísticas en el centro de la capital, dejando un balance de al menos 30 personas muertas –la mayoría ciudadanos extranjeros, entre quienes se encontraba la fotógrafa franco-marroquí Leila Alaoui– y alrededor de 50 personas heridas. Unas 126 personas fueron tomadas como rehenes en uno de los hoteles atacados y posteriormente liberadas. Tras el ataque una pareja australiana fue secuestrada en la ciudad norteña de Djibo, cercana a la frontera con Malí, por otro grupo armado vinculado a AQMI, Ansar Dine, de origen maliense. Tras los atentados el Gobierno aumentó los esfuerzos regionales y desplegó una operación conjunta con las fuerzas malienses en la frontera entre el 22 de febrero y el 6 de marzo. El grupo regional de combate al terrorismo denominado G-5 Sahel group, conformado por Burkina Faso, Mauritania, Malí, Níger y Chad, reforzó su cooperación y recomendó a sus miembros crear fuerzas de intervención rápida. A su vez, a mediados de junio **se dio a conocer en la zona el grupo autodenominado Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) –dirigido por Aduan Walid al-Saharawi, quien fuera uno de los comandantes de al-Mourabitoun–** adjudicándose

diferentes ataques en el país. A finales de año, en un ataque registrado en la frontera entre Burkina Faso y Níger, un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad burkinesas en la gendarmería de Nassoumbou, matando a 12 soldados.

Côte d'Ivoire	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI

Síntesis:

La discriminación política, económica y social hacia los marfileños originarios del norte del país se encuentra en la base de la grave crisis iniciada en el país en los años ochenta. Con un primer conflicto en 2002 y la reactivación de la violencia armada en 2010 tras las elecciones presidenciales, la estabilidad en el país continúa en ciernes. La conclusión de los enfrentamientos en abril de 2011 y la creación de un nuevo Gobierno, con el presidente Alassane Ouattara (de origen norteamericano) al frente del país, abrieron las expectativas para el cambio. La justicia y reparación a las víctimas, la transformación de leyes discriminatorias, la resolución de las disputas en torno a la propiedad de tierras y la reforma del sector de seguridad, son algunos de los grandes retos que enfrenta el país. La presencia de gran número de armas ligeras, la persistencia de la violencia en el oeste y la inestable frontera con Liberia, donde permanecen grupos de mercenarios, ponen en peligro una paz frágil.

El inicio de la segunda legislatura de Alassane Ouattara estuvo marcada por el primer atentado yihadista registrado en el país. El 13 de marzo, el grupo armado al-Morabitoun, vinculado a la red de al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) atacó un complejo turístico hotelero situado en la zona costera Grand Bassam. En el ataque perdieron la vida al menos 14 civiles (entre ellos cuatro europeos) y dos soldados marfileños y otras 33 personas resultaron heridas. El Gobierno informó también de la muerte de tres de los seis asaltantes a manos de las fuerzas de seguridad. En el momento del atentado Côte d'Ivoire se encontraba en alerta después de los ataques producidos contra instalaciones turísticas en Bamako y Ougadougou,¹⁵ debido a que el país fue considerado un objetivo de los movimientos yihadistas por su papel en la guerra de Malí y la cobertura dada a la operación francesa Barkhane. En el plano de política interna, el año estuvo marcado por la reforma constitucional y las elecciones legislativas celebradas a finales de año. En el marco de la reforma de la Carta Magna, el 6 de octubre, y después de meses de redacción por parte de un grupo de expertos designado por el presidente Ouattara, éste presentó al Parlamento el proyecto de la nueva Constitución, que incluyó medidas como la creación de la figura de vicepresidente, la formación de un Senado compuesto por antiguos cargos públicos, o la anulación

del decreto que obliga a que los progenitores de cualquier candidato presidencial hayan nacido en el país. **Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del borrador de la nueva Constitución, ésta se sometió a referéndum el 30 de octubre, siendo ratificada por el 93,42% de los votos, aunque la oposición no aceptó los resultados** ni la cifra oficial de participación, que el Gobierno situó en el 42,42% del sufragio. Luego del referéndum, el país celebró las elecciones legislativas el 18 de diciembre. Los comicios, que estuvieron envueltos en un clima de tensión entre el Gobierno y la oposición, dieron la victoria con mayoría absoluta –167 escaños de los 254– a la coalición gobernante Rally of Houphouëtists for Democracy and Peace (RHDP). Por otro lado, a finales de enero se inició el proceso judicial en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el ex presidente Laurent Gbagbo y el antiguo Ministro de la Juventud, Charles Blé Goudé, acusados de crímenes contra la humanidad por la violencia postelectoral desatada a finales de 2010 y principios de 2011 que dejó un balance de unas 3.000 víctimas mortales. La CPI también reclamó a Côte d'Ivoire la extradición de Simone Gbagbo, ex primera dama, para ser juzgada por los mismos crímenes, pero las autoridades marfileñas negaron la entrega, para que fuera juzgada en el país. Simone había sido condenada en 2015 a 20 años de cárcel, siendo considerada culpable de amenazar la seguridad del país, responsable de alterar el orden público y de organizar a grupos armados. El 31 de mayo se inició en Abidjan, capital nacional, el juicio contra ella bajo acusaciones de crímenes contra la humanidad. Posteriormente, y ante la negativa de Simone de comparecer en el mismo, el juicio continuó en su ausencia durante el resto de la vista. A su vez, el 18 de febrero, un tribunal nacional condenó a cadena perpetua a los militares Anselme Séka Yapo, Brunot Dogbo Blé y Séry Daleba, por el asesinato del ex líder de la junta y ex presidente, Robert Gueï, durante el golpe de Estado fallido de 2002. Finalmente, y en lo concerniente a la Misión de la ONU en el país (UNOCI), durante el mes de abril el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar las sanciones que pesaban sobre Côte d'Ivoire, y anunció el cierre de la misión de paz para el 30 de junio del 2017. El Consejo de Seguridad adoptó la resolución aseverando que la UNOCI –que cuenta con 4.000 tropas en la actualidad– cumplió con su mandato, luego de haber sido creada en el año 2004 para apoyar al país tras el fin de su guerra civil, y de ser posteriormente adaptada para responder a la crisis que se vivió en 2010.

Gambia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política

15. Véase el resumen sobre Burkina Faso en este capítulo.

Síntesis:

Yahya Jammeh ascendió al poder tras un golpe de Estado en 1994, derrocando al hasta entonces presidente Dawda Jawara, quien llevaba en el poder desde la proclamación de la independencia en 1965. Dos años después del golpe, el país volvió al gobierno civil y Jammeh abandonó el cargo militar fundando el partido político Alianza para la Reorientación y la Construcción Patriótica (APRC), con el que ganó las elecciones presidenciales de 1996. Desde ese momento, Jammeh se ha mantenido en el poder, ganando en otras tres elecciones presidenciales diferentes (2001, 2006, 2011) –que no han estado exentas de acusaciones de fraude–, y consolidando un régimen basado en políticas autoritarias y represivas contra la oposición.

Durante todo el año aumentaron en Gambia las tensiones políticas generadas por las demandas populares de reforma del sistema electoral y mayor libertad de expresión, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad gambianas. Los partidos opositores iniciaron el año solicitando al Gobierno la reforma del sistema electoral antes de las elecciones previstas para diciembre de 2016, lo que fue rechazado durante el mes de enero en el Parlamento debido a la mayoría de escaños del partido de Gobierno, la Alianza para la Reorientación y la Construcción Patriótica (APRC, por sus siglas en inglés). Una manifestación pacífica celebrada a mediados de abril en demanda de reforma electoral y libertad de expresión fue disuelta por las fuerzas de seguridad. Se detuvo a unas 50 personas, entre ellas a destacados miembros del partido opositor, Partido Democrático Unido (UDP), como Fatoumata Jawara, Ousainou Darboe o Solo Sandeng. Este último posteriormente murió bajo custodia policial. La muerte de Sandeng generó más protestas ciudadanas que fueron respondidas con mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad –que detuvieron a nuevos líderes de la oposición–, así como con respuestas judiciales desproporcionadas. Otro miembro del UDP, Solo Krummah, fue arrestado en el mes de mayo, ingresando posteriormente en el hospital debido a lesiones producidas bajo custodia policial, falleciendo el día 20 de agosto. Tanto las Naciones Unidas como el Gobierno de EEUU solicitaron al Gobierno presidido por Yahya Jammeh una investigación independiente sobre ambas muertes. Durante el mes de junio, el presidente Jammeh atribuyó al grupo étnico mayoritario en el país, mandinka, estar detrás de las movilizaciones y protestas populares, acusándolos de enemigos y amenazando con “matarlos uno por uno”, declaraciones que fueron duramente condenadas por el consejero especial de las Naciones Unidas sobre el genocidio.

En medio de este clima de protestas y tensión, los siete partidos opositores presentaron durante el mes de septiembre a sus candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 1 de diciembre. El 14 de octubre, los siete partidos anunciaron que presentarían un único candidato para poder competir con Jammeh.

La negativa del presidente de Gambia Yahya Jammeh a reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales generó una crisis que fue resuelta tras la intervención de la ECOWAS

Adama Barrow, quien había sido elegido el candidato del UDP luego de la detención y encarcelación de su líder Ousainou Darboe, fue designado candidato opositor. Finalmente, **el 1 de diciembre se celebraron las elecciones presidenciales en el país, las cuales dieron la victoria a Barrow con el 43,3% de los votos, frente al 39,6% que obtuvo el presidente Jammeh.** En un primer momento, Jammeh, quien llevaba 22 años en el poder, aceptó los resultados de los comicios, pero posteriormente acusó a la comisión electoral de no haber realizado el escrutinio de los sufragios correctamente, negándose a reconocer los resultados y demandando la celebración de nuevas elecciones. Esta situación generó una profunda crisis política en el país, que hizo que organismos como la UA, la ECOWAS o la ONU interviniesen instando a Jammeh a aceptar la derrota electoral y a respetar la democracia. El 13 de diciembre, una comisión de alto nivel de la ECOWAS encabezada por Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia, y por Muhammadu Buhari, presidente nigeriano, se reunió por separado con Jammeh y con Barrow en Banjul, capital gambiana, sin lograr acuerdos. Ese mismo día las fuerzas de seguridad gambianas tomaron la sede de la Comisión Electoral en Gambia. El 17 de diciembre, en la cumbre de Jefes de Estado de la ECOWAS celebrada en Abuja, Nigeria, ésta reconoció oficialmente la victoria de Barrow. La ECOWAS nombró a Buhari y a John Dramani Mahama, presidente saliente de Ghana, coordinadores del equipo de mediación, y comunicó que las fuerzas regionales se encontraban en alerta ante una negativa de Jammeh de entregar el poder el 19 de enero, fecha en la que concluía su mandato. El 31 de diciembre, **Jammeh declaró que el despliegue de las fuerzas de la ECOWAS en el país sería una “declaración de guerra” y se negó a reconocer su derrota.** Finalmente, el 19 de enero de 2017, Adama **Barrow tuvo que ser investido presidente en la embajada de Gambia en Senegal, mientras en el país entraban las tropas de la ECOWAS ante la negativa de Jammeh de abandonar el poder.** Tras intensos días de negociación, Jammeh cedió y se exilió en Guinea Ecuatorial, vía Conakry, concluyendo de esta forma sus 22 años de poder en el país.

Guinea-Bissau

Intensidad: 1

Evolución: =

Tipología: Gobierno
Interna internacionalizada

Actores: Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, redes internacionales de narcotráfico

Síntesis:

La historia de Guinea-Bissau desde su independencia de Portugal en 1974 incluye una sucesión de guerras civiles

y golpes de Estado que han impedido al país alcanzar la estabilidad política además de abortar cualquier intento de funcionamiento democrático. La gran influencia de las Fuerzas Armadas sobre la realidad política del país y los enfrentamientos entre partidos que representan a diferentes grupos étnicos suponen un gran obstáculo para el logro de la paz. La ruptura del pacto de estabilidad firmado en 2007 entre los principales partidos políticos fue, una vez más, una oportunidad perdida para poner fin a la dinámica violenta que domina la vida política. El impacto cada vez mayor de las redes del narcotráfico internacional en África Occidental se había convertido en un factor añadido a la crisis. El asesinato del presidente, Joao Bernardo Vieira, en marzo de 2009 supuso el inicio de una nueva época de inestabilidad. En abril de 2012 el Ejército perpetró un nuevo golpe de Estado tras una primera ronda en las elecciones legislativas en las que ganó el candidato del PAIGC, que ocupaba el poder, y que fue cuestionada por parte de la oposición, pese al respaldo de los observadores internacionales. Tras el golpe se inició un nuevo proceso de transición.

La crisis política en el país, producto de la confrontación por la designación del cargo de primer ministro entre el presidente, José Mario Vaz, y la facción dominante del partido de Gobierno, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), se mantuvo durante todo el año.

Desde agosto de 2015, momento en el que estalló la crisis debido al cese por Vaz del entonces primer ministro, Domingos Simoes Pereira, y hasta finales de 2016, el país tuvo cinco primeros ministros sin lograr resolver la disputa. Tras la destitución de Pereira, el presidente Vaz nombró a Baciro Djá nuevo primer ministro, desatando la crisis política que obligó al presidente a destituir a Djá en septiembre de 2015, y a nombrar a Carlos Correia, propuesto por la facción dominante del PAIGC, como cabeza del Gobierno. Sin embargo, este movimiento no logró detener la crisis debido a las desavenencias entre el presidente y el nuevo primer ministro. Después de meses de disputas que impidieron la conformación de un nuevo Gobierno, el 12 de mayo el presidente Vaz disolvió el Gobierno y encargó al partido en el poder (PAIGC) la formación de un nuevo gabinete. La decisión generó momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad impidieron a los ministros la entrada a sus oficinas. Frente a la oposición de la facción principal del PAIGC, el 26 de mayo Vaz creó un “gobierno de iniciativa presidencial” con el apoyo del Partido de la Renovación Social (PRS) y de 15 diputados disidentes del PAIGC, y nombró nuevamente a Baciro Djá como primer ministro. El bloque principal del partido opositor PAIGC en el Congreso rechazó la nominación de Djá e hizo un llamamiento a la movilización ciudadana que conllevó enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. ECOWAS y el Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron su preocupación por la situación política e hicieron un llamamiento al diálogo. El Consejo de Seguridad se dirigió también a las Fuerzas Armadas y de seguridad del país para que éstas no interfirieran en la situación política. En medio de este clima de tensión, ECOWAS anunció el 4 de junio la prolongación del

Desde agosto de 2015 y hasta finales de 2016 Guinea-Bissau tuvo cinco primeros ministros sin lograr resolver la estabilidad política

mandato de su misión militar en el país (ECOMIB) hasta junio de 2017. Posteriormente, los días 14 y 15 de agosto, y bajo la mediación del organismo regional, se produjo una primera reunión para reanudar el diálogo político y tratar de resolver la crisis entre el primer ministro, el presidente y los principales dirigentes políticos de los partidos PAIGC, PRS y União para un Mudança (UM). El 10 de septiembre el equipo de mediadores de ECOWAS visitó el país y logró que el Gobierno y la oposición acordaran un plan de seis puntos para resolver la crisis, el cual incluyó la celebración de un diálogo inclusivo, la formación de un gobierno consensuado y la búsqueda de reformas constitucionales y electorales. Entre el 11 y 14 de octubre se celebró en Conakry, capital de la vecina Guinea, otra reunión entre todas las fuerzas políticas donde se discutió la puesta en marcha de los seis puntos planteados anteriormente. El diálogo finalizó con la firma del Acuerdo de Conakry el 14 de octubre, en el que se estableció la elección por consenso de un nuevo primer

ministro que se mantendrá en el cargo hasta las elecciones legislativas de 2018. El acuerdo también incorporó a la cámara parlamentaria a los 15 diputados disidentes del PAIGC que habían sido suspendidos. Posteriormente, el presidente Vaz disolvió el Gobierno de Djá el 14 de noviembre y nombró al ex consejero presidencial Umaro Sissoco Embaló, nuevo primer ministro. Sin embargo, la facción dominante del PAIGC rechazó su nombramiento, denunciando que su designación rompía con el pacto de Conakry. Sissoco anunció el 12 de diciembre la formación de un nuevo ejecutivo frente a la oposición del PAIGC, lo que mantuvo la crisis política abierta al finalizar el año.

Níger	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)

Síntesis:

En el año 2009 un golpe de Estado acabó con el Gobierno de Mamadou Tandja, después de que éste iniciara una serie de reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Posteriormente, las elecciones de enero y marzo de 2011 restauraron el sistema democrático en el país después de que la Junta Militar cumpliera con el calendario establecido para el retorno del poder a la sociedad civil. Pese a la normalización de la situación en el país persiste la inestabilidad generada por la presencia de células del grupo armado argelino AQMI y otros grupos armados que operan en la región de Sahel.

La situación política nacional estuvo marcada por la celebración de las elecciones presidenciales y las tensiones entre el Gobierno y la oposición, así como por

el aumento de la inestabilidad en materia de seguridad en diferentes regiones fronterizas debido a las acciones armadas de grupos yihadistas externos. El 21 de febrero se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país en un clima caracterizado por la tensión y las manifestaciones de los grupos opositores. A los comicios concurrieron un total de 15 candidaturas, incluida la de Hama Amadou, quien se encuentra en prisión desde su regreso del exilio en 2015. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) publicó los resultados de los comicios días después, dando la victoria con el 48,45% de los votos al presidente Mahamadou Issoufou, mientras que Hama Amadou, principal candidato de la oposición, obtuvo el 17,76%. La oposición se negó a reconocer los resultados y boicoteó la segunda vuelta electoral, celebrada el 20 de marzo, lo que facilitó la reelección del presidente Issoufou con el 92,49% de los votos. En este clima de tensión, Issoufou solicitó a la oposición la apertura de una mesa de diálogo nacional, a la que se sumó sin muchas expectativas la coalición opositora COPA. El presidente había prometido la conformación de un Gobierno de unidad nacional, sin embargo, el Gobierno presentado el 11 de abril estuvo compuesto principalmente por miembros del partido gobernante, el Partido Nigeriano por la Democracia y el Socialismo (PNDS). Días después, el 17 de abril, la oposición dio por finalizado el boicot que mantenían a las instituciones del país y se mantuvo en el Consejo Nacional para el Diálogo Político (CNDP). A finales de año se pospusieron las elecciones locales previstas para enero de 2017, para tratar, según el Gobierno, de armonizar la ley electoral, hecho que supuso el boicot al CNDP de la oposición, que afirmó que el aplazamiento de los comicios era ilegal.

Por otro lado, **durante el año se mantuvo el clima de inseguridad en varias regiones fronterizas del país debido a ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista.** La región sureña de Diffa, fronteriza con Nigeria, siguió padeciendo los ataques de la insurgencia nigeriana de Boko Haram¹⁶ cuya mayor ofensiva se registró durante el mes de junio en un ataque que mató a 26 soldados nigerinos en la ciudad de Bosso, obligando al Gobierno nigerino a solicitar ayuda y la intervención de tropas de la fuerza militar regional (MNJTF). El incremento de los ataques de Boko Haram obligó al Gobierno a extender el estado de emergencia en la región, el cual había sido decretado el año anterior. Por otro lado, la zonas fronterizas con Burkina Faso y Malí, al oeste del país, también sufrieron durante diversos momentos del año la presión de diferentes movimientos armados vinculados con al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de corte yihadista. En el que fue el peor ataque de esta naturaleza, un grupo proveniente de Malí atacó el 6 de octubre una posición del Ejército en Tazalit, región de Tahoua, matando a 22 soldados.

Durante ese mes, el autoproclamado Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) realizó sin éxito una acción de liberación de una prisión cerca de Niamey. El deterioro de la seguridad en el país hizo que Alemania –cuya canciller Angela Merkel se encontraba de visita de Estado en Níger durante el mes de octubre– anunciara un fondo de 27 millones de euros en apoyo a la lucha antiterrorista en el país y se comprometiera al envío de tropas a Níger para apoyar a la Misión de la ONU en Malí (MUNUSMA). A su vez, durante septiembre, el grupo armado Movimiento por la Justicia y la Rehabilitación del Níger, oriundo del noreste del país, amenazó con recurrir a las armas para defender los derechos de la minoría tebu y proteger el medio ambiente debido a la gestión del Gobierno de los yacimientos petrolíferos en la región.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

Las tensiones políticas en el país proliferaron durante el año en varias regiones (norte, centro y sur) y, conjuntamente con las crisis procedentes de la guerra de Boko Haram¹⁷ y del reinicio de la violencia en la región del Delta del Níger, contribuyeron a generar un grave deterioro de la situación de seguridad y estabilidad en Nigeria.¹⁸ Durante el 2016 aumentaron las tensiones derivadas de las reclamaciones secesionistas en la región de Biafra; se agudizó el enfrentamiento entre el Estado nigeriano y el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés), de orientación chií, en los estados norteños de Kaduna, Kano y Bauchi; y se

16. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

17. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

18. Véase "Nigeria: Múltiples frentes violentos aumentan la desestabilización en el país" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

mantuvieron –aunque con menor intensidad que en el año 2014– los enfrentamientos intercomunitarios entre grupos pastoralistas y agricultores en la región central del país conocida como “Middle Belt” (“cinturón medio”, debido a que hace alusión a la franja central que atraviesa el país de este a oeste). A su vez, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas, que han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, incrementaron la respuesta violenta y profundizaron las crisis abiertas. Por otro lado, la crisis económica que atravesó el país durante el 2016, debido a la caída del precio del petróleo y la reducción de su capacidad productiva por la inseguridad en el Delta del Níger,¹⁹ aunada a la depreciación de su moneda nacional, agravó la situación de inestabilidad nacional.

En la región sureña de Biafra las tensiones entre el Estado y los movimientos pro secesionistas, Indigenous People of Biafra (IPOB) y Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB), que se habían reiniciado en agosto de 2015, se mantuvieron a lo largo del año debido en gran parte a la detención y encarcelación del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, el 14 de octubre de 2015. En enero, en un enfrentamiento entre miembros del IPOB con las fuerzas de seguridad en Aba, estado de Abia, se reportaron 18 manifestantes muertos, 30 heridos y 26 arrestados. Posteriormente, en el que fue el peor episodio del año en la región, el 30 de mayo, a raíz de la conmemoración del 49° aniversario de la declaración de la República de Biafra, Amnistía Internacional reportó que al menos 60 personas fueron asesinadas a tiros y otras 70 resultaron heridas. La ONG, en un informe hecho público en noviembre, denunció cómo las fuerzas de seguridad nigerianas, encabezadas por el Ejército, desarrollaron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales contra el movimiento pro-Biafra IPOB, que costó la vida de al menos 150 manifestantes pacíficos en la parte sureste del país entre agosto de 2015 y agosto de 2016. Fuentes militares negaron las acusaciones realizadas por Amnistía Internacional, describiendo las denuncias como infundadas. Por otro lado, a final de año se dio a conocer un fallo judicial por el que el juicio contra Kanu, el líder del IPOB que será juzgado conjuntamente con Chidiebere Onwudiwe, Benjamin Madubugwu y David Nwawuisi, será realizado en secreto. El dirigente biafreño está acusado de sedición, incitación del odio étnico y traición, cargos que le podrían acarrear la pena de muerte. La decisión de la jueza del Tribunal Supremo Federal de Abuja, Binta Nyako, fue duramente condenada por la Organización de Libertades Civiles (CLO), el MASSOB y por el Grupo de Reflexión Igbo, entre otros, por permitir la opacidad.

En lo referente a las tensiones que mantiene el Estado con el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN), a lo largo

del año la situación siguió empeorando a raíz de la detención del líder del IMN, Shaykh Ibrahim El-Zakzaky, producida después de los duros enfrentamientos registrados durante el mes de diciembre del 2015. En esa ocasión, se produjo en el estado de Kaduna un supuesto intento de asesinato del jefe del Ejército nigeriano, general Tukur Buratai, que conllevó enfrentamientos entre el Ejército y los seguidores del IMN –musulmanes chiíes–, que dejaron un balance de alrededor de 300 personas muertas y la detención de El-Zakzaky, quien continuó en prisión. El líder espiritual islámico de Nigeria, el sultán de Sokoto, denunció el uso de la violencia contra los seguidores del IMN y la detención de El-Zakzaky, y advirtió que este tipo de acciones y represión por parte del Ejército podría provocar una nueva insurgencia en el país. A lo largo del año, se mantuvieron las movilizaciones de protesta y se registraron algunos incidentes violentos en los estados norteños. En noviembre se produjo otro enfrentamiento directo entre seguidores del IMN y la Policía en el estado de Kano, en una marcha organizada por los musulmanes chiíes, que dejó un policía y 19 manifestantes muertos. Ese mismo día, se reportó la muerte de otros 134 miembros del movimiento en diferentes focos de violencia registrados en las ciudades de Funtua, Kaduna y Sokoto. A principios de diciembre el gobernador del estado de Kaduna, Nasiru El-Rufa'i, declaró oficialmente al IMN grupo insurgente, lo que conllevó la condena de la organización nigeriana Muslim Rights Concern, advirtiendo que la declaración entraba en una peligrosa dimensión, recordando a las autoridades de Kaduna que deberían de aprender de la historia del estallido de la violencia de Boko Haram a raíz de la represión gubernamental, en una clara advertencia de cómo esta declaración puede generar la radicalización y movilización de los seguidores del IMN. La declaración realizada por el estado de Kaduna se realizó tras darse a conocer la orden del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno federal a liberar al líder del IMN, Ibrahim El-Zakzaky, en un plazo de 45 días, así como a pagar una multa por detención ilegal.

Finalmente, y en otro de los graves escenarios de tensión presentes en el país, **durante el año se siguieron registrando continuos ataques derivados de fricciones comunitarias y enfrentamientos entre grupos pastoralistas y asentamientos agrícolas, sobre todo producidos en la región central del país conocida como “Middle Belt”** entre grupos nómadas pastoralistas hausa-fulani y comunidades agrícolas. En el mes de febrero se registraron más de cien muertos en un enfrentamiento entre pastores fulani y comunidades locales del área de Agatu, estado de Benue, que desembocó en el decreto de apertura de una investigación oficial para determinar lo ocurrido. Durante el mes de abril, en tres ataques diferentes registrados en los estados de Taraba, Benue y Enugu, entre 88 y 102 personas perdieron la vida.

19. Véase el resumen sobre Nigeria (Delta del Níger) en este capítulo.

En junio, supuestos pastores fulani mataron a unas 59 personas en el área de Logo, estado de Benue. En el mes de agosto se registraron diferentes episodios de violencia comunal y religiosa en los estados de Kaduna, Kwara, Níger e Imo, que reportaron al menos 47 muertos. En octubre, en un ataque perpetrado supuestamente por pastores fulani en la ciudad de Godogodo, estado de Kaduna, entre los días 15 y 16, al menos 20 personas murieron y, posteriormente, otros 14 fulani fueron asesinados un día después por una turba en la ciudad de Kaduna en represalia. El 21 de noviembre otras 155 personas fueron asesinadas en un ataque realizado por supuestos ladrones de ganado en el estado de Zamfara. A su vez, el 13 de noviembre, cinco aldeas en Kaura, Kaduna, fueron atacadas dejando un balance de al menos 43 muertos.

Nigeria (Delta Níger)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada

Síntesis:

La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los grupos armados que decidieran dejar la lucha armada. El ofrecimiento de programas de reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Sin embargo, el estancamiento de los proyectos de reinserción y desarrollo prometidos por el Gobierno ha vuelto a propiciar el retorno a la lucha armada por algunos actores.

La violencia volvió a emerger durante el 2016 en la región sureña del Delta del Níger –conformada por los estados de Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo y Rivers–, representando el punto más álgido desde el año 2009, momento en el cual se firmó la amnistía en la región y se iniciaron los programas de reinserción y desarrollo. Con la llegada del presidente Buhari al poder, en mayo de 2015, el Gobierno declaró su intención de reducir los fondos de los programas de DDR impulsados en el Delta, se puso fin a los

contratos de seguridad con ex militantes, se abrieron investigaciones contra líderes regionales por fraude, se recortó el presupuesto del programa de amnistía en un 70% y se canceló la construcción de la universidad marítima. Estos hechos, aunados a los pocos avances en la reducción de los agravios y las desigualdades en la zona (mala redistribución de los ingresos del petróleo, falta de desarrollo de infraestructuras, pocas oportunidades de empleo, entre otros) desembocaron en el repunte de la violencia a inicios de año, que tuvo en el segundo trimestre del año sus momentos de mayor conflictividad y violencia.

A mediados del mes de enero se registraron los primeros ataques contra intereses petrolíferos en la región, con sabotajes a varios oleoductos y gaseoductos en el área de Warri, estado de Delta. En respuesta, el Gobierno anunció la ampliación hasta 2017 del programa de amnistía, el cual estaba previsto que finalizase en diciembre de 2015. El día 3 de febrero, el grupo armado Niger Delta Avengers (NDA) proclamó su formación, reivindicó los ataques producidos durante el mes de enero y prosiguió con nuevas acciones de sabotajes. En el segundo trimestre del año, y frente al deterioro de la situación de seguridad en la región, el presidente Buhari anunció la planificación de una fuerza multinacional para patrullar el Golfo de Guinea y hacer frente a la piratería y ataques contra las instalaciones petrolíferas. A su vez, en mayo el Gobierno declaró que emplearía toda la fuerza para contener la violencia del NDA y otros grupos armados en la región, debido al fuerte impacto en la producción de petróleo, que se redujo a la más baja en dos décadas, y que también tuvo un impacto negativo en el suministro eléctrico nacional. El NDA realizó diferentes ataques contra instalaciones operadas por Chevron, Shell, Nigeria Agip Oil Company (NAOC) y Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) en los estados de Delta y Bayelsa. Además en mayo un nuevo grupo armado hizo su aparición en la región, el Red Egbesu Water Lions (REWL), con vínculos con el movimiento secesionista biafreño, demandando al Gobierno la excarcelación de Nnamdi Kanu, líder del IPOB. Los ataques producidos contra instalaciones petrolíferas redujeron durante el mes de junio la producción de crudo y de energía eléctrica a la mitad, según anunció la compañía petrolífera de propiedad estatal, NNPC. El 6 de junio, el Gobierno ofreció la apertura de negociaciones a los diferentes grupos armados, pero el NDA lo rechazó dos días después. El Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND), antiguo grupo armado del Delta, exhortó el 12 de junio al NDA a realizar un cese al fuego y unirse a la mesa de negociación con ellos y el Gobierno Federal. Sin embargo la violencia prevaleció y el NDA se atribuyó al menos 14 ataques entre el 1 y el 24 de julio en los estados de Delta, Rivers, Bayelsa y Akwa Ibom. El 20 de agosto, y tras meses negándose a la negociación con el Gobierno, el NDA anunció un alto el fuego unilateral para dar una oportunidad a la apertura de negociaciones, apoyando la designación de Edwin Clark, histórico y veterano líder ijaw, para encabezar las negociaciones con las autoridades. Sin embargo, un mes

después, el 23 de septiembre, el NDA rompió el alto el fuego con un ataque contra un oleoducto en Bonny, estado de Rivers. La ruptura de la tregua generó que tanto el MEND, como el líder del foro consultivo Pan-Niger Delta Coastal States Stakeholders Consultative Forum, (PANDEF), Edwin Clark, condenaran duramente la renovación de las hostilidades. El 29 de septiembre el grupo armado denominado Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM) reivindicó un atentado contra un oleoducto en el estado del Delta. A su vez, ese mes también hizo su reaparición otra organización armada, Iduwini Volunteers Force (IWF) ubicada en el área de Ekeremor, estado de Bayelsa. En este contexto, el Gobierno nigeriano puso en marcha una operación militar denominada Operación Sonrisa de Cocodrilo, desplegando a al menos 3.000 soldados. El 17 de septiembre el Ejército nigeriano informó que hasta la fecha la operación había matado a 23 militantes y destruido 38 campamentos insurgentes en el Delta del Níger. En octubre la violencia disminuyó, mientras se observaron diferentes indicios sobre el reinicio de las negociaciones. El último trimestre del año se inició con conversaciones informales entre el Gobierno y líderes del PANDEF, aunque persistieron los ataques a oleoductos en los estados de Bayelsa y Delta. Los grupos armados NDA y NDGJM condicionaron su participación en la mesa de negociación a la retirada de las tropas gubernamentales de la región. La organización rebelde IWF condicionó el logro de la paz a la desviación directa del 13% de los ingresos petrolíferos a las comunidades, en vez de ir al Gobierno estatal. A finalizar el año, las conversaciones informales se mantenían en la zona.

Cuerno de África

Djibouti	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)

Síntesis:

Djibouti es un pequeño país del Cuerno de África que logró la independencia de Francia en 1977. Creado artificialmente por el colonialismo, en base a razones estratégicas, el nuevo Estado depende de su puerto como principal recurso a través del cual Etiopía canaliza gran parte de su comercio exterior. Su situación es también estratégica para el control del tráfico marítimo en el Mar Rojo y su proximidad a Somalia es un acicate para el establecimiento de misiones militares para controlar desde Djibouti las acciones de piratería en las aguas somalíes, así como para disponer de una presencia militar en el continente africano. El sistema político está controlado por el Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP) y funciona como un sistema de partido único. La

oposición política está permitida desde 2002, aunque boicoteó las elecciones de 2005 y 2008 por la ausencia de libertad de expresión y las presiones gubernamentales. Agrupada en la coalición Union pour l'Alternance Démocratique (UAD), se presentó a las elecciones de 2013 en el marco de una nueva coalición, la Union pour la Salut National (USN), pero rechazó los resultados oficiales que le atribuían 10 de los 65 escaños del Parlamento –nunca se publicaron los resultados definitivos– lo que provocó una grave crisis política, resuelta con el acuerdo del 30 de diciembre de 2014 bajo presión de EEUU y la UE. Por otra parte, en los años noventa tuvo lugar una guerra civil liderada por el grupo armado Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie (FRUD), surgido de la comunidad afar, marginada de las instituciones políticas, controladas por sectores procedentes del subclan somalí issa. En 1994 el núcleo mayoritario del FRUD alcanzó un acuerdo de paz, pero algunos sectores minoritarios de la coalición armada han permanecido activos desde entonces.

En **Djibouti, la primera parte del año se vio marcada por la celebración de las elecciones presidenciales el 8 de abril, que el presidente Ismail Omar Guelleh (68 años), en el poder desde 1999, volvió a ganar**, lo que supone su cuarto mandato y en principio, según declaró él mismo, el último. Guelleh se impuso con el 87% de los votos en la primera vuelta. Las elecciones fueron criticadas por la oposición y los grupos de defensa de los derechos humanos, que señalaron la existencia de interferencias durante el registro de votantes, la falta de independencia de la comisión electoral, las pocas garantías de seguridad de las urnas, la intimidación y brutalidad por parte de la Policía y la parcialidad de los medios de comunicación controlados por el Gobierno. Guelleh competía contra cinco candidatos, pero otros tres partidos opositores boicotearon las elecciones. Guelleh había manifestado previamente su voluntad de no competir por un nuevo mandato. Su principal rival era Omar Elmi Kaireh, un líder de la independencia del país, en representación de la coalición Union pour le Salut National (USN), que consiguió el 7% de los votos. Una cuarta parte de la población, 180.000 personas, podía votar. La UA destacó algunas irregularidades pero acabó declarando los resultados creíbles, y el proceso libre y transparente. Cabe destacar, por otra parte, que el Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia y Eritrea presentó su informe anual en octubre en el que remarcó que había encontrado más pruebas no corroboradas de apoyo de Eritrea al grupo insurgente yibutiano FRUD,²⁰ que siguió cometiendo ataques de baja intensidad en el norte de Djibouti durante el último año. Así, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, el movimiento siguió socavando la normalización de las relaciones entre Djibouti y Eritrea y, por lo tanto, siguió obstaculizando la aplicación de la resolución 1862 (2009).

Países como China y Arabia Saudita anunciaron la construcción de nuevas bases militares en el país en 2016.²¹ Djibouti ya es la base de operaciones militares de EEUU, Francia y Japón. Ambos países

20. Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2016/920, 31 de octubre de 2016.

21. Braude, Joseph, "Why China and Saudi Arabia Are Building Bases in Djibouti", *The Huffington Post*, 26 de septiembre de 2016.

tienen importantes negocios e inversiones económicas en el país. El 21 de enero el Ministerio de Exteriores chino anunció la firma de un acuerdo con Djibouti para acoger su primera base militar de ultramar, más allá de las que dispone en el mar del Sur de la China. Posteriormente, en marzo, Arabia Saudita declaró que también estaba negociando la construcción de una base militar en el país, que será una realidad en los próximos meses.

La Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea señaló que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en el país

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinización, que lleva a cabo el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés), que controla todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

Durante el año 2016 miles de personas continuaron arriesgando sus vidas al huir de Eritrea. Según la agencia de la UE de control de fronteras Frontex, 38.791 personas de origen eritreo cruzaron el Mediterráneo en 2015, en su mayoría llegando a Italia, cifra inferior a la del 2014, cuando se alcanzaron las 46.000 personas. La Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea elaboró su segundo informe sobre la situación

de los derechos humanos en el país.²² El documento, presentado el 9 de mayo, determinó que no se había producido ninguna mejora respecto al anterior informe de junio de 2015. **La Comisión tiene motivos razonables para creer que, desde 1991, se han cometido crímenes de lesa humanidad en Eritrea**, concretamente delitos de esclavitud, encarcelación, desaparición forzada, tortura, otros actos inhumanos, persecución, violación y asesinato. La comisión concluyó que, sin una reforma jurídica e institucional

profunda, Eritrea no estará en condiciones de garantizar la rendición de cuentas por esos delitos y violaciones. Además, recomendó que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera la situación de Eritrea al Fiscal de la Corte Penal Internacional, a los efectos de su examen, y que los Estados Miembros de la ONU cumplan su obligación de enjuiciar y extraditar a cualquier persona sospechosa de delitos internacionales que se encuentre en su territorio. En diciembre el Parlamento europeo, de la mano del parlamentario dublinés Brian Hayes, acogió una conferencia para discutir el futuro de Eritrea en la que participó el ministro de Información eritreo, Yemane Gebremeskel, con el objetivo de promover el diálogo entre el país y la UE,²³ así como representantes diplomáticos y embajadores de diversos países europeos, incluyendo Irlanda, Reino Unido, Alemania, Suecia y representantes de la ONU. El acto fue tachado por algunos analistas como el último ejemplo de los **intentos de la UE para hacer frente a la denominada crisis de refugio alcanzando acuerdos con regímenes represivos, como Eritrea y Sudán, para que frenen los flujos migratorios.**²⁴

En paralelo, cabe destacar el informe sobre Eritrea del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado en octubre.²⁵ En su tercer mandato consecutivo, **el Grupo de Supervisión no encontró pruebas contundentes que demostraran el supuesto apoyo de Eritrea al grupo islamista somalí al-Shabaab.** Sin embargo, el Grupo ha seguido encontrando pruebas sistemáticas del apoyo de Eritrea a los grupos armados que operan en Etiopía y Djibouti. El Grupo también informó en 2015 de la relación estratégica militar entre Eritrea con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en virtud de la cual la coalición árabe estaría utilizando su territorio para llevar a cabo acciones militares contra Yemen. Eritrea impulsó la construcción de una base militar permanente en el aeropuerto internacional de Assab y la construcción de un nuevo puerto marítimo permanente adyacente a éste, lo que indica que podría haber apoyo externo para el desarrollo de la infraestructura que podría beneficiar al Ejército eritreo.

22. Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea*, Asamblea General de la ONU, A/HRC/32/47, 9 de mayo de 2016.
 23. Plaut, Martin, "Why do EU leaders still think they can engage with Eritrea's regime?", *The Guardian*, 13 de diciembre de 2016.
 24. Rankin, Jennifer y Patrick Kingsley, "EU considering working with Sudan and Eritrea to stem migration", *The Guardian*, 6 de junio de 2016.
 25. Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2016/920, 31 de octubre de 2016.

Además, el Grupo documentó la presencia en Eritrea, ya sea para instrucción o tránsito, de personal armado y equipo militar y naval conexo de diversos Estados, además de Arabia Saudita y EAU. Según el Grupo de Supervisión, las condiciones actuales del embargo de armas no permiten esas actividades, ni están incluidas en las condiciones de sus posibles exenciones, lo que supondría una violación del embargo de armas. Debido a la constante falta de transparencia de los ingresos y gastos gubernamentales y a la negativa a cooperar con el Grupo de Supervisión sobre esas cuestiones, el Grupo ha registrado pocos avances para determinar en qué medida ingresos del Gobierno de Eritrea se han canalizado a grupos armados dedicados a desestabilizar la región o a realizar actividades que constituyen una violación del embargo de armas.

Eritrea – Etiopía	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	Eritrea, Etiopía

Síntesis:

En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlos y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada desde entonces.

Durante el año se produjo **una de las principales confrontaciones más graves desde el fin del conflicto armado entre Eritrea y Etiopía que tuvo lugar entre 1998 y 2000**. El incidente fronterizo tuvo lugar el 12 de junio, cuando se produjo un **enfrentamiento militar entre los Ejércitos de ambos países en los alrededores de la localidad de Tserona, en territorio eritreo**. Ambos se acusaron mutuamente de haber iniciado el intercambio de artillería pesada, que habría causado numerosas bajas en el adversario, según declararon ambos países,

aunque se desconoce el número de víctimas. Etiopía afirmó que había lanzado un claro mensaje de alerta a Eritrea ya que, según Etiopía, Eritrea no esperaba la respuesta militar que las fuerzas etíopes llevaron a cabo. Esta confrontación puso de manifiesto la volatilidad de la situación. Ambos países de forma periódica se acusan de apoyar a grupos insurgentes para desestabilizar y/o derrocar al otro Gobierno, legado de los años de guerra fratricida. Eritrea, sometida a sanciones de la ONU, ha señalado que la comunidad internacional ha fracasado en presionar a Etiopía para que acepte la resolución sobre la demarcación fronteriza, favorable a los intereses eritreos, mientras que Etiopía afirmó que deseaba llevar a cabo conversaciones sobre la implementación de la demarcación. Días después del enfrentamiento, Eritrea anunció que se produjeron nuevos intercambios de artillería pesada cerca de Bure, en Assab, al sureste de Eritrea, lo que fue negado por Etiopía. Según destacaron numerosas fuentes, el reinicio de este conflicto podría tener graves consecuencias para el Cuerno de África y empeorar la situación de crisis humanitaria de la región, afectada por la sequía.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Ababa Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la

capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión.

El país sufrió un grave deterioro de la situación en 2016.

El año estuvo plagado de protestas contra el régimen, que fueron reprimidas con extrema dureza por parte de los cuerpos de seguridad y que habrían causado más de 500 víctimas mortales, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a un millar de víctimas mortales.²⁶

Esta es la mayor movilización antigubernamental de la última década, según han destacado numerosos analistas. El Gobierno contribuyó al deterioro de la situación con la represión de las protestas, a las que se sumaron los agravios acumulados entre las diferentes comunidades del país y que tienen sus raíces en el devenir autoritario del Estado desde 1991.²⁷ Persistió el rechazo y las fuertes protestas contra el Plan de Desarrollo Integrado de Addis Abeba y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan), que fueron reprimidas con dureza causando decenas de víctimas, lo que provocó el abandono del Plan por parte del Gobierno en enero de 2016. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales ya ascendía a 140, según Human Rights Watch, organización que en junio de 2016 elevó a 400 las víctimas mortales de la represión gubernamental.²⁸ Las protestas se extendieron a otras regiones del país, principalmente a la región de Amhara, y posteriormente a la comunidad afar. El detonante de la expansión de las protestas a Amhara tuvo lugar en la localidad de Gondar (noroeste), en julio, como consecuencia de la decisión del Gobierno de intentar detener al líder de la comunidad wolkayit (región de Tigray) acusado de asesinato, secuestro y colaboración con el régimen eritreo. La comunidad wolkayit pretendía que el distrito Wolkayit pasara a formar parte de la región de Amhara, ya que en 1994 este distrito fue transferido a la región de Tigray. Esta decisión gubernamental desencadenó importantes protestas en la vecina región de Amhara, que se ampliaron y se sumaron a las de otras zonas, como Oromiya y Ogadén, regiones y comunidades que se ven marginadas y alienadas del poder. Las protestas y el estallido de violencia se focalizó en parte contra la comunidad tigray. Miembros de esta comunidad, minoritaria en el conjunto del país, tienen en su poder el control del Gobierno, la economía y las Fuerzas Armadas. El partido TPLF constituye el núcleo de la coalición en el poder, desde donde se le acusa de haber favorecido a la comunidad tigray en detrimento del resto.

Ante esta situación, el Gobierno decretó en octubre el estado de emergencia por un periodo de seis meses

para intentar aplacar las protestas, aunque analistas señalaron que esta medida no hizo sino oficializar un estado de la cuestión en el país y dar cobertura legal al régimen para exonerarle de ejecuciones extrajudiciales, arrestos masivos y persecución y silenciamiento de la prensa. Lejos de reducirse, la violencia aumentó, convirtiendo el mes de octubre en el más violento desde que se iniciaran las protestas en Oromiya en noviembre de 2015. Hasta ese momento los países occidentales habían evitado las críticas a su principal aliado en la lucha contra el grupo armado islamista al-Shabaab en el cuerno de África, pero progresivamente EEUU, Alemania y la ONU plantearon la necesidad de abrir investigaciones sobre el excesivo uso de la fuerza en el país africano. Las protestas también afectaron a intereses occidentales, vistos como aliados del Gobierno. El Gobierno interrumpió en diversas ocasiones durante el año el acceso a internet, dado el uso de las redes sociales por parte de los movimientos sociales y la oposición política. La mayoría de protestas durante el año fueron pacíficas, sin embargo, la represión indiscriminada, el cierre de medios de comunicación, la presión y detención de periodistas y opositores políticos amenazaba

con contribuir a un incremento de la violencia e incluso el surgimiento de una oposición armada que se una o reciba apoyo de otras insurgencias ya existentes en el país, según destacaron diversos analistas. Aunque el Gobierno hizo alguna concesión limitada a la oposición, como la remodelación del Gobierno, el clima de tensión siguió siendo muy elevado.

Entre octubre y diciembre, fuentes oficiales señalaron que unas 11.000 personas habían sido detenidas en Oromiya, Amhara y Addis Abeba, regiones donde se concentraron las protestas. Entre los arrestados destacan líderes de pequeños partidos opositores, periodistas y al menos dos blogueros. En noviembre las autoridades anunciaron la liberación de unos 2.000 detenidos tras haber participado en un programa de “reeducación”. **El 30 de noviembre fue arrestado el presidente del partido opositor Oromo Federalist Congress, Merera Gudina,** líder opositor y activista pacifista, tras haber participado en un acto en el Parlamento Europeo en Bruselas a principios de noviembre para denunciar la situación que padece el país, acto en el que participó junto al atleta Feyisa Lilesa y al líder activista opositor Berhanu Nega, que dirige el partido ilegalizado Ginbot 7, sentenciado a muerte *in absentia*. Fuentes oficiales acusaron a Gudina de haberse reunido con Nega durante su estancia en Bélgica. Su detención fue duramente criticada dentro y fuera de Etiopía, incluyendo por organismos internacionales. El 21 de diciembre el Gobierno liberó a otras 4.000 personas de las que todavía permanecían arrestadas.

*Desde el
establecimiento del
estado de emergencia
en octubre el
Gobierno etíope ha
arrestado a 11.000
personas*

26. Véase Armed Conflict Location & Event Dataset (ACLED), Ethiopia – November 2016 Update.

27. Véase “El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

28. Human Rights Watch, ““Such a Brutal Crackdown:” Killings and Arrests in Response to Ethiopia’s Oromo Protests”, *Human Rights Watch*, junio de 2016.

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El oromo OLF surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En diversas ocasiones ha colaborado con el ONLF de Ogadén en acciones contra el Gobierno central.

La región de Oromiya fue el epicentro de la crisis que padeció Etiopía durante 2016. El año estuvo plagado de protestas contra el régimen que fueron reprimidas con extrema dureza por parte de los cuerpos de seguridad y que habrían causado más de 500 víctimas mortales durante el último año en todo el país, incluyendo Oromiya, según confirmó el propio Gobierno, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a un millar de víctimas mortales.²⁹ Tras las duras protestas estudiantiles, el Gobierno en enero de 2016 retiró los planes de desarrollo de la capital, Addis Abeba, y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan). Este plan preveía la expansión de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, que pasarían a formar parte de Addis Abeba. El Master Plan pretendía organizar el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad, aunque suscitó numerosas críticas por su impacto en la región de Oromiya y por la marginación del pueblo oromo en su diseño.³⁰

Esta situación que afectó al conjunto de Etiopía, incluida la región de Oromiya, se sumó a los brotes esporádicos de actividad insurgente que tienen lugar periódicamente en Oromiya, y que el Gobierno no reporta ni incluye en las cifras de víctimas mortales producto de las movilizaciones sociales y la represión gubernamental subsiguiente. Entre estas acciones, cabe destacar que el brazo armado del Oromo Liberation Front (OLF) señaló que el 17 de julio había llevado a cabo nuevas acciones

militares contra las fuerzas de seguridad etíopes que se suman a las operaciones perpetradas entre el 20 y 23 de junio, en las que supuestamente murieron 27 soldados en las áreas de El Kere, Goro y Haro Dibe. No obstante, estas informaciones no pudieron ser corroboradas. Por otra parte, a mediados de octubre las Fuerzas Armadas etíopes penetraron en territorio de Kenya en persecución de combatientes del OLF en Golole, cerca de la localidad de Sololo, en el condado de Marsabit, causando decenas de muertes en las filas del grupo armado, y la muerte de un civil, informaciones confirmadas por la administración local. Se estima que un destacamento de 100 soldados etíopes participó en el operativo, que llevó a cabo diversos interrogatorios a la población civil en Golole. A su vez, las Fuerzas Armadas de Kenya fueron desplegadas en Sololo tras el ataque perpetrado por las Fuerzas etíopes para determinar el alcance de los hechos.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia, que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí

29. Véase Armed Conflict Location & Event Dataset (ACLED), Ethiopia – November 2016 Update.

30. Véase el resumen sobre Etiopía en este mismo capítulo y “El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias”, en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

al-Shabaab en Kenya, y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le ha sumado desde 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

El país se vio afectado por graves **dinámicas de tensión y violencia**, destacando la creciente tensión y movilización política vinculada a la proximidad de las **elecciones en 2017**, las acciones del grupo armado islamista **al-Shabaab**, **las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, la creciente presencia de ISIS** en el país y los continuos enfrentamientos de carácter intercomunitario. En primer lugar, al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques insurgentes en el noreste de Kenya, en concreto en la zona fronteriza entre Somalia y Kenya (los condados de Mandera, Wajir y Garissa) y en la zona costera de Kenya (condado de Lamu y en Mombasa), que causaron decenas de víctimas mortales y que llevaron al Gobierno a establecer en octubre el toque de queda hasta diciembre en el condado de Mandera, decisión que a finales de año fue prolongada hasta finales de marzo de 2017. Vinculado al conflicto con Somalia, **Kenya anunció en mayo su intención de cerrar y reubicar a la población del campo de refugiados de Dadaab en noviembre**, por cuestiones de seguridad, denunciando que el campo se había convertido en un refugio y centro de reclutamiento de al-Shabaab. Dadaab, que en realidad son cinco campos, es uno de los mayores y más antiguos del mundo y ha llegado a acoger más de medio millón de personas desde principios de los noventa, aunque en la actualidad la cifra se ha reducido a unas 275.000 personas.³¹ Este anuncio generó una enorme preocupación y críticas por parte de la comunidad internacional. En diciembre Kenya anunció que posponía la decisión por seis meses y que continuaría fomentando el retorno voluntario junto con ACNUR. Algunas fuentes señalaron que Kenya había estado forzando el retorno en condiciones de inseguridad, lo que fue desmentido por el Gobierno. En paralelo, durante el año **se produjeron algunos arrestos de diversos militantes que pusieron de manifiesto la creciente presencia del grupo armado islamista ISIS en el Cuerno de África, y en especial en Kenya**. Según fuentes gubernamentales, ISIS estuvo reclutando y radicalizando a jóvenes para combatir en el extranjero, en Libia y Siria, lo que incrementó la preocupación de los servicios de seguridad e inteligencia del país. Los servicios de inteligencia estimaban que alrededor de un centenar de personas se habían unido a ISIS en Libia y Siria, por lo que se temía que a su regreso al país pudieran cometer ataques contra objetivos de Kenya y extranjeros, en un país que ya estaba sufriendo regularmente ataques y acciones armadas

por combatientes que habían regresado de Somalia tras haber formado parte de al-Shabaab.

En segundo lugar, el clima de tensión política y movilización social fue en aumento durante todo el año, sobre todo a partir de abril, debido a las crecientes protestas y manifestaciones convocadas por la oposición política ante la proximidad de las elecciones generales de 2017. El foco de tensión entre el Gobierno y la coalición en el poder, la Jubilee Coalition, por una parte, y la oposición política liderada por la Coalition for Reform and Democracy (CORD), por otra parte, fue la necesidad de reformar la Comisión de Fronteras y Electoral Independiente (IEBC, por siglas en inglés). El líder de la CORD, Raila Odinga, y el resto de la oposición, calificaron de parcial la gestión de la IEBC y la responsabilizaron de su derrota en las elecciones de 2013. **En agosto la IEBC aceptó la dimisión tras meses de presiones por parte de la oposición política**. En diciembre los líderes opositores de CORD, Raila Odinga, y de Amani National Congress (ANC), Musalia Dudavadi, anunciaron la formación de una coalición para competir en las elecciones presidenciales de 2017. El 12 de diciembre el presidente Uhuru Kenyatta acusó a Estados y ONG financiadas por Occidente de interferir en el proceso electoral. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia por parte de los cuerpos de seguridad, provocando la muerte de decenas de personas durante el año. En este sentido, fue preocupante el incremento del número de muertes a manos de la Policía según desveló la base de datos Deadly Force,³² la más importante y exhaustiva base de datos sobre muertes a manos de la Policía en el país, configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos. A 30 de noviembre de 2016, el número de víctimas mortales a manos de la Policía se elevó a 180 personas, rebasando ampliamente la cifra total anual de 2015, que ascendió a 141 personas, lo que supone un 21,7% más respecto a ese año. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos condenaron las muertes a manos de la Policía que podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales ya que como mínimo resultaron controvertidas y podrían haber sido manipuladas. El Gobierno manifestó que no se podía juzgar a todo el cuerpo de Policía por casos aislados de uso excesivo de la fuerza. Por último, cabe destacar los diferentes enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año, por cuestiones de robos de ganado, represalias por ataques previos y usos y propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones.

31. Véase UNHCR, Dadaab Refugee Camps, Kenya UNHCR Dadaab Bi-Weekly Update, 16 a 31 de diciembre de 2016.

32. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto, de Nation Newsplex, proyecto del rotativo keniano Daily Nation, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenya, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado.

Grandes Lagos y África Central

África Central (LRA)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Recursos Internacional
Actores:	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka

Síntesis:

El LRA nació en 1986, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero en el sur de Sudán, posteriormente en RDC, y finalmente en RCA. Así, el LRA fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad para frenarle en RDC y RCA, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanesés llevaron a cabo una ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RDC, el sureste de RCA y el suroeste de Sudán del Sur, donde continuó su ofensiva. En noviembre de 2011 la UA autorizó la creación de una fuerza regional transfronteriza compuesta por contingentes militares de estos tres países que se desplegó en septiembre de 2012 y que cuenta con el apoyo logístico de EEUU. La reducción sostenida de la violencia en los últimos años ha provocado que deje de ser considerado conflicto armado a principios de 2015.

Durante el año persistieron las actividades del grupo armado LRA y las operaciones militares para desarticular al grupo en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur. Las zonas más afectadas fueron el este de RCA (Haut Kotto, Mbomou y Haut Mbomou) y la zona fronteriza entre RDC y Sudán del Sur del lado congolés, hasta el parque nacional de Garamba, en RDC. **Según el proyecto LRA Crisis Tracker se produjeron alrededor de 200 incidentes violentos durante el año, en los que murieron 22 civiles y fueron secuestrados temporalmente o permanentemente 729 personas.**³³ En el este de RCA, el LRA llevó a cabo numerosos secuestros de civiles. Las actividades comerciales del grupo en Kafia Kingi (región rica en minerales en el estado de Lol, en Sudán

del Sur, donde confluyen las fronteras de Sudán, Sudán del Sur y RCA) sufrieron un golpe en enero de 2016, cuando varios combatientes fueron expulsados tras una pelea con comerciantes locales. El grupo sigue saqueando oro y diamantes y cazando furtivamente fauna silvestre, como también hacen grupos rivales de cazadores furtivos sudaneses. El Parque Nacional de Garamba, en RDC, continuó siendo la principal fuente de tráfico de marfil del grupo, aunque la caza furtiva de elefantes, en general, perdió importancia como fuente de financiación para el LRA, según fuentes de la ONU.

En Bas Uélé y Haut Uélé, en el noreste de RDC, se registró desde abril un aumento de la actividad del LRA, según destacó la ONU,³⁴ principalmente debido a la infiltración de presuntos elementos del LRA de Sudán del Sur y RCA que huyeron de esos países a causa de la presión ejercida por las operaciones militares emprendidas en el marco de la Iniciativa de Cooperación Regional de la UA para la Eliminación del LRA. No obstante, en agosto fuentes de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) que forman parte de la Iniciativa manifestaron que iniciarían en breve la retirada de su participación en la misión por la falta de apoyos y recursos internacionales. En el Parque Nacional de Garamba miembros del LRA y cazadores furtivos llevaron a cabo una serie de emboscadas en las que murieron al menos cinco miembros de las Fuerzas Armadas congoleesas (FARDC). El 1 de octubre presuntos elementos del LRA atacaron a efectivos de las FARDC en Nasumba, causando la muerte de dos soldados e hiriendo a cuatro, mientras que las FARDC mataron a cuatro de los agresores, según los informes. El 26 de noviembre, presuntos elementos del LRA saquearon las aldeas de Bakungangba y Katinga situadas en el eje Doruma-Gangala-Nabodio, desde donde también secuestraron a 50 civiles. Elementos del Gobierno de Sudán del Sur y de la oposición cruzaron la frontera hacia la RDC y el número de refugiados aumentó de manera significativa. Las FARDC detuvieron a milicianos de Sudán del Sur que habían cruzado la frontera y entrado en el país. La MONUSCO desplegó una base avanzada en Doruma para vigilar mejor la situación en la zona, lo que puso de manifiesto la volatilidad de la situación.

Angola (Cabinda)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo

Síntesis:

Tras la independencia de Angola de Portugal en 1975, el enclave de Cabinda, separado geográficamente del resto del territorio angolano, quedó incorporado a Angola en el tratado de independencia, el cual contó con la firma de los principales

33. Véase Invisible Children – Resolve, *LRA Crisis Tracker*, 10 de enero de 2017.

34. Consejo de Seguridad de la ONU, "Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo", S/2016/833 de 3 de octubre de 2016.

movimientos para la independencia del país (MPLA, UNITA y FNLA), pero no con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC). Desde ese momento, el FLEC, quien ya había luchado contra la ocupación extranjera de Portugal, ha mantenido la lucha armada contra el Estado angolano por la independencia del enclave. En el año 2002, y tras el final de la guerra civil post colonial, el movimiento secesionista había quedado bastante reducido, manteniéndose la violencia de manera esporádica. En el 2006 una sección del FLEC y el Gobierno firmaron un alto el fuego a cambio de una repartición mayor de los ingresos petrolíferos para Cabinda –región que produce más de la mitad del crudo nacional– que fue rechazado por la facción del FLEC-FAC (Fuerzas Armadas de Cabinda) comandada por N'Zita Tiago, que ha mantenido las reclamaciones secesionistas.

La tensión política volvió a rebotar con mayor intensidad en el enclave de Cabinda durante el año, luego de que el grupo armado Frente de Liberación del Enclave de Cabinda – Fuerzas Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) anunciase el 18 de febrero la vuelta a las hostilidades debido a la negativa del Gobierno a retomar las conversaciones de paz. En este nuevo contexto, **durante el año se registraron los peores incidentes en la región en años, produciéndose diferentes enfrentamientos armados entre el FLEC-FAC y las Fuerzas Armadas angolanas.** En total, y según los datos registrados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), se produjeron alrededor de 84 muertes durante el 2016.³⁵ Sin embargo, un recuento a partir de fuentes de prensa eleva el número de fallecidos a unos 185 muertos en los diferentes enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas de seguridad nacionales. La dificultad para contabilizar el número de bajas reales producidas en los enfrentamientos residió principalmente en las diferencias entre el número de bajas reportadas por el movimiento armado secesionista –quien ha reivindicado numerosas bajas en las Fuerzas Armadas–, y las confirmadas por el Gobierno de Angola, quien ha negado en numerosas ocasiones que la situación de seguridad en el enclave empeorase durante el año. En el que fue probablemente el peor mes del año, marzo, se produjeron diferentes emboscadas del FLEC-FAC a convoyes militares que dejaron un balance estimado de entre 30 y 50 víctimas mortales. Las emboscadas se mantuvieron durante el mes de abril, mientras el partido de oposición Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) –antigua insurgencia– solicitó el 4 de abril un foro nacional para lograr la paz y reconciliación. Sin lograr la apertura del diálogo, el 3 de junio se produjo el fallecimiento del histórico líder del FLEC, Nzita Tiago, de 88 años, quien fue remplazado en el cargo por su hijo Emmanuel Nzita. Tras la muerte de Nzita Tiago el FLEC-FAC intensificó sus actividades, reportando más de 50 muertes de militares angolanos durante los meses de junio a septiembre, sin que éstas fueran confirmadas por las autoridades. Durante los últimos meses

En la región de Cabinda, Angola, se registraron los peores enfrentamientos armados en años

del año también se contabilizaron diferentes incidentes armados, sobre todo emboscadas, que habrían dejado otra veintena de víctimas mortales. Por otro lado, el presidente José Eduardo Dos Santos, quien lleva en el poder desde 1979, anunció el 11 de marzo que no se presentará a las elecciones de 2017, lo que generó numerosas especulaciones sobre su sucesión. Su partido, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), en su congreso celebrado a mediados de agosto, reeligió a Dos Santos como líder del partido, y nombró a su hija Welwitschia, y a su hijo, José Filomeno, nuevos miembros del Comité Central del MPLA. Posteriormente, el día 2 de diciembre, el Comité decretó que Dos Santos no será su candidato para las próximas elecciones presidenciales, confirmando el anuncio del presidente.

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria.

A la crisis política y social que azota el país vinculada a la crisis económica como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, y a las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad,³⁶ se le añadió el proceso electoral. La primera parte del año se vio marcada por la campaña y la celebración de las elecciones presidenciales el 10 de abril, que fueron ganadas nuevamente por el presidente Idriss Déby con el 59,9% de

35. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED 2016.

36. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

los votos frente a su rival más directo, Saleh Kebzabo, que consiguió el 12,7% de los votos, por lo que Idriss Déby evitó una segunda vuelta. 12 candidatos compitieron contra Déby y la participación se elevó al 71%. La oposición señaló que las elecciones se vieron inmersas en un fraude masivo. Durante la campaña electoral se produjeron numerosas movilizaciones y las protestas fueron reprimidas por parte de los cuerpos de seguridad. Ocho de los 13 candidatos, entre ellos Kebzabo, afirmaron que no reconocían los resultados publicados por la comisión electoral (CENI) debido a que se había constatado la manipulación y tráfico de papeletas y de carnets de votantes, la desaparición de centenares de urnas y, por último, tal y como relató la agencia AP, la desaparición de alrededor de 60 soldados que habían intentado votar contra Déby. Desde febrero, las manifestaciones habían sido prohibidas, coincidiendo con el caso de la violación de una joven por parte de hijos de altos cargos del régimen. Cuatro líderes de la sociedad civil fueron condenados a cuatro meses de prisión a principios de abril por promover protestas antigubernamentales. La oposición alcanzó sólidos resultados en los barrios pobres de la capital y en el populoso sur del país. El Gobierno estableció un fuerte despliegue militar en la capital, N'Djamena, de cara al anuncio de los resultados. La misión de observación de la UA declaró las elecciones libres y transparentes aunque constató algunas anomalías. Durante la jornada electoral se bloqueó el acceso a internet y los teléfonos móviles no podían enviar mensajes de texto. Idriss Déby, en el poder desde 1990, inauguró su quinto mandato el 8 de agosto en medio de un clima de tensión y rechazo por parte de la oposición política. Diversos líderes de la región (los presidentes de Níger, Nigeria, Sudán, Malí, Burkina Faso, Mauritania) estuvieron presentes en la ceremonia. **Tras las elecciones, continuaron las protestas, huelgas y movilizaciones por parte de los estudiantes, la oposición política y la sociedad civil en contra de las medidas de austeridad promovidas por el Gobierno.** Los cuerpos de seguridad dispersaron las manifestaciones opositoras prohibidas en la capital, N'Djamena, el 6 y 7 de agosto, en las que resultó muerto un manifestante. Cabe destacar la formación el 26 de julio del Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC), que agrupó a 31 partidos políticos opositores.

Idriss Déby, en el poder en Chad desde 1990, inauguró su quinto mandato el 8 de agosto en medio de un clima de tensión y rechazo por parte de la oposición política

de la fuerza multinacional regional que combate la insurgencia islamista de Boko Haram tiene su base en Chad. Asimismo, Chad es la base de las operaciones francesas en África. En este sentido, el Parlamento chadiano prolongó el 25 de abril por otros seis meses el estado de emergencia en la región del Lago Chad, escenario de operaciones militares contra Boko Haram.

Congo, Rep. del	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, el país se ha visto sometido a un clima de inestabilidad y violencia política. Denis Sassou-Nguesso lo gobernó desde 1979 –a través de un golpe de Estado militar– hasta 1992, etapa de régimen de partido único de ideología marxista-leninista. Tras el colapso del bloque comunista y de la Unión Soviética, y por presiones de su principal aliado, Francia, inició la transición a la democracia, estableciendo un sistema multipartidista que celebró elecciones en 1992 en las que fue Sassou-Nguesso derrotado por Pascal Lissouba. El país ha sido víctima de diversos conflictos armados (1993-1994, 1997-1999). Entre junio de 1997 y diciembre de 1999 se desencadenó una guerra civil entre las fuerzas de los dos candidatos a la presidencia, Nguesso y Lissouba. En paralelo al conflicto político entre Lissouba y Sassou-Nguesso, también jugaron un papel determinante los intereses franceses en el petróleo congolés. Brazzaville resultó destruida por la guerra y la multitud de milicias que competían por el poder. Entre ellas, las milicias Ninjas leales a Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi) y al líder político Bernard Kolélas, primer ministro tras el acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre 1993 y 1994; las milicias Cocoyes, del presidente derrocado Lissouba; y las Cobras, del presidente golpista Nguesso. El apoyo de Francia a Nguesso fue un factor crucial en esta guerra, que terminó con la invasión de las tropas de Angola y el retorno de Nguesso al poder, el cual continúa en el cargo hasta la actualidad. Los Ninjas del reverendo Ntoumi siguieron activos en su feudo, la región de Pool, y se enfrentaron a Nguesso entre 2002 y 2003. Los intentos de Nguesso de reformar la Constitución para facilitar su permanencia en el poder, provocaron importantes movilizaciones en su contra protagonizadas por el movimiento #Sassoufit, creado en 2014, en referencia al lema de las movilizaciones.

El país se encuentra inmerso en un ciclo de inestabilidad y movilización política y social desde que el Gobierno promovió la reforma constitucional en octubre de 2015 que levantaba el límite de dos mandatos presidenciales, lo que permitió al presidente, Denis Sassou-Nguesso (72 años), presentarse a un nuevo mandato presidencial en marzo de 2016. Históricamente Sassou-Nguesso ha recibido numerosas críticas por nepotismo, recortar la democracia y las libertades en el país, y sus Gobiernos se han visto plagados de casos de corrupción. No

El presidente francés, François Hollande, recibió la visita de Déby el 20 de agosto, y le reafirmó su compromiso de apoyo para combatir a los grupos armados calificados de terroristas y la promoción del desarrollo del Lago Chad. A finales de diciembre el primer ministro francés y su ministro de Defensa devolvieron la visita a Déby y le expresaron su apoyo en la lucha antiterrorista en N'Djamena. Chad se ha convertido en el principal baluarte en el centro de África contra la insurgencia islamista, y el cuartel general

obstante, obtuvo la victoria en las elecciones del 20 de marzo en primera vuelta con el 60% de los votos, ampliando sus 32 años en el poder. El recuento oficial dio a Guy Brice Parfait Kolélas un resultado del 15% de los votos y el tercer candidato, el general Jean-Marie Michel Mokoko, obtuvo poco más del 14%. Los dos principales candidatos opositores rechazaron los resultados parciales publicados por la comisión electoral que le daban el 67% de los votos a Nguesso, cifra que posteriormente se redujo al 60%, tal y como reveló el ministro del Interior al anunciar los resultados definitivos. La jornada electoral transcurrió en un clima de alta tensión y algún tiroteo esporádico y bloqueo de las comunicaciones entre el 20 y el 23 de marzo (internet y mensajes de telefonía móvil) para evitar que los candidatos opositores pudieran publicar sus propios resultados. Los cuerpos de seguridad patrullaron la capital para intentar sofocar posibles protestas. Los candidatos opositores calificaron de fraudulentas las elecciones e hicieron un llamamiento para promover una campaña de desobediencia civil. Además, se convocó una manifestación que tuvo un importante seguimiento en el sur de la capital, feudo opositor, aunque no tuvo ningún seguimiento en el norte de Brazzaville, donde Sassou-Nguesso tiene un importante apoyo.

Tras las elecciones en la República del Congo se fue intensificando la violencia y el Gobierno reprimió con dureza las protestas, produciéndose enfrentamientos e intercambios de disparos en la capital

Tras las elecciones se fue intensificando la violencia y el Gobierno reprimió con dureza las protestas, produciéndose enfrentamientos e intercambios de disparos en la capital, Brazzaville, tras el anuncio del Tribunal Constitucional ratificando los resultados electorales el 4 de abril. Algunos edificios gubernamentales fueron atacados e incendiados. El Gobierno responsabilizó a los antiguos miembros de las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi de los enfrentamientos y ataques a edificios gubernamentales, militares y policiales,³⁷ y los cuerpos de seguridad congoleños bloquearon el acceso a la zona sur de la capital, feudo de la oposición. El Gobierno anunció una investigación para determinar posibles vínculos entre la ofensiva y los candidatos opositores. El Gobierno no reveló si se produjeron víctimas en los enfrentamientos, aunque miles de personas huyeron del sur de la capital hacia las zonas del norte, más seguras. **Los enfrentamientos recordaron a los residentes de la capital la ola de violencia de 1997 cuando Denis Sassou-Nguesso retornó al poder tras meses de guerra de guerrillas en la ciudad entre milicias rivales,** entre ellas las mismas milicias Ninjas lideradas por el que fue primer ministro, Bernard Kolélas, padre del actual candidato Guy Brice Parfait Kolélas, y por el Pastor Ntoumi. Sin embargo, Parfait Kolélas negó tener ningún tipo de relación con el grupo. No obstante, Ntoumi manifestó su apoyo al candidato Guy Brice Parfait Kolélas, derrotado en las elecciones. Nguesso configuró en mayo su nuevo Gobierno, nombrando como

nuevo primer ministro al antiguo líder opositor Clement Mouamba, antiguo ministro de Finanzas del presidente Pascal Lissouba (1992-1993). Mouamba era miembro del opositor partido Pan-African Union for Social Democracy (UPADS) pero fue expulsado del partido en 2015 por formar parte de las conversaciones que facilitaron la celebración del referéndum constitucional que permitió extender el mandato de Nguesso y presentarse a las elecciones de marzo.

A partir de septiembre se produjo una nueva escalada de la violencia y de acciones por parte de las milicias Ninjas en la región de Pool, donde se desplazaron 13.000 personas desde abril. En una de las acciones más destacadas, el 5 de octubre las milicias Ninjas afirmaron haber dado muerte a 12 miembros de los cuerpos de seguridad y a 11 civiles en la última semana de septiembre. De acuerdo con fuentes policiales, al menos 14 personas murieron como consecuencia de un ataque a un tren en la localidad de Mindouli, en la región de Pool, aunque representantes de Ntoumi desvincularon a la milicia de esta acción. Posteriormente, en diciembre un vehículo militar sufrió un nuevo ataque, en el que murieron dos personas. Ntoumi afirmó que sus jóvenes habían retomado las armas como consecuencia de las elecciones fraudulentas de marzo y en respuesta a la violencia gubernamental que se intensificó desde la reelección de Nguesso. Ntoumi, que seguía en búsqueda y captura por parte de las autoridades congoleñas, responsabilizó al presidente Sassou-Nguesso por el deterioro de la situación de seguridad. Ntoumi hizo un llamamiento para el establecimiento de un diálogo mediado por la comunidad internacional.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.³⁸ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se celebraron elecciones legislativas y

37. Benn, Margaux, y Caroline Chauvetjune, “Political Violence Roils the Republic of Congo”, *The New York Times*, 2 de junio de 2016.
38. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad.

El país se vio afectado por una grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016

y el aplazamiento de facto de las elecciones nacionales y la preocupación ante la posibilidad de que Kabila intentara mantenerse en el poder por un tercer mandato presidencial, en contra de lo previsto en la Constitución. Esta cuestión provocó un grave clima de tensión ante la posibilidad de que se revirtieran los avances alcanzados en los últimos años en la transición política que atraviesa el país. Esta situación se tradujo en un incremento de las movilizaciones por parte de la oposición durante el año, que fueron reprimidas con excesiva dureza, causando decenas de víctimas mortales durante el año, movilizaciones de los sectores progubernamentales, y reducción del espacio político. Ante esto, durante el año se llevaron a cabo diferentes iniciativas políticas encaminadas a promover el diálogo entre los partidos políticos y la sociedad civil, lo que resultó en un acuerdo a finales de año.

El año se inició con un creciente clima de violencia política y bloqueo institucional en relación al diálogo político promovido por el Gobierno, lo que sumado a los retrasos e incumplimiento del calendario electoral establecido en febrero de 2015, hacían ya técnicamente imposible la celebración de las elecciones antes de diciembre de 2016. Front Citoyen 2016, amplia coalición opositora creada en diciembre de 2015 cuyo principal objetivo era la celebración de las elecciones presidenciales en 2016, en enero inició protestas para exigir el fin del mandato del presidente Kabila a su término en diciembre de 2016, en especial la celebración de una serie de movilizaciones coincidiendo con la conmemoración de la Marche des Chrétien, la histórica movilización del 16 de febrero de 1992 que terminó con un baño de sangre por la represión gubernamental y que perdura en la memoria del país. A su vez, la plataforma opositora G7 (grupo de siete partidos políticos surgidos de la coalición gobernante) hizo un llamamiento para la celebración de las elecciones en el marco establecido por la Constitución y con apoyo económico internacional. El anuncio de la Conferencia Episcopal (CENCO) de cancelar su participación en la Marche des Chrétien y el anuncio por parte del partido gubernamental PPRD de convocar una marcha por la paz el 16 de febrero, hizo temer un estallido de violencia, lo que culminó con la cancelación de las movilizaciones y la celebración de una huelga general. El panel de Sabios de la UA escogió en enero a uno de sus miembros, Eden

El Gobierno congolés y la oposición acordaron el 31 de diciembre que Kabila permaneciese en el poder hasta la celebración de las elecciones de diciembre de 2017 sin posibilidad de presentarse

Kodjo, antiguo primer ministro de Togo, para que celebrara consultas en apoyo del diálogo político en el país. El anuncio a finales de enero de que el Gobierno actualizaría el censo de votantes encendió las alarmas en el seno de la oposición ante un seguro retraso de las elecciones, por el tiempo necesario para llevarlo a cabo, hecho que se constató en marzo cuando la Comisión Electoral (CENI) afirmó que no podría organizar las elecciones legislativas y presidenciales en noviembre debido a la extensa actualización de la lista de votantes. Esta decisión fue enviada al Tribunal Constitucional quien la ratificó en mayo, cuando dictaminó que el presidente podría legalmente permanecer en su cargo en diciembre si las elecciones no podían celebrarse. En abril la UA nombró oficialmente a Edem Kodjo como facilitador del diálogo político nacional, aunque la oposición se negó a participar. No fue hasta junio cuando se empezó a desbloquear la situación. **Ese mes la oposición política celebró una reunión**

en Bruselas en la que decidieron la formación de una coalición política con el objetivo de unirse en la oposición a un tercer mandato, llamada Rassemblement (o Rally, en inglés). La coalición incluye el partido Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), liderado por el histórico opositor Étienne Tshisekedi, la Oposición Dinámica, y el G7, que recientemente había escogido al antiguo gobernador de Katanga, Moïse Katumbi, como su candidato presidencial. Los miembros de Rassemblement rechazaron el diálogo propuesto por Joseph Kabila pero hicieron un llamamiento para que la ONU, la UE, la UA, la Organización Internacional de la Francofonía y EEUU apoyaran al facilitador propuesto por la UA, Edem Kodjo. Posteriormente, el 9 y 10 de julio se celebró una reunión en Bruselas en la que participaron los líderes opositores, entre ellos Étienne Tshisekedi, y representantes de la UA, ONU, UE, en la que finalmente la oposición política reconoció la necesidad de llevar a cabo un diálogo nacional entre los actores políticos gubernamentales y progubernamentales y la oposición política.

El 27 de julio se produjo el celebrado retorno de Tshisekedi envuelto del apoyo de miles de simpatizantes tras dos años fuera del país por enfermedad. El 31 de julio el UDPS organizó una manifestación que aglutinó a decenas de miles de personas en Kinshasa. En paralelo, el 29 de julio, decenas de miles de partidarios de Kabila se manifestaron en Kinshasa en apoyo a su presidente. El 31 de julio se inició el registro de votantes, y el 20 de agosto la CENI afirmó que las elecciones no podrían celebrarse antes de julio de 2017. En paralelo, el 4 de julio se había celebrado en Addis Abeba la primera reunión del grupo internacional de apoyo al proceso de RDC, y entre el 1 de septiembre y el 18 de octubre se celebró el Diálogo Nacional, con la participación de algunos sectores pero no contó con la participación de la coalición opositora Rassemblement.³⁹ Durante el mes de septiembre se produjeron fuertes

39. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 3 (Procesos de paz).

movilizaciones en diversos lugares del país, en especial en la capital, Kinshasa, en contra del diálogo. Las principales movilizaciones tuvieron lugar el 19 y 20 de septiembre, en las que se produjo la muerte de decenas de personas como consecuencia de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la población civil. La oposición elevó la cifra a más de 50 víctimas mortales. Además, fueron incendiados los cuarteles generales de tres de los partidos opositores más importantes, el UDPS, las FONUS y el partido lumumbista (MLP). **El 18 de octubre se alcanzó un acuerdo, que prolongaba el mandato presidencial de Kabila hasta abril de 2018, cuando se celebrarían las elecciones, y fijaba la transferencia del poder para el 9 de mayo.** Según el acuerdo, se debería formar un nuevo Gobierno con una figura opositora en el cargo de primer ministro. Rassemblement boicoteó el acuerdo y acusó a Edem Kodjo de parcialidad en favor de los intereses del presidente congolés. Dicho acuerdo fue celebrado por la comunidad internacional, pero la UE amenazó con sanciones para frenar el clima de violencia y señaló la necesidad de promover el diálogo para celebrar las elecciones a ser posible en 2017. La CENCO, que inicialmente había participado en el diálogo pero se había ausentado tras los hechos del 19-20 septiembre, anunció que lo rechazaba porque debería incluir explícitamente que Kabila no competiría por un tercer mandato. Octubre y noviembre transcurrieron en medio de un clima de movilización social, violencia y caos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en paralelo a los llamamientos al diálogo por parte de la CENCO. **El 17 de diciembre, dos días antes de que culminara el mandato presidencial y bajo un elevado clima de tensión y movilizaciones por todo el país, se inició una nueva ronda de consultas entre el Gobierno y toda la oposición, que alcanzó un acuerdo el 31 de diciembre.** Según el acuerdo, el presidente permanecía en el cargo hasta la celebración de las elecciones presidenciales en diciembre de 2017 pero se comprometía a no presentarse.⁴⁰ Por otra parte, cabe destacar el brote de violencia que se desencadenó en Kasai Central en septiembre tras la muerte del líder comunitario Kamwina Nsapu en agosto y la posterior represión y uso excesivo de la fuerza ejercida por el poder central en la zona, que ha causado hasta diciembre más de un centenar de víctimas mortales y ha originado la creación de una rebelión que ha tomado el nombre del líder ejecutado.

Sudán	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del

país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significativas protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que fueron acalladas por los aparatos de seguridad.

Además de los conflictos armados que permanecen activos en varias zonas del país, que registraron durante el 2016 un total de 3.495 víctimas mortales en alrededor de 1.088 episodios de violencia en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul según datos del centro Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)⁴¹ situando a Sudán como el cuarto país africano en niveles de conflictividad armada,⁴² en el territorio nacional también permanecieron activas tensiones políticas entre el Gobierno y grupos opositores que se manifestaron sobre todo en la capital, Jartum. Durante el año el país registró numerosas protestas que fueron reprimidas por las autoridades sudanesas, en donde resaltaron los episodios de movilizaciones y huelgas producidas por la introducción por parte del Gobierno de medidas destinadas a reducir los subsidios a los combustibles en el mes de noviembre. La medida generó movilizaciones sociales y llamamientos a la desobediencia civil en el país durante el 27 y 29 de noviembre y posteriormente el 19 de diciembre. La convocatoria de protestas de finales de noviembre se saldó con la represión y la dispersión por parte de la policía de las diferentes manifestaciones y con la detención de decenas de opositores, entre ellos 27 miembros del partido opositor Popular Congress Party (PCP). La segunda convocatoria de huelga civil, prevista para el 19 de diciembre, se realizó en medio de una campaña de miedo orquestada desde el Gobierno, quien ordenó la realización de detenciones masivas de opositores días antes de la convocatoria. En ambas convocatorias la acción del Gobierno se dirigió también hacia la censura y el control de los medios de comunicación, siendo confiscadas desde el inicio de las acciones de desobediencia civil en el país a mediados de noviembre, cerca de 28 ediciones de periódicos (entre ellos medios como El Jareeda, El Ayam, El Tayyar, Asoiga o El Ahram el Yoom) así como varios periodistas fueron detenidos y golpeados por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Sudán (NISS). De manera particular, diferentes ediciones del periódico El Jareeda fueron confiscadas por agentes de seguridad en nueve

40. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 3 (Procesos de paz).

41. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) "Sudan – December 2016 Update", enero de 2016.

42. Véase los resúmenes de Sudán (Darfur) y Sudán (Kordofan Sur y Nilo Azul) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

ocasiones desde noviembre. Estos hechos generaron un llamamiento de la Red de Periodistas de Sudán para proteger la libertad de prensa y el día 7 de diciembre miembros de la troika de Sudán (Noruega, Reino Unido y EEUU), así como la UE y Canadá, realizaron una declaración conjunta expresando su preocupación por la oleada de detenciones y restricciones de prensa en el país. En otro orden de aspectos, el histórico líder opositor del Popular Congress Party (PCP), Hassan al-Turabi, falleció el 5 de marzo, siendo reemplazado por Ibrahim al-Sanusi.

Sudán – Sudán del Sur	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Recursos, Identidad Internacional
Actores:	Sudán, Sudán del Sur

Síntesis:

El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia como colofón del proceso de paz iniciado con la firma del Acuerdo de Paz Global en 2005. Sin embargo, la creación del nuevo Estado no puso fin a las desavenencias entre Khartoum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

Las tensiones entre los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur se distendieron a principios de año con la decisión tomada el 27 de enero de 2016 por parte del ejecutivo sudanés presidido por Omar al-Bashir, de reabrir las fronteras con Sudán del Sur, las cuales permanecían cerradas desde junio de 2011, un mes antes de la declaración formal de independencia de Sudán del Sur. La decisión fue leída como un paso histórico para la normalización de las relaciones entre ambos vecinos. Días antes de esta histórica medida, el Gobierno de Sudán hizo otro gesto reduciendo las tasas para el tránsito de petróleo desde Sudán del Sur, a lo que el ejecutivo sur sudanés presidido por Salva Kiir, respondió con la orden de retirada del Ejército de la Zona Fronteriza Desmilitarizada Segura (SDBZ por sus siglas en inglés) y su reubicación a unos 8 kilómetros de distancia. Ambos hechos se relacionaron con los avances en las reuniones mantenidas en octubre del 2015 en Addis Abeba por la Comisión de Fronteras Conjunta (JBC) entre Sudán y Sudán del Sur, bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión

En enero de 2016 el Gobierno sudanés tomó la decisión histórica de reabrir las fronteras con Sudán del Sur que permanecían cerradas desde la independencia en 2011

de la Zona Fronteriza Desmilitarizada Segura (SDBZ por sus siglas en inglés) y su reubicación a unos 8 kilómetros de distancia. Ambos hechos se relacionaron con los avances en las reuniones mantenidas en octubre del 2015 en Addis Abeba por la Comisión de Fronteras Conjunta (JBC) entre Sudán y Sudán del Sur, bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión

Africana (AUBP), con el fin de resolver las diferentes situaciones fronterizas relativas a Abyei, 14-Mile área, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka y el enclave de Kafia Kingi, lo que equivale a un 20% de la frontera compartida entre ambos países que está pendiente de delimitar. Sin embargo, a mediados de marzo el Consejo de Ministros de Sudán amenazó con revertir la decisión de la reapertura fronteriza, así como con procesar a cualquier ciudadano sur sudanés que se encontrase en el país sin permiso –lo que afectaría a las miles de personas refugiadas que huyen del conflicto armado en Sudán del Sur– si el Gobierno de Sudán del Sur no retiraba sus tropas de la frontera como había decretado a finales de enero, y si éste no dejaba de apoyar y cobijar a los grupos rebeldes sudaneses. En este clima de tensión y acusaciones mutuas de apoyar a grupos rebeldes opositores, el 6 de junio delegaciones de ambos gobiernos se reunieron en Jartum comprometiéndose a retirar las tropas de la SDBZ, y también pactaron dejar de apoyar a grupos rebeldes hostiles entre sí. Durante el mes de agosto el nuevo primer vicepresidente sur sudanés, Taban Deng Gai, visitó Jartum y se comprometió nuevamente a expulsar a las insurgencias sudanesas del país. Sin embargo, el 18 de septiembre, Sudán volvió a amenazar con cerrar su frontera si Juba no cumplía con su compromiso de expulsar a los grupos insurgentes. A finales de septiembre, y durante cuatro días, ambos países se reunieron en el marco de la JBC en Addis Abeba, acordando las dos partes un documento para la demarcación fronteriza, estableciendo los términos de referencia, el presupuesto para la demarcación y el plan de trabajo de la JBC. A principios de noviembre, las tropas sur sudanesas se retiraron de sus posiciones en la frontera en cumplimiento con el Acuerdo de Cooperación de 2012. A finales de mes, y coincidiendo con la cumbre árabe-africana en la capital de Guinea Ecuatorial, los presidentes sudanés y sur sudanés mantuvieron una reunión bilateral donde acordaron la reapertura de la frontera y la aplicación del Acuerdo de Cooperación de 2012, pactando a su vez el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como comprometiéndose nuevamente a no apoyar a ningún grupo rebelde de ambos países. El Gobierno de Sudán del Sur acogió con satisfacción la decisión de las autoridades sudanesas de no conceder la entrada a Jartum al líder rebelde y ex primer vicepresidente Riek Machar, quien se tuvo que exiliar provisionalmente en Sudáfrica.

En cuanto a la situación de desplazamiento forzoso y cifras de acogida de personas refugiadas en ambos países, a fecha del 15 de noviembre de 2016, **ACNUR reportó un total de 263.245 refugiados sur sudaneses en territorio de Sudán** (de los cuales 184.272 son menores, según UNICEF) distribuidos en los distintos estados: Nilo Blanco (109.996), Jartum (35.707), Kordofán Occidental (26.386), Kordofán Sur (21.735), Kordofán Norte (1.689), Nilo Azul (3.661), Darfur Oriental (55.957),

Darfur Meridional (5.430) y Darfur del Norte (2.684).⁴³ Por otro lado, de las 262.560 personas refugiadas que Sudán del Sur acogió a finales de 2016, **241.510 eran de origen sudanés, desplazadas por los conflictos armados en Kordofan Sur, Nilo Azul y Darfur.**⁴⁴

Uganda	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió la toma del poder al derrocar al Gobierno de Tito Okello. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria, con todo el poder concentrado en sus manos y en su partido, el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRM, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema multipartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de febrero de 2011 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental contra las demandas de cambio democrático y las protestas contra el incremento del coste de la vida. En paralelo, la intervención militar de Uganda en Somalia incrementó las amenazas del grupo armado somalí al-Shabaab hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias y agravios instrumentalizados en periodo electoral.

El año se vio marcado por el clima de tensión derivado de la celebración en febrero de las elecciones presidenciales y legislativas en Uganda que dieron nuevamente la victoria al presidente Yoweri Museveni y a su partido, el National Resistance Movement (NRM), en el poder desde 1986, así como por la escalada del conflicto en la región de Rwenzori. Museveni consiguió vencer y obtuvo un nuevo mandato de cinco años al frente del país. El NRM consiguió una amplia victoria, obteniendo más de dos tercios de los 426 escaños del Parlamento. No obstante, al menos 17 ministros perdieron sus escaños en las elecciones, y la comisión electoral señaló que el principal partido opositor, el Forum for Democratic Change (FDC) consiguió 40 escaños, y el Democratic Party otros 15 escaños. Las elecciones fueron calificadas de caóticas y sembradas de

La disputa electoral en Uganda también atizó la violencia política y los conflictos intercomunitarios larvados en la región de Rwenzori, fronteriza con RDC

numerosas irregularidades, según diversos observadores internacionales, y calificadas de fraudulentas por la oposición. Además, se vieron afectadas por un elevado clima de violencia y excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, y enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente y el líder opositor, Kizza Besigye. El propio presidente de la Comisión Electoral, Badru Kiggundu, que ha presidido la comisión en las dos últimas elecciones presidenciales, pidió disculpas por los significativos problemas que los votantes encontraron para ejercer su voto en la capital, Kampala, y en el vecino distrito de Wakiso, feudos de la oposición. Tras el anuncio de los resultados, se produjeron numerosos incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad, y al menos 10.000 personas se desplazaron en el distrito Bundibugyo (oeste de Uganda) como consecuencia de la violencia postelectoral, que causó nueve víctimas mortales y cuatro heridos. Enfrentamientos entre partidarios y opositores de Museveni tuvieron lugar en los distritos de Wakiso y Masindi, causando decenas de heridos. Kizza Besigye fue detenido y sometido a arresto domiciliario decenas de veces durante el año. Museveni fue investido el 12 de mayo. Más de una decena de jefes de Estado, entre los cuales cabe destacar a Uhuru Kenyatta (Kenya) y Omar al-Bashir (Sudán), estuvieron presentes en la ceremonia, que supone su quinta investidura consecutiva y el inicio de su cuarta década en el poder. No obstante, las delegaciones occidentales de diplomáticos de EEUU, países de la UE y Canadá que participaron en la sesión de investidura abandonaron la ceremonia en protesta por los comentarios de desprecio realizados por Yoweri Museveni contra la Corte Penal Internacional (CPI).

En paralelo, la disputa electoral también atizó la violencia política y los conflictos intercomunitarios latentes en la región de Rwenzori, en el reino Rwenzururu. En el oeste del país, junto a la frontera congoleña, habían estallado en 2009 diversos conflictos a raíz del reconocimiento por parte del Gobierno hacia Charles Wesley Mumbere como nuevo rey del reino Obusinga bwa Rwenzururu (OBR). Su nombramiento no fue bien recibido por las comunidades basongora y banyabindi en Kasese ni tampoco por los bawisi y bamba en el distrito de Bundibugyo, que exigieron la creación de sus propios reinos separados del reino bakonzo, la comunidad mayoritaria. El reino Rwenzururu fue establecido en 1962 como resultado del movimiento secesionista de las comunidades bamba y bakonzo, liderada por el padre de Mumbere, Isaya Mukirane, quien fue reconocido como el rey de la región, conflicto que dio origen al grupo armado NALU, que posteriormente se unió a las ADF en RDC.⁴⁵ Tal y como han señalado diversos analistas, el reconocimiento del reino y la división en distritos de la zona es resultado de la política de patronazgo del Gobierno, por la cual el Estado

43. OCHA, "Sudan Humanitarian Bulletin", No. 1, 26 de diciembre de 2016 – 8 de enero de 2017.

44. UNHCR, "Factsheet- South Sudan", diciembre de 2016.

45. Véase la síntesis del conflicto sobre RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

y los recursos son utilizados para consolidar el poder del régimen, en una zona que vota mayoritariamente a la oposición política, por lo que la creación del reino contribuyó a exacerbar nuevas tensiones y no resultó en la compra de votos que preveía el Gobierno.⁴⁶ En julio de 2014 se produjeron enfrentamientos que causaron 100 víctimas mortales. En marzo de 2016 murieron 50 milicianos de la guardia real como consecuencia de los enfrentamientos entre la milicia del rey Mumbere y los cuerpos de seguridad del Estado, que atacaron el palacio del rey Mumbere, y otros 139 miembros de la guardia presidencial fueron arrestados. A finales de noviembre se produjeron nuevos enfrentamientos en el distrito de Kasese que causaron la muerte de 126 personas, entre miembros de la guardia real, policías y civiles, además de 149 detenidos. El reino desmintió que estuviera promoviendo la creación de un Estado independiente o que haya creado una milicia paralela a la guardia real. Tras los enfrentamientos el rey Mumbere fue detenido y se enfrentó a acusaciones de terrorismo, robo e intento de asesinato ante un tribunal en diciembre.

Magreb - Norte de África

Marruecos – Sáhara Occidental	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁴⁷
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO

Síntesis:

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

El conflicto en torno al Sáhara Occidental escaló en 2016, en un año caracterizado por los desencuentros entre el Gobierno de Marruecos y la ONU, por cambios

en la dirigencia del Frente POLISARIO tras la muerte de su líder histórico y, a partir del segundo semestre, por la tensa proximidad de tropas marroquíes y saharauis en una zona cercana a la frontera con Mauritania. Las tensiones entre Rabat y la ONU se intensificaron a finales del primer trimestre en el marco de la visita del secretario general de la organización internacional a los campos de refugiados saharauis en el sur de Argelia. Las declaraciones de Ban Ki-moon refiriéndose a la “ocupación” del Sáhara Occidental despertaron una airada reacción de Marruecos, que acusó al diplomático de falta de neutralidad y exigió clarificaciones públicas sobre su posición. El secretario general de la ONU insistió en que sus palabras no pretendían ser hostiles a Rabat ni suponían un cambio de posición del organismo. No obstante, el incidente –calificado como la peor crisis entre Marruecos y la ONU desde el establecimiento del cese el fuego a instancias de la organización– motivó **multitudinarias protestas de miles de personas en la capital marroquí y derivó en la expulsión de la mayor parte del componente civil de la misión de la ONU para el Sáhara Occidental, MINURSO**, además de la suspensión de la aportación económica marroquí para su funcionamiento y el cierre de la oficina de enlace militar. Un total de 84 funcionarios de la MINURSO y de la Unión Africana (UA) se vieron obligados a abandonar la zona en un plazo de tres días, lo que llevó a la ONU a advertir que las capacidades de la misión –incluyendo las del componente militar– quedaban seriamente comprometidas por la decisión marroquí. En este contexto, a mediados de abril se hizo público un nuevo informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental en el que se subrayaba que el mandato de la misión había quedado de facto alterado y que se requería recuperar el contingente. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó renovar por un año más el mandato de la MINURSO e hizo un llamamiento al retorno del componente político de la misión. En este contexto, Rabat autorizó en junio el regreso de un grupo reducido de 25 civiles a la oficina de la MINURSO en El Aaiún. **Esta escalada diplomática coincidió con la muerte del líder del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, el 31 de mayo después de cuatro décadas al mando de la organización.** El dirigente, que también ostentaba el cargo de presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), fue sucedido por Brahim Ghali, otro de los fundadores del grupo y que fue el único candidato en la asamblea extraordinaria de delegados del Frente POLISARIO celebrada en el campo de refugiados de Dakhla 40 días después de la muerte de Abdelaziz.

En este nuevo escenario, durante el segundo semestre la atención estuvo centrada en la zona suroccidental del territorio en disputa, en un área próxima a la frontera con Mauritania considerada como “buffer zone” (zona neutral o tierra de nadie), más allá del muro de arena que habitualmente demarca el área bajo control marroquí.

46. Titeca, Kristof y Anna Reuss, “There is new violence in Western Uganda. Here's why”, *The Washington Post*, 29 de noviembre de 2016.

47. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

Marruecos desplegó a personal militar en este territorio, Guerguerat, en una acción que fue denunciada a mediados de agosto por el Frente POLISARIO como una violación del cese el fuego vigente entre las partes desde 1991. La dirigencia saharauí llamó a la ONU a intervenir ante esta acción, que Rabat justificó como parte de una operación civil, estratégica y limitada en el tiempo destinada a frenar las actividades de contrabando en la zona y construir una carretera. En este escenario, el Frente POLISARIO decidió desplegar también unidades armadas en la zona, lo que llevó a la ONU a manifestar su preocupación por la proximidad de las tropas de ambos bandos, que permanecían separadas por solo unos metros. A finales de año la tensión se mantenía en esta zona, donde la MINURSO desplegó un número limitado de cascos azules desarmados para vigilar la situación. Paralelamente, cabe destacar que durante la segunda mitad del año Marruecos oficializó su iniciativa diplomática tendiente a conseguir la reincorporación del país en la UA después de más de tres décadas. Rabat abandonó la organización regional –en concreto, su predecesora, Organización para la Unidad Africana– después de que la institución aceptara la incorporación de la RASD en 1984. Marruecos ha intensificado sus relaciones con numerosos países del continente en los últimos años –especialmente en el plano económico–, razón por la cual esperaba apoyo a su petición. Diversos análisis destacaron que Rabat no ha disimulado su intención de aislar y eventualmente expulsar a la RASD de la organización regional, la única donde se le reconoce una legitimidad de Estado. En materia de derechos humanos, cabe mencionar que algunos informes –entre ellos el del secretario general de la ONU, publicado en abril, y el de HRW, dado a conocer a principios de 2017– continuaron denunciando las medidas de las autoridades marroquíes para prevenir reuniones y manifestaciones de activistas saharauis, restringir el trabajo de organizaciones de derechos humanos y limitar el acceso de medios de comunicación, ONG y delegaciones extranjeras para verificar la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental.

En marzo Marruecos expulsó a la mayor parte del componente civil de la MINURSO tras declaraciones del secretario general de la ONU sobre la “ocupación” del Sáhara Occidental

Túnez	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS
Síntesis:	Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes.

Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

La situación en Túnez siguió afectada en 2016 por la actividad de grupos armados, en medio de un clima interno caracterizado por dificultades políticas, sociales y económicas. Los diversos hechos de violencia se cobraron cerca de un centenar de víctimas mortales durante el año, una cifra similar a la de 2015 cuando se contabilizaron 120 personas fallecidas, aunque las dinámicas de violencia fueron diferentes. Si 2015 estuvo marcado principalmente por tres grandes ataques reivindicados por ISIS –en el Museo del Bardo, en una zona costera y contra un bus de la guardia presidencial en la capital– que fueron perpetrados por un número reducido de atacantes, **el episodio más significativo de 2016 fue una ofensiva de ISIS contra edificios de la Policía y la Guardia Nacional en la que participaron decenas de miembros del grupo armado en marzo en la localidad de Ben Guerdane, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera con Libia.** Este ataque sin precedentes –por el número de efectivos, el objetivo y el tipo de armamento utilizado– habría pretendido el control de territorio y la proclamación de una nueva “provincia”, y fue acompañado de llamamientos a la población –de 60.000 habitantes– a sublevarse ante las autoridades. Los enfrentamientos entre los miembros de ISIS y las fuerzas tunecinas se cobraron la vida de 40 atacantes, 13 efectivos de seguridad y siete civiles en el primer día de hostilidades, el 7 de marzo, y otra decena de integrantes del grupo armado murieron en operaciones en la zona en los días siguientes. Esta acción de ISIS se produjo semanas después de que un ataque aéreo estadounidense contra posiciones del grupo en Libia causara la muerte de decenas de militantes, en su mayoría de nacionalidad tunecina. Tras los hechos de Ben Guerdane, el Gobierno de Túnez mantuvo cerrada la frontera con Libia durante dos semanas y a lo largo del año expresó su preocupación por las consecuencias de la inestabilidad en el país vecino.⁴⁸ Túnez ha construido también una barrera de 200 kilómetros,

48. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 1 (Conflictos armados).

que cubre la mitad de su frontera con Libia, en un intento por evitar la infiltración de militantes. Además del incidente de Ben Guerdane, a lo largo del año –y al igual que en 2015–, también se produjeron hechos de violencia en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntos militantes y de choques entre militares o policías con miembros de grupos armados. En este contexto, las autoridades renovaron periódicamente el estado de emergencia, vigente en el país desde noviembre de 2015. Según fuentes oficiales, más de 160 células yihadistas habrían sido desarticuladas durante 2016. Sin embargo, grupos próximos a AQMI –como Oqba Ibn Nafaa– y a ISIS –como Jund al-Khilafa– continuaban presentes en áreas montañosas próximas a la frontera con Argelia.⁴⁹ Asimismo, cabe destacar que de acuerdo a estimaciones de diversas fuentes, entre 3.000 y 6.000 nacionales tunecinos se habrían sumado a las filas de ISIS en Siria, Iraq o Libia. Cifras oficiales dadas a conocer a finales de año indican que unos 800 habrían retornado a Túnez y estarían detenidos, bajo arresto domiciliario o vigilancia. Pese a ello, existía preocupación por la posibilidad de que perpetraran ataques en el país. A esto se suma que ciudadanos tunecinos acometieron graves acciones en Europa en 2016 en nombre de ISIS, incluyendo el ataque con camión en Niza, Francia, que dejó 84 víctimas mortales en julio y una ofensiva similar contra un mercado navideño en Berlín, Alemania, que acabó con la vida de 11 personas en diciembre.

El episodio de violencia más significativo de 2016 en Túnez fue la ofensiva de decenas de miembros de ISIS en Ben Guerdane, en marzo, que dejó más de 70 muertes en varios días de combates

Cabe destacar que en paralelo a los retos en materia de seguridad, **Túnez enfrentó un complicado escenario interno, caracterizado a principios de año por la más grave convulsión social desde la revuelta que derivó en la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí a principios de 2011.** En enero se produjeron masivas movilizaciones por las condiciones económicas del país, que se extendieron desde la localidad de Kasserine hacia otras localidades como Sfax, Susa y la capital tunecina. Las manifestaciones se activaron tras la muerte de un joven desempleado que decidió subirse a un poste durante una protesta y murió electrocutado. Durante varios días se produjeron enfrentamientos con la Policía, lanzamientos de artefactos explosivos, ataques a comisarías y saqueos a tiendas y comercios que dejaron más de 200 personas heridas, lo que llevó a las autoridades a decretar toque de queda durante dos semanas. La situación forzó al Gobierno a un profundo cambio de gabinete, condicionado además por la crisis política en el partido del presidente Beji Caid Essebsi. La fractura en Nidaa Tounes se produjo por disensos internos respecto al rol del hijo del mandatario, Hafedh Caid Essebsi, en la organización y derivó en el abandono del partido de una veintena de parlamentarios. Nidaa Tounes perdió así su lugar como principal partido en el

Parlamento, que pasó a ser ostentado por los islamistas de Ennahda. Este último se mantuvo en la coalición gubernamental. Los meses siguientes se caracterizaron por nuevas protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos y heridos –entre ellas, manifestaciones de desempleados en la isla de Kerkennah y en la capital–, críticas a la gestión del primer ministro Habib Essid –en particular por su gestión de la crisis económica, condicionada en parte por la severa caída del estratégico sector turístico y con tasas de desempleo juvenil de entre 30% y 40%–, y por los intentos de conformar un gobierno de unidad. Tras recibir un voto de no confianza del Parlamento, Essid se vio forzado a abandonar el cargo en agosto y fue sucedido por Youssef Chahed, hasta entonces ministro de Asuntos Locales. El dirigente, de 41 años, nombró un gabinete con mayor presencia de mujeres y jóvenes. Durante el último trimestre, sin embargo,

continuaron registrándose protestas y movilizaciones de personas desempleadas y sindicatos y el nuevo Gobierno fue acusado de carecer de una estrategia efectiva para luchar contra la amenaza yihadista. Finalmente, cabe destacar que durante 2016 la Instancia por la Verdad y la Dignidad (IVD) continuó su trabajo de investigación de los abusos y crímenes cometidos en el país desde 1955, un año antes de la independencia de Túnez, hasta 2013. En los últimos tres años la IVD, dirigida por la activista Sihem Bensedrine, ha recopilado los testimonios de 11.000 personas. A finales de 2016 tuvieron lugar las primeras audiencias públicas y televisadas de víctimas de represión. Algunos sectores tunecinos cuestionaron la capacidad y autoridad de la IVD para investigar las miles de denuncias recibidas sobre abusos a los derechos humanos y casos de corrupción.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición, sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)
Síntesis:	El conflicto armado en El Salvador (1980-1992), que llegó a su fin con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, dejó un balance de alrededor de

49. International Crisis Group, *Jihadist Violence in Tunisia: The Urgent Need for a National Strategy*, Middle East and North Africa Briefing no.50, 22 de junio de 2016.

75.000 muertes. Tras la guerra, la consolidación de la paz ha atravesado numerosas dificultades en un país marcado por los altos niveles de pobreza, desigualdad y violencia, donde las pandillas o maras han proliferado colocando al país entre con los índices de homicidios más elevados del mundo. Durante el año 2015, el año más violento de la historia reciente del país, se registraron 6.671 asesinatos, datos que superaron de media las víctimas mortales durante el conflicto armado. La violencia de las pandillas, especialmente la producida por las facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13, aunado a la política de seguridad del Gobierno y a la falta de protección de la población por parte del Estado, ha generado una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Durante el periodo de Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que consiguió reducir los asesinatos de los 4.382 a los 1.050 al año. La tregua se rompió con la llegada de Sánchez Cerén a la presidencia en el año 2015, quien le declaró la guerra a las pandillas, las cuales fueron declaradas grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional.

El año estuvo marcado por la implementación de las “medidas extraordinarias” de seguridad decretadas para combatir a las pandillas por parte del ejecutivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presidido por Salvador Sánchez Cerén, las cuales fueron muy controvertidas, siendo señaladas por diferentes organismos por no respetar los derechos humanos. Las medidas, que vinieron a reforzar la campaña “de mano de hierro” que mantiene el Gobierno de Cerén contra las pandillas desde enero de 2015, consistieron en el incremento del número de efectivos policiales y militares destinados a combatir exclusivamente a las pandillas (Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio, FIRT), y fueron puestas en marcha a principios de abril, luego del aumento de la violencia en el primer trimestre del año. A finalizar el año, los datos presentados por el Gobierno dieron cuenta de una reducción del número de homicidios registrados en el país, pasando de los 6.671 registrados en el 2015 –**cifra record de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando en más de 10 puntos las condiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidémicas, que colocaron a El Salvador como el país con la tasa más alta de violencia del mundo fuera de zona de guerra**– a los 5.278 registrados durante el 2016, lo que supone una reducción de 1.393 muertes según las cifras oficiales. Sin embargo, a estos datos habría que sumarles las muertes de presuntos pandilleros a manos de las fuerzas de seguridad. Según datos recopilados por el medio local *El Faro*, la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas mataron a 693 presuntos miembros de las pandillas en 20 meses (desde enero de 2015 a agosto de 2016). A su vez, en el mismo período se reportó la muerte de 24 policías y soldados.

El Salvador fue considerado en el año 2015 el país más violento del mundo fuera de zona de guerra

Estos datos, según expresaron voces expertas, apuntan a indicios de presencia de ejecuciones sumarias.⁵⁰ Por otro lado, la organización Small Arms Survey había señalado en un informe presentado en el año 2012 que **el país poseía la tasa de feminicidios más alta del mundo con 12 asesinatos por cada 100.000** en el quinquenio 2004-2009.⁵¹ Las cifras aumentaron en el año 2015, pasando la tasa a representar 18.6. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) presentó en agosto un informe en donde analizó el impacto de la violencia en el incremento del desplazamiento forzado en el país, alertando que los colectivos más vulnerables a la violencia siguen siendo las mujeres, los jóvenes y el colectivo LGBTI.⁵² El informe denunció el impacto humanitario que la violencia estaba generando en el país, así como la pasividad del Estado salvadoreño en la defensa y protección de la población. ACNUR también se sumó a las denuncias sobre la vulneración de los derechos de estas personas a la hora de solicitar refugio en terceros países, afirmando que todos estos colectivos en riesgo pueden estar necesitados de protección internacional de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Amnistía Internacional incidió en la denuncia destacando en un informe la vulneración de los derechos de las personas desplazadas de la violencia, solicitando la protección de las leyes internacionales para las personas refugiadas –debido al aumento en el número de deportaciones desde México y EEUU–, así como la implementación de políticas internas de protección de las personas retornadas por las deportaciones, debido a que no existen mecanismos de protección efectiva.⁵³

En este difícil escenario, y de manera más específica sobre lo acontecido en el año, durante el primer trimestre se produjo un aumento de la violencia que derivó en la propuesta del Ejecutivo salvadoreño de decretar el estado de emergencia en los territorios más afectados, así como se anunció el lanzamiento del plan de seguridad “El Salvador Seguro”. Según el jefe del Estado, Salvador Sánchez Cerén, estas medidas buscaron disminuir el número de muertes violentas, las cuales habían aumentado en el primer trimestre del año un 107% respecto al mismo período del año anterior, registrándose más de 1.630 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo. Las medidas incluidas en el plan contemplaron el incremento de efectivos policiales y militares y el aumento de la seguridad en las cárceles, así como también la desmasificación de los centros penitenciarios. Las medidas del ejecutivo produjeron las reacciones de las principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de la mara Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños)

50. Valencia, R. “Casi que Guardia Nacional Civil”, *El Faro*, 3 de octubre de 2016.

51. Alvazzi, A. *Femicide: A Global Problem*. Small Arms Survey. Ginebra, Suiza. 2012.

52. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) “Informe de Registro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Desplazamiento Forzado”, El Salvador, agosto de 2016, p.11.

53. Amnistía Internacional, “¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados”, octubre de 2016.

quienes se comprometieron a contener la violencia a cambio de que el Gobierno renunciara a las medidas extraordinarias. El presidente Sánchez Cerén rechazó el ofrecimiento y anunció su intención de seguir con el plan. A finales de marzo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró el estado de emergencia en siete centros penitenciarios del país, al tiempo que se trasladó a los cabecillas de las pandillas hacia el penal de Quezaltepeque, donde los reos fueron sometidos a un mayor control, aislamiento y cese de comunicación. El endurecimiento de las condiciones carcelarias fue acompañado de un incremento de las operaciones policiales y militares contra las pandillas. Durante las primeras semanas de noviembre se produjo una importante secuencia de asesinatos de miembros de cuerpos de seguridad por parte de presuntos pandilleros. Diez policías y tres soldados fueron asesinados por pandilleros presuntamente vinculados a la MS-13, lo que generó una ofensiva de las fuerzas de seguridad contra los territorios controlados por la pandilla. El incremento de la inseguridad a nivel nacional y la crisis humanitaria (aumento del desplazamiento forzoso y de las deportaciones) provocó que los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala acordaran durante el mes de agosto la puesta en marcha de una fuerza regional para combatir las bandas criminales y el narcotráfico en la conocida como la región del “Triángulo Norte”, presentando de manera oficial el 15 de noviembre la denominada “Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado”. A finales de año, en un comunicado de la MS-13, ésta solicitó al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo público con todos los actores nacionales (Gobierno, oposición, pandillas, organizaciones de derechos humanos) para detener la crisis de violencia y frenar la escalada bélica antes de que derivase en guerra. En su propuesta, la pandilla más numerosa del país, puso sobre la mesa de diálogo la posibilidad de que sus pandilleros se pudieran desmovilizar e incluso, la propia desarticulación de la pandilla, ambos elementos novedosos que no habían sido objeto de negociación en la conocida como La Tregua (2012-2014) debido a la negativa de las pandillas. El vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, manifestó que el Gobierno estudiaría la propuesta, aún y expresando que la Sala de la Constitucional había establecido, en una resolución de agosto de 2015, que las pandillas son grupos terroristas, por lo que el Estado no puede llegar a acuerdos con ellas, lo que dificulta la apertura de negociaciones.

Haití	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares

Síntesis:

Tras la salida del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país, fueron desplegadas consecutivamente una Fuerza Multinacional Provisional y una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH) para auxiliar al Gobierno provisional a restablecer el orden y la seguridad. Aunque se han registrado avances hacia una mayor estabilidad política, social y económica, todavía persisten varios problemas, como las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra la MINUSTAH, las altas tasas de delincuencia, el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas, las exigencias de grupos de antiguos militares para reinstaurar las Fuerzas Armadas o los altos niveles de corrupción, pobreza y exclusión social.

La celebración de los comicios presidenciales y legislativos se vio nuevamente postergada en diferentes ocasiones a lo largo del año, manteniendo abierta la crisis política en el país iniciada desde finales de 2014.

Haití inició el 2016 con fuertes movilizaciones populares que demandaron la dimisión del presidente Michel Martelly, y con la oposición política exigiendo la anulación de todo el proceso electoral por considerar un fraude masivo la primera vuelta electoral celebrada el 25 de octubre de 2015. En este clima, y bajo la justificación del deterioro de la situación de seguridad, el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció la suspensión indefinida de la segunda vuelta de los comicios que estaban previstos para celebrarse el 24 de enero –que ya habían sido aplazados en dos ocasiones durante el 2015–. El 5 de febrero, las dos cámaras parlamentarias haitianas, con el objetivo de reducir la crisis, firmaron un acuerdo que estipulaba que el Parlamento elegiría al presidente interino por un periodo de cuatro meses; se fijaba el 24 de abril como fecha para la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales; y se acordaba un período de cinco años de legislatura para el futuro nuevo presidente. Martelly renunció a la presidencia el 7 de febrero, y el día 14 el Parlamento eligió a Jocelerme Privert presidente interino por un periodo de cuatro meses (que finalmente se extendió hasta acabar el año). Posteriormente, Privert nombró el 15 de marzo a Fritz Alphonse nuevo primer ministro. La formación del nuevo Ejecutivo no logró reducir la crispación y los desacuerdos políticos, y obligó nuevamente al renovado CEP, presidido por Léopold Berlangier, a anunciar el 5 de abril la cancelación de los comicios previstos para finales de mes. Privert anunció una nueva fecha electoral para finales de octubre y procedió a la instalación de la Comisión de Evaluación y de Verificación Electoral (CIEVE), cuya misión prevista era la de restablecer la confianza de los actores políticos en el proceso electoral. El 30 de mayo, la CIEVE recomendó la cancelación de los resultados de los comicios de octubre de 2015, debido a la detección de fraudes e irregularidades, y propuso su repetición. La CEP aprobó la medida y decretó la repetición de la primera vuelta el día 9 de octubre, y el 8 de enero de 2017 como fecha para la celebración de la segunda vuelta electoral. Los diferentes candidatos presidenciales, incluidos Jovenel Moïse, candidato del partido de Gobierno Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), y

Jude Celestin, principal figura de la oposición y candidato de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (Lapeh), se comprometieron a respetar la nueva hoja de ruta propuesta por la CEP. Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, mostró su preocupación por las constantes postergaciones de los comicios, y reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas de prestar su pleno apoyo al pueblo haitiano en el cumplimiento de sus aspiraciones democráticas, solicitando a todos los actores haitianos que garantizaran el pronto retorno al orden constitucional. La ONU también reconoció a finales de año su responsabilidad en el brote de cólera del 2010 que mató a alrededor de 10.000 personas, el cual fue originado desde el contingente de cascos azules nepalés de la MINUSTAH. El mandato de la misión de la ONU en el país fue ampliado en el mes de octubre por el Consejo de Seguridad hasta el 15 de abril de 2017.

El paso del huracán Matthew el 4 de octubre, que dejó un balance de más de 500 muertos y una importante crisis humanitaria, obligó una vez más a retrasar las fechas de las elecciones presidenciales y legislativas. La primera vuelta de las presidenciales se celebró finalmente el 20 de noviembre, y contó con el despliegue de 130 expertos y observadores de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Jovenel Moïse obtuvo la victoria en la primera vuelta, donde ningún partido obtuvo mayoría absoluta. La segunda vuelta de los comicios presidenciales, de la cual debe salir electo el nuevo presidente haitiano, está prevista que se celebre el 29 de enero de 2017.

Honduras	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

En 2009 la tensión política y social en Honduras se incrementó notablemente tras anunciar el presidente, Manuel Zelaya, su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse a un nuevo mandato, una medida que generó un amplio rechazo entre determinados sectores sociales y políticos que le acusaban de haberse alejado de las posiciones mayoritarias en su propio partido y de haberse aproximado en exceso a los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial a Venezuela. A finales de junio de 2009, la destitución por la fuerza de Zelaya por parte del Ejército provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya. Éste regresó sorpresivamente a Honduras en septiembre de 2009, poco antes de la celebración de elecciones presidenciales, pero no pudo concurrir a los comicios y tuvo que refugiarse en la embajada brasileña y partir hacia República Dominicana en enero de 2010. Tras varios meses de protestas por parte de organizaciones que condenaban el golpe de Estado y exigían el retorno de Zelaya, éste regresó a Honduras a mediados de 2011.

Global Witness denunció que Honduras se ha convertido en el 2016 en el país del mundo más peligroso para las personas defensoras del medioambiente, habiendo registrado 123 activistas de la tierra y el medio ambiente asesinados en el país desde el golpe de Estado de 2009, siendo otros muchos amenazados, atacados o encarcelados. Tan sólo en el año 2016, la ONG registró 13 asesinatos de activistas medioambientales.⁵⁴ En el que fue el asesinato que mayor trascendencia mediática tuvo, el 3 de marzo varios hombres armados asesinaron en su domicilio en La Esperanza a la activista medioambientalista Berta Cáceres, líder de la organización Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en un ataque en el que también resultó herido Gustavo Castro, director de la organización mexicana Otros Mundos Chiapas. Cáceres había sido premiada en abril de 2015 con el galardón ecologista Goldman, por su defensa contra la construcción de la presa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque en Agua Zarca, que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas. La líder indígena lenca contaba desde 2009 con medidas cautelares de protección facilitadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien exigió al Gobierno una respuesta por la falta de protección de la activista. Berta Cáceres había presentado 33 denuncias de amenazas contra su vida a la Policía, sin que ninguna fuera investigada. Su asesinato causó una gran conmoción e indignación en el país, generando muchas voces de solidaridad y de condena al mismo por parte de diferentes grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, destacando organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra, Vía Campesina o Global Witness, quienes exigieron al Gobierno hondureño una investigación independiente para esclarecer los hechos, así como medidas para proteger a activistas hondureños. Posteriormente, el 15 de marzo se reportó un nuevo asesinato de otro dirigente del COPINH, Nelson García, en el municipio de Río Lindo, departamento de Cortés. El 18 de octubre, otros dos activistas hondureños por el derecho a la tierra, José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, fueron asesinados en Tocoa, en el departamento de Colón. Ambos activistas también contaban con medidas cautelares de protección facilitadas por la CIDH. Al finalizar el año, seis personas habían sido detenidas acusadas de participar en el asesinato de Cáceres, entre ellas, un mayor del Ejército y el gerente de asuntos sociales y ambientales de la empresa DESA, contratada para construir la represa en Agua Zarca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió a Honduras como “uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos”. Así mismo, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), entre 2014 y mayo de 2016 fueron asesinados 21 periodistas. Amnistía Internacional, en su informe anual sobre la situación de los derechos

54. Global Witness, “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”, enero de 2017.

humanos en el mundo, también denunció la violencia e intimidación a la que son sometidos por parte de agentes del Estado y delincuentes, diferentes colectivos hondureños, tales como las personas defensoras de los Derechos Humanos, periodistas, funcionarios de la administración de Justicia, miembros del colectivo LGBTI, así como dirigentes indígenas, campesinos y afrodescendientes inmersos en conflictos de tierras. Human Rights Watch, quien también coincidió en señalar la extrema vulneración de los colectivos señalados, recalcó en su Informe Mundial 2017 el problema crónico que padece el país en materia de criminalidad, impunidad en las violaciones a los derechos humanos, abusos y corrupción policial.⁵⁵ Honduras posee una de las tasas de homicidios más altas del mundo, en gran parte como producto de la violencia criminal y de las maras o pandillas, que la llevó a encabezar la lista de países sin situación de guerra más violentos del mundo en el año 2014. Amnistía Internacional reportó en octubre un aumento del 37% en la tasa de homicidios desde el año 2008, aunque ha disminuido en los dos últimos años. Esta inseguridad generó un incremento del 106% de casos de desplazamiento forzados a finales de 2015.⁵⁶ ACNUR proyectó que desde el año 2004 hasta finales de 2016 se habrían desplazado internamente de manera forzosa alrededor de 190.000 personas a causa de la inseguridad y la violencia. Debido a esta situación, los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala acordaron en agosto poner en marcha una fuerza regional para combatir las bandas criminales y el narcotráfico en la conocida como la región del “Triángulo Norte”. El 15 de noviembre se presentó oficialmente la “Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado”.

La ONG Global Witness registró 13 asesinatos de activistas medioambientales en Honduras durante el año

México	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.

Síntesis:

El régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México durante más de 70 años (1929-2000) consolidando un Estado basado en la corrupción, la impunidad y la represión hacia los movimientos opositores. El 1 de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá, que simbolizaba el éxito de las políticas neoliberales impulsadas bajo el Gobierno presidido por Carlos Salinas de Gortari.

Ese mismo día, desde el sureño estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dio a conocer como movimiento social y armado denunciando la pobreza y exclusión del Estado mexicano hacia a los pueblos indígenas. Tras 12 días de combates, se iniciaron conversaciones de paz bajo mediación del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que concluyeron con la firma de los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996. El acuerdo de paz quedó sin embargo en papel mojado y desde ese momento se ha mantenido un conflicto de baja intensidad en la zona contra las comunidades zapatistas en resistencia. Posteriormente otros movimientos insurgentes surgieron en los estados vecinos de Guerrero y Oaxaca, entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. A la par, la situación de tensión política y social en México también ha estado acompañada por luchas y movilizaciones de diferentes sectores, como organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicatos de maestros y maestras, trabajadores del sector eléctrico, entre otros. En el año 2000 el PRI perdió el poder a manos del Partido de Acción Nacional (PAN), quien en 2006, y bajo la presidencia de Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, iniciándose un conflicto cuya violencia ha salpicado a toda la sociedad. Durante el Gobierno posterior de Enrique Peña Nieto (PRI), quien logró la presidencia en el año 2012, las denuncias de violaciones de derechos humanos –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas– han sido recurrentes en el marco de las acciones de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado que sacude el país.

La ola de violencia que sacude el país desde hace una década, en gran parte relacionada con la “narcoviencia” y la respuesta gubernamental frente a ésta, ha registrado más de 160.000 homicidios dolosos,⁵⁷ que han situado a México entre los tres países más mortíferos a nivel mundial en los últimos dos años, sólo por detrás de Iraq y Siria.⁵⁸ El escenario de violencia ha ido acompañado de un deterioro y de graves violaciones a los derechos humanos en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó durante el mes de marzo un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el cual alertó de la grave crisis de violaciones a los derechos humanos en el territorio, debido en parte a las consecuencias de la impunidad que persisten desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el 2006. En el informe, la CIDH puso énfasis en la grave situación que atraviesa el país en materia de desapariciones forzadas –26.798 casos reportados–, ejecuciones extrajudiciales y tortura –2.420 investigaciones abiertas– así como la situación de inseguridad ciudadana, el desplazamiento forzado de población, las dificultades de acceso a la justicia e impunidad y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia nacional. La CIDH señaló que México alcanzó niveles de violencia alarmantes y recomendó

55. Human Rights Watch, “Informe Mundial 2017. Honduras: Eventos de 2016”, enero de 2017.

56. Amnistía Internacional, “¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados”, octubre de 2016.

57. Secretaría de Gobernación, “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016”, Centro Nacional de Información, México D.F., abril de 2016.

58. International Institute for Strategic Studies, “Armed Conflict Survey 2015”, IISS, 2015.

al Estado mexicano medidas para tratar de romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Esta situación deviene de la controvertida estrategia de la guerra contra las drogas en el país, basada en la utilización del cuerpo militar para funciones de seguridad interna, que cumplió una década después del lanzamiento realizado en el año 2006 durante la legislatura de Felipe Calderón. Su despliegue no logró reducir la tasa de homicidios y la inseguridad en el país, y generó muchas críticas por la violación de derechos, a la par que suscitó importantes preocupaciones constitucionales, ya que según el artículo 16 de la Carta Magna, el Ejército tiene restringido sus funciones domésticas en tiempos de paz. Bajo la legislatura del actual presidente, Enrique Peña Nieto, se duplicó el número de soldados en roles de Policía en el país, pasando de los 1.680 en 2012 a los 3.386 en 2016, sin que ello haya significado mejoras en la seguridad pública. Según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el número total de homicidios de enero hasta octubre de 2016 fue de 17.063, superior a los registrados en el año 2015, con 17.034, o los 15.653 registrados en el año 2014.⁵⁹ De hecho, los datos presentados en el informe Índice Global de Paz 2016, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, registraban cerca de 33.000 muertes en México en el año 2015, cifra mayor que las presentes en países en conflicto armado como Irak y Afganistán.⁶⁰ Durante el mes de marzo, el propio director de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se manifestó crítico frente a la política de militarización de la seguridad ciudadana, mostrándose contrario a la utilización del Ejército para combatir el narcotráfico, al no ser su función. A su vez, y desde el inicio del despliegue del Ejército, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH) recibió más de 9.000 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o uso de la tortura, así como elementos castrenses se vieron involucrados en algunos de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en la última década en el país, como el caso de Ayotzinapa.⁶¹ El deterioro de la situación de los derechos humanos generó que el Departamento de Estado de EEUU retuviera durante el año el 15% de los fondos reservados para las fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la Iniciativa Mérida, en cuyos términos se establece que el 15% de los fondos está condicionado a la mejora de la situación de derechos humanos en el país. Si bien el monto retenido fue muy limitado (5 millones de dólares), analistas locales remarcaron el golpe simbólico que representó para la administración de Peña Nieto. Al finalizar el año,

la Cámara de Diputados discutió una nueva legislación, el proyecto de Ley de Seguridad Interna, el cual propone ampliar y regular la participación del Ejército mexicano en la guerra contra el narcotráfico.

Por otro lado, y en lo que respecta al caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, estado de Guerrero –producida en septiembre de 2014–, en el mes de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por cinco expertos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su misión de investigación sin lograr el objetivo de hallar a los 43 estudiantes normalistas, debido a que el Gobierno mexicano no apoyó la solicitud de prórroga del GIEI. El Grupo Interdisciplinario presentó el 24 de abril su informe final⁶² donde se ratificó en sus críticas al Estado mexicano por la gestión realizada sobre el caso, así como denunció los obstáculos que las autoridades les pusieron para realizar la investigación, volviendo a descartar la hipótesis oficial de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula. Los expertos del GIEI encontraron vínculos entre las corporaciones policiacas de los diferentes municipios involucrados, y lamentaron la falta de solidaridad por parte de las fuerzas de seguridad para con las víctimas, acusándolos de haber realizado un ataque masivo e indiscriminado contra la población civil. En el informe también se denunció las torturas a la mayoría de detenidos en el caso para obtener sus declaraciones auto inculpatorias. A su vez, se instó a las autoridades mexicanas a indagar todo lo relacionado con el quinto autobús –desaparecido de la versión oficial–, que podría ser la clave del caso, abriendo una nueva línea de investigación relacionada con el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, EEUU, que hasta ahora fue bloqueada por las autoridades.

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)
Síntesis:	A finales de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exilió en EEUU después de que la represión de varias protestas antigubernamentales provocara, en los

59. Secretaría de Gobernación, Estadísticas relativas a la Incidencia delictiva del Fuero Común. [Consultado el 30/11/2016]

60. Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2016", IEP report 39, junio de 2016.

61. Human Rights Watch (2016) "Informe Mundial 2016. México. Eventos de 2015".

62. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, "Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas", GIEI, abril de 2016.

meses de febrero y octubre, más de 100 muertes. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a la lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas.

El año en Bolivia estuvo marcado por la celebración del referéndum constitucional celebrado el 21 de febrero, en el cual se decidía si el presidente del país, Evo Morales, podía volver a ser candidato presidencial en las elecciones de 2019. La Constitución boliviana establece que un presidente sólo se puede reelegir en dos ocasiones sucesivas, de ahí que el Gobierno convocase el referéndum para cambiar el artículo constitucional y ampliarlo a tres mandatos consecutivos. Sin embargo, tal y como confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, el referéndum dio la victoria al “No”, que se impuso con el 51,30% de los votos (2.682.517) frente al 48,70% del “Sí” (2.546.135), con una diferencia de 136.382 votos. La participación fue de un 84,45%, con un total de 5.228.652 votos sobre un padrón de poco más de 6,5 millones de electores. El ajustado triunfo del “No” significó la primera derrota electoral de Evo Morales en los diez años que lleva en el poder. Morales gobierna Bolivia desde el año 2006, asumiendo su segundo mandato en 2010 y el tercero en 2015. Morales se pudo presentar a la reelección en el año 2014, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que avaló que su primer mandato (2006-2010) no contaba, debido a la refundación del país como Estado Plurinacional en 2009. El Presidente Morales concluirá su mandato en enero del 2020 y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), declaró que se presentará a los comicios del 2019 con otro candidato.

En otro orden de asuntos, el conflicto que mantiene el ejecutivo de Morales con el sector minero vivió el peor episodio del año durante el mes de agosto, momento en el cual los cooperativistas mineros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) iniciaron protestas exigiendo la anulación de la ley que permite la formación de sindicatos al interior de las cooperativas. Entre las diversas protestas se procedió al bloqueo de carreteras. El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que se desplazó a negociar la suspensión del bloqueo con los manifestantes, fue tomado como rehén el 25 de agosto en una carretera de la localidad de Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz. Horas más tarde fue torturado y asesinado por los mineros que lo retenían. A su vez, en los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en los bloqueos en Cochabamba (centro) y el

altiplano (oeste) también perdieron la vida tres mineros por disparos de la Policía, mientras un cuarto falleció mientras manipulaba explosivos. El asesinato de Illanes se saldó con la encarcelación de al menos seis mineros, entre ellos, el presidente de Fencomin, Carlos Mamani, y el vicepresidente de esa organización, Agustín Choque.

Perú	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

Durante el año la actividad armada de los grupos remanentes de Sendero Luminoso en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fue muy reducida. La mayor acción de la organización maoísta en 2016 se produjo el 16 de abril, en vísperas de la primera vuelta de los comicios presidenciales, cuando una emboscada cometida contra una patrulla militar por un comando de la organización armada se saldó con la muerte de 10 personas, entre ellos ocho militares y dos civiles, además de cinco personas heridas. Durante el resto del año apenas se produjeron incidentes relacionados con actividades armadas de grupos opositores. Sin embargo, el día 11 de octubre entró en vigor la declaración de estado de emergencia decretado por el Gobierno en la región del VRAEM durante un periodo de dos meses que, según informó el Ministerio de Defensa, tuvo como objetivo el despliegue de soldados en el área para combatir lo que denominaron “narcoterrorismo”, referido a la presencia de organizaciones armadas como Sendero Luminoso, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. El estado

de emergencia sirvió para proveer las bases legales al Ejército peruano para renovar la participación militar en el área, después de la decisión de la administración anterior (Ollanta Humala) de desmilitarizar la lucha contra las drogas en el VRAEM.

Por otro lado, el año también estuvo marcado por el desarrollo de los comicios presidenciales. El economista Pedro Pablo Kuczynski, luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, hija mayor del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), se convirtió en el nuevo presidente peruano. Según los datos facilitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Kuczynski se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio, con un margen muy ajustado, obteniendo el 50,12% de los votos (8.591.802) frente al 49,87% (8.549.205) de su rival Keiko Fujimori, lo que significó una ventaja de tan sólo 42.597 votos. La participación registrada fue del 80% del censo electoral, en un país en el que el voto es obligatorio. Los comicios determinaron también que el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) obtuvo la mayoría de escaños en el Parlamento (73), seguido del partido de izquierdas Frente Amplio (FA) (20) y en tercer lugar el partido de Kuczynski, Peruanos por el Cambio (PPK) (18), lo que obligará al ejecutivo a gobernar en coalición. Una de las primera medidas tomadas por el nuevo ejecutivo fue la de iniciar la refundación de las fuerzas policiales, despidiendo a casi la mitad de los generales, tras denuncias de abusos y corrupción y una creciente inseguridad ciudadana.

Finalmente, y en otro orden de aspectos, antes de que Kuczynski asumiera el cargo, y aún con Ollanta Humala en la presidencia nacional, el ex presidente Alberto Fujimori solicitó el 23 de julio el indulto presidencial. Fujimori cumple en la actualidad, y desde el año 2009, una condenada de 25 años de prisión por graves violaciones de los derechos humanos, secuestro agravado y asesinato, cometidos por el grupo militar encubierto “Colina” en la zona de Barrios Altos y tiene además otras sentencias por delitos de corrupción. Tras la negativa de Humala de indultar al exmandatario, y la postura contraria también del presidente Kuczynski, Fujimori desistió de mantener la petición de indulto presidencial y evaluaba recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otro lado, y vinculado con el período de la guerra sucia contra grupos opositores de izquierda desarrollada bajo el fujimorismo, el 7 de septiembre se conoció la sentencia que condenó al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y al exjefe de las Fuerzas Armadas de Perú, Nicolás Hermosa Ríos, a 22 años de cárcel por la desaparición forzada de tres personas en 1993. La sentencia también ordenó la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de

prisión. Los tres fueron declarados responsables de la desaparición forzada del profesor Justiniano Najarro Rúa y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIE), que Montesinos dirigió en la sombra durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori.

Venezuela	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 se produjeron numerosas movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno y de la llamada Revolución Bolivariana, especialmente durante periodos electorales y durante el intento golpe de Estado del año 2002. Sin embargo, la actual crisis política y social que atraviesa el país se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 por cáncer. Tras hacer pública su enfermedad en 2011, Chávez tuvo que abandonar sus funciones en varias ocasiones para recibir tratamiento médico, provocando según algunos analistas un claro debilitamiento del Gobierno. A pesar de ello, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 2012. Tras la muerte de Chávez, la oposición calificó de fraude constitucional la toma de posesión del cargo del hasta entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, por considerar que el puesto correspondía al presidente del Parlamento. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. Tras la validación de resultados por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición impugnó las elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la segunda mitad del 2013 se produjeron numerosas movilizaciones de partidarios y detractores del Gobierno y se produjeron varios episodios de violencia. La dinámica de polarización social continuó a principios de 2014 y la violencia se incrementó tras unas protestas estudiantiles iniciadas en el mes de febrero.

La abrumadora victoria electoral conseguida por la oposición venezolana en las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2015, las cuales le otorgaron el control de la Asamblea Nacional (Parlamento),⁶³ marcó un **año caracterizado por el incremento de la tensión política entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el nuevo poder Legislativo en manos opositoras**. A la crisis política se le sumó el deterioro progresivo de la situación económica y social, debido a la contracción de la economía, al incremento de la tasa de inflación anual en torno al mil por ciento, la disminución de los ingresos estatales debido al bajo precio del petróleo, y un grave

63. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo el 67,07% de los votos, (112 diputados de la Asamblea Nacional) y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró el 32,93% del respaldo popular (55 diputados)

desabastecimiento de productos básicos que hizo que el Gobierno decretase la situación de emergencia nacional. Tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (AN), el 5 de enero, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a 21 partidos de la oposición, planteó diferentes fórmulas para acabar con la presidencia de Maduro y evitar que cumpla su periodo de gobierno, previsto para finalizar en enero de 2019. Las medidas fueron desde la realización de un referéndum revocatorio, hasta la reforma constitucional para la renovación de los poderes del Estado, pasando por una enmienda constitucional que reduzca el mandato presidencial de seis a cuatro años. El Gobierno respondió a las propuestas de la AN con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), argumentando que las decisiones de la cámara estaban sujetas a su aprobación por parte del máximo organismo judicial, bajo control gubernamental. En el mes de marzo la AN aprobó la enmienda constitucional para la reducción del período de mandato presidencial, y también la ley de amnistía para lograr la liberación de lo que la oposición considera presos políticos. Sin embargo, ambas iniciativas fueron revocadas posteriormente por el TSJ. En marzo la MUD presentó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud del referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, y a finales de abril empezó la recolección de firmas, presentando durante el mes de mayo ante el CNE 1.850.000 firmas. Como respuesta, el presidente Maduro decretó el Estado de Excepción y Emergencia Económica, por medio del cual se suspendieron las garantías constitucionales por un periodo inicial de 60 días. La medida fue desconocida por la AN por considerarla inconstitucional. Sin embargo, días después, el TSJ de Venezuela declaró la “constitucionalidad” del decreto presidencial. A principios de junio, la CNE invalidó un tercio de las firmas presentadas por la oposición para la realización del referéndum revocatorio, aunque aun así las firmas válidas siguieron constituyendo mucho más del requerido 20% del electorado. En septiembre, la CNE comunicó que el referéndum, en caso de producirse, no se realizaría antes del primer trimestre del 2017, lo cual salvaguardaba al Gobierno, y exigió a la oposición la presentación del 20% de las firmas, no sólo del electorado nacional, sino también de cada uno de los 23 estados del país, lo que fue denunciado por la oposición como inconstitucional. Posteriormente, en una resolución muy controvertida, cinco tribunales regionales emitieron una sentencia de fraude en la recolección de las firmas que llevó a la suspensión indefinida del referéndum por parte del CNE, incrementándose el clima de crispación política. Los partidos opositores calificaron el hecho como un golpe de Estado y plantearon nuevas acciones contra el Gobierno de Maduro: aumentaron las movilizaciones sociales, iniciaron un procedimiento contra el presidente en la AN y solicitaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que invocase la Carta Democrática Interamericana ante la “crisis institucional y humanitaria”, cuya última consecuencia es la suspensión del país de su pertenencia a la OEA.

En paralelo al clima de tensión política en el país, durante el año se pusieron en marcha diferentes intentos de mediación para buscar soluciones a la crisis. Inicialmente la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), envió un equipo de mediación encabezado por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con los exmandatarios de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, al que posteriormente se unió el Vaticano, siendo representado por Monseñor Emil Paul Tscherrig. La mediación logró establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que consiguió, el 12 de noviembre, una declaración conjunta denominada “Convivir en paz”, en la que ambas partes se comprometieron a cumplir con la Constitución del país, y expresaron su compromiso con una convivencia pacífica y sin violencia. Al finalizar el año, y con muchos altibajos en las negociaciones, el proceso de mediación seguía abierto.⁶⁴

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kazajstán	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales

Síntesis:

Desde su independencia de la URSS en 1991, Kazajstán ha experimentado un crecimiento económico significativo en paralelo a una evolución política y social mayoritariamente estable. Sus extensos recursos minerales y energéticos han sido motor de su economía, mientras se ha asistido a la consolidación del nuevo Estado-nación –con algo más de la mitad de población kazaja y diversas minorías, principalmente la rusa–. Entre los principales retos que afronta el país en el siglo XXI se incluye los riesgos de conflictividad social vinculada al déficit democrático y a las políticas con tendencias autoritarias de un régimen bajo el control rígido de su presidente Nursultan Nazarbayev, en el poder desde 1989. Además, existe un riesgo creciente de incidentes de violencia vinculados a grupos armados locales y regionales de inspiración islamista.

Se incrementó la tensión en el país, en contraste con años anteriores, de la mano de una mayor conflictividad social así como de las supuestas amenazas procedentes de organizaciones y sectores armados, con varios ataques durante el año que causaron más de una treintena de víctimas mortales. En el ámbito de seguridad, un ataque atribuido en algunos medios a sectores afines a ISIS en junio en la localidad de Aktobe (noroeste) causó la muerte de más de una veintena de personas, principalmente atacantes (tres soldados, tres civiles y 19 atacantes), según fuentes policiales. Además, otros

64. Véase el resumen sobre Venezuela en el capítulo 3 (Procesos de paz)

cinco supuestos atacantes murieron por un operativo de las fuerzas de seguridad en días posteriores, a lo que se sumaron diversas detenciones. Según informaciones de prensa, el grupo atacó primero un establecimiento de venta de armas y asaltó después de un autobús, con el que atacaron la sede de una unidad militar. No obstante, por parte de las autoridades apenas trascendió información sobre los hechos. Algunos medios apuntaron a un ataque con escasa capacidad organizativa y poca financiación y a que no había suficientes evidencias sobre algún tipo de red vinculado a ISIS detrás del ataque. A su vez, otro ataque en julio en Almaty por parte de un hombre armado resultó en 4 policías y dos civiles muertos y 17 heridos, tres de los cuales murieron posteriormente. Hubo versiones diferentes sobre la naturaleza del ataque. El Comité de seguridad nacional apuntó a un móvil de radicalización salafista. Por otra parte, durante el año decenas de personas fueron detenidas y sentenciadas a prisión con cargos de terrorismo, incluyendo una treintena de personas en relación al ataque de Aktobe. A finales de diciembre, una quincena de personas fueron detenidas acusadas de pertenencia al grupo Tafkir wal-Hijra. En los últimos años diversos análisis han alertado sobre ciertos riesgos a la estabilidad procedentes de algunos grupos islamistas sobre los que, sin embargo, habría trascendido poca información.⁶⁵ Por otra parte, se produjeron protestas sociales en diversos momentos del año, sobre todo en abril y mayo, contra enmiendas al código agrario –sobre el que finalmente se impuso una moratoria–, así como huelgas de envergadura en el sector de la minería. Se denunciaron detenciones y enjuiciamiento de manifestantes, activistas y periodistas. El incremento de la conflictividad se produjo en un contexto de declive económico en el país. Algunos análisis calificaron las olas de protestas como un grado de movilizaciones sin precedentes.⁶⁶ Por otra parte, el país celebró elecciones parlamentarias, en relación a las cuales la OSCE identificó irregularidades y errores de procedimiento graves, señalando también que el marco legal del país restringe derechos políticos y civiles fundamentales.

Kirguistán	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán
Síntesis:	
Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la ex república soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto	

sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió en junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.

Kirguistán continuó haciendo frente a diversos focos de tensión, incluyendo en el ámbito político-social, de seguridad, derechos humanos y relaciones con los países vecinos. En clave política-social, en febrero y marzo se produjeron movilizaciones en localidades del sur del país, en protesta contra recortes a prestaciones y subidas de tarifas eléctricas. Se sumaron también movilizaciones en demanda de la dimisión del Gobierno, protagonizadas por sectores políticos del sur, incluyendo la recién creada Fuerza de Oposición Unida (UOF, por sus siglas en inglés), que aglutina a sectores cercanos a los ex presidentes Akáyev y Bakíyev. El Comité de Seguridad Nacional denunció planes de derrocar al Gobierno y de toma de poder por sectores opositores. Entre marzo y mayo se detuvo a diversos líderes y miembros de organizaciones políticas opositoras. Así, en mayo se detuvo en la capital, Biskek, al líder del movimiento Parlamento Popular y ex ministro, Bekbolot Talgarbekov, y a otros dos de sus líderes, el ex juez Marat Sultanov y el ex candidato presidencial Torobay Kolubáyev, acusados de preparar una toma violenta del país y de desestabilizar la situación política, en un contexto previo a las movilizaciones que organizaban para ese mes en la capital. También en clave política aumentaron las tensiones en la segunda mitad del año en torno a la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente, Almazbek Atambáyev, pese a la moratoria vigente que impide cambios constitucionales antes de 2020. Los cambios contemplan un incremento de poderes para la figura del primer ministro –en parte en detrimento de competencias presidenciales– y la eliminación de la prioridad de los tratados internacionales de derechos humanos sobre otros tratados internacionales, entre otras cuestiones. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió una opinión conjunta que señalaba que algunos de los cambios generaban preocupación respecto a principios

65. International Crisis Group, *Kazakhstan: Waiting for Change*, Crisis Group Asia Report N°250, 30 de septiembre de 2013.

66. Deirdre Tynan, “Kazakhstan’s Protests Postponed – But for How Long?”, *International Crisis Group, Commentary / Europe & Central Asia*, 12 de mayo de 2016.

democráticos clave, en especial el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, y que tenían el riesgo potencial de violar ciertos derechos humanos y libertades fundamentales.⁶⁷ El Gobierno colapsó en octubre por la salida del partido del presidente, el SDP, de la coalición gubernamental ante el rechazo de la propuesta de cambios constitucionales en el seno de la coalición. En noviembre se formó una nueva coalición, integrada de nuevo por el SDP y otras formaciones, y el referéndum fue aprobado en diciembre por cerca del 80% de los votos y una participación del 42%. Previamente, en abril había dimitido el primer ministro en medio de acusaciones de corrupción.

Por otra parte, en relación a la situación de seguridad, continuaron las alertas sobre riesgos de seguridad procedentes de organizaciones armadas en el conjunto de Asia Central. Uno de los hechos más significativos fue un atentado suicida con coche bomba en agosto contra la embajada china en la capital, Biskek, en el cual resultaron heridos tres trabajadores. Los servicios de seguridad identificaron al atacante como un ciudadano de la comunidad uigur con pasaporte tayiko y miembro de ETIM, grupo armado secesionista musulmán de la región de Xinjiang (oeste de China) al que el Gobierno chino acusa de vínculos con ISIS.⁶⁸ Asimismo, circuló un video de la organización armada Frente al-Nusra, que combate en Siria, con críticas al Gobierno kirguizo. Además, las embajadas de EEUU y Reino Unido emitieron alertas por riesgos de ataques terroristas, en sus primeros llamamientos de este tipo. A su vez, durante el año las autoridades detuvieron a decenas de personas acusadas de pertenencia a grupos ilegales, entre ellas una quincena de mujeres supuestamente integrantes de la organización no armada Hizb ut-Tahir. Por otra parte, el relator especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos expresó en febrero su profunda preocupación por el aumento de ataques verbales, intimidación y acoso contra grupos de la sociedad civil. Asimismo, como en años anteriores hubo focos de conflicto relativos a tensiones fronterizas. Así, **en agosto aumentó la tensión entre el Gobierno kirguizo y el uzbeko en torno a una zona montañosa en disputa por los dos países, la zona de Unkur-Too.** Varios ciudadanos kirguizos fueron detenidos, acusados de entrada ilegal en Uzbekistán y el Gobierno uzbeko movilizó fuerzas policiales y de frontera, afirmando su soberanía sobre la zona. En respuesta, Kirguistán desplegó fuerzas y ordenó revisar los acuerdos fronterizos internacionales con Uzbekistán. Finalmente, en septiembre y octubre ambos ejecutivos procedieron a desescalar la tensión, retirando tropas y a través de otras medidas de confianza, como visitas mutuas en octubre. Diversos

Los cambios constitucionales aprobados en referéndum en Tayikistán prohíben la existencia de partidos de base religiosa, lo que consolidó el desmantelamiento del marco político de los acuerdos de paz de 1997

medios apuntaron a la supuesta voluntad del presidente en funciones uzbeko, Shavkat Mirziyayev –en el cargo tras la muerte en septiembre de Islam Karimov–, de mejorar las relaciones con los países vecinos.

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados islamistas.

Continuó la situación de fragilidad en relación a diversos ejes de conflictividad, incluyendo el incremento de alertas en torno a la frontera con Afganistán, con ejercicios militares masivos; y la represión interna,

completándose el desmantelamiento del marco de coexistencia política y poder compartido de los acuerdos de paz de 1997. Ante el deterioro de la situación en el noreste de Afganistán, se incrementaron las alertas por los riesgos de impactos en Tayikistán, que incrementó en junio el número de tropas y puestos militares en torno a la frontera por las percibidas amenazas de insurgentes y actores de corte criminal armados. Se produjeron incidentes en marzo en la frontera, entre guardias fronterizos y supuestos talibanes, con al menos un soldado tayiko fallecido. Además, Tayikistán y Rusia llevaron a cabo ejercicios militares de gran escala en marzo a lo largo de la frontera, con varias decenas de miles de tropas

67. Venice Commission y OSCE/ODIHR, *Joint opinion on the draft law “on Introduction of amendments and changes to the Constitution”*, Venice Commission Opinion No. 863 /2016, CDL-AD(2016)025, 19 de octubre de 2016.

68. Véase el resumen sobre China (Xinjiang) en este capítulo.

y reservistas. Tayikistán realizó ejercicios militares durante el año también con la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo (abril) y con China (octubre), orientados a la lucha antiterrorista y riesgos relativos a la frontera afgana. No obstante, algunos análisis pusieron en cuestión o relativizaron la supuesta expansión de ISIS en el norte de Afganistán y los riesgos consiguientes para Tayikistán. Asimismo, un comunicado de las milicias talibanas afganas en julio señaló que no permitirían a otros grupos utilizar su territorio para interferir en asuntos internos de países vecinos centroasiáticos y que ellos mismos tampoco tenían esa intención. Por otra parte, el Gobierno tayiko cifró en un millar el número de personas de Tayikistán que se habrían unido a ISIS en Siria e Iraq, de las cuales unas sesenta ya habrían regresado al país.

Por otra parte, **continuó la situación de conflictividad interna por la persecución de las autoridades al opositor Partido del Renacimiento Islámico (PRI)**, actor clave del conflicto armado de los años noventa y de los acuerdos de paz de 1997. La represión de los últimos años contra esta organización –agravada en 2015 con su designación como organización terrorista– culminó en 2016, de la mano de cambios constitucionales significativos. Así, las enmiendas aprobadas en referéndum en mayo incluyen la prohibición de partidos de base religiosa. El PRI era el único partido musulmán legal en los países centroasiáticos ex soviéticos. Además, durante el año continuaron los juicios contra líderes y miembros del PRI, acusados de intentar derribar el régimen. A la persecución del partido y el desmantelamiento que supone de los acuerdos de 1997, se añaden otras consecuencias derivadas de los cambios constitucionales. Así, éstos suponen la eliminación de la restricción en el número de mandatos presidenciales para el actual presidente, Emomali Rahmon, por su condición de “Líder de la nación”. Además, se redujo la edad requerida para optar a la presidencia, de 35 años a 30, lo que fue interpretado en algunos análisis como una medida encaminada a favorecer la posible candidatura del hijo del presidente, Rustam Emomali, en los comicios de 2020. Por otra parte, continuaron las denuncias y alertas sobre las violaciones de derechos humanos, presentadas en diversos foros, incluyendo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (AL), oposición política (partidos BNP y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

Bangladesh vivió una situación de grave tensión política y violencia a lo largo de todo el año que tuvo diversos focos: los asesinatos de activistas seculares y atentados por parte de grupos islamistas extremistas; los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición política, con diversas manifestaciones de violencia; y finalmente la actuación del Tribunal para Crímenes Internacionales. El primero de los focos de tensión giró en torno a la acción de varios grupos armados de oposición islamistas que perpetraron asesinatos selectivos de activistas seculares en diferentes momentos del año. Entre los asesinatos que más repercusión generaron cabe destacar el de un estudiante que había profesado de forma abierta su ateísmo a través de las redes sociales y cuya ejecución en el mes de mayo fue reivindicada por el grupo armado de oposición Ansar al-Islam, vinculado a al-Qaeda, señalando que se trataba de una operación de castigo contra la blasfemia. Tras su asesinato, centenares de personas llevaron a cabo una manifestación de protesta en la capital de Bangladesh denunciando la impunidad y los asesinatos de activistas ateos en el país. Posteriormente, un profesor universitario y activista cultural fue asesinado en un atentado reivindicado por ISIS. Posteriormente se organizó una manifestación de protesta en la universidad en la que trabajaba. Días después, fueron asesinados dos activistas por los derechos de la población LGTBI y fue gravemente herido el guarda de seguridad del edificio en el que se hallaba la sede de la revista en la que trabajaban, única publicación dirigida a la comunidad LGTBI de Bangladesh. Estos asesinatos también fueron reivindicados por Ansar al-Islam. Con anterioridad a estos asesinatos del mes de abril seis activistas seculares habían sido asesinados de forma similar. Desde febrero de 2015 se han producido más

de 30 asesinatos de miembros de minorías religiosas, académicos y activistas, de los que el grupo armado ISIS ha reivindicado 21. No obstante, el Gobierno ha negado en repetidas ocasiones que ISIS tenga presencia en el país, aunque el Ejecutivo sí destacó los vínculos de la oposición política con los asesinatos por parte de las organizaciones armadas islamistas, acusaciones que la oposición siempre ha negado. En la operación policial que se abrió tras los asesinatos, más de 8.000 personas fueron detenidas, algunas de ellas integrantes del partido político islamista Jamaat-e-Islami. También resultaron muertas varias personas en diferentes tiroteos con la Policía, lo que llevó a las organizaciones de derechos humanos a denunciar las tácticas de la Policía. En julio tuvo lugar el hecho de violencia más grave de todo el año, cuando se produjo un atentado en una cafetería de Dhaka que causó la muerte de 23 personas –dos policías y el resto extranjeras– y que fue reivindicado por ISIS. Un grupo de hombres armados asaltó la cafetería, muy frecuentada por extranjeros, y tomó como rehenes a las personas que estaban en el interior, liberando posteriormente a las personas que sabían recitar el Corán. La mayoría de las personas asesinadas murieron acuchilladas. Las fuerzas de seguridad iniciaron una operación tras la toma de rehenes y señalaron que habían tiroteado a seis atacantes. Las autoridades bangladeshíes, que niegan que ISIS tenga presencia en el país, apuntaron al grupo JMB (una de las principales insurgencias que operan en el país), del que las autoridades señalan que no tiene vínculos con ISIS, pero que sí se ha adherido a esta organización. A finales de julio, nueve hombres armados murieron durante una operación de las fuerzas de seguridad en Dhaka vinculada al atentado. Días después de este atentado un grupo de hombres armados llevó a cabo otro ataque durante la celebración del fin del Ramadán en Sholakia, ciudad donde se congregaban 200.000 personas con motivo de esta festividad religiosa. Cuatro personas – dos policías, una mujer y uno de los atacantes – murieron y diez policías resultaron heridos.

En lo que respecta al segundo foco de tensión, durante todo el año se repitieron las manifestaciones por parte de la oposición y el Gobierno acentuó la represión, con miles de detenciones, sobre todo de militantes del principal partido de la oposición, el BNP. En el mes de marzo, en el marco de las elecciones locales se produjeron al menos 11 muertes como consecuencia de la violencia electoral, aunque el BNP cifró en 22 los fallecidos y denunció el fraude generalizado en los comicios. Además, prosiguieron los procesos judiciales contra la líder de la oposición y ex primera ministra, Begum Khaleda Zia, acusada de corrupción. Finalmente, el Tribunal para Crímenes Internacionales prosiguió su tarea de enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra durante el conflicto armado por la independencia de 1971. En mayo, se produjeron importantes protestas en varias ciudades del país y enfrentamientos entre manifestantes y policía después de la ejecución del líder del partido político islamista Jamaat-e-Islami, Motiur Rahman Nizami, acusado

de haber intervenido en la masacre de intelectuales durante el conflicto de 1971. 20 personas fueron detenidas después de las protestas. Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos como los de Turquía y Pakistán condenaron la ejecución de Nizami, que es el quinto líder de esta organización en ser ejecutado desde 2013 tras ser condenado por el Tribunal Internacional. Algunos medios señalaron que el Gobierno bangladeshí se estaría planteando la ilegalización de Jamaat-e-Islami.

India (Assam)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

El estado indio de Assam continuó afectado por la violencia armada y a lo largo de todo el año **se registraron de forma esporádica atentados y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados de oposición que operan en el estado**. Aunque según los datos ofrecidos por el South Asia Terrorism Portal la cifra de víctimas mortales como consecuencia de la violencia fue ligeramente superior a la registrada el año anterior –86 muertes en 2016 y 59 en 2015–, estuvo muy lejos de las 305 víctimas mortales que se registraron en 2014. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo múltiples operaciones de contrainsurgencia durante todo el año y anunciaron decenas de detenciones de integrantes de los grupos armados insurgentes activos en Assam. No obstante, estos grupos denunciaron que algunos de los acusados de formar parte de los grupos armados no eran insurgentes, sino civiles. Además, se repitieron las denuncias por parte de la población local acerca de las continuas extorsiones por parte de los diferentes grupos armados. La fuerzas de seguridad concentraron su acción contra el grupo armado NDFB-IKS, responsable de la masacre que tuvo lugar en

2014 en el Bodoland Territorial Area District cuando 45 personas musulmanas bengalí hablantes murieron tiroteadas y 70 casas fueron incendiadas. Este grupo fue también protagonista del episodio de violencia más grave de 2016, en el que 14 personas murieron tiroteadas y 15 resultaron heridas después de que hombres armados supuestamente integrantes del NDFB-IKS abrieran fuego en un mercado en el distrito de Kokrajhar, uno de los más afectados por la violencia. Días después, tres miembros de este grupo armado murieron durante una operación de las fuerzas de seguridad indias en el distrito de Sonitpur. En paralelo, el grupo armado ULFA-I (facción contraria a las negociaciones de paz con el Gobierno indio) también protagonizó diferentes episodios de violencia. En el mes de febrero un insurgente de este grupo murió junto a otros tres integrantes del grupo armado naga NSCN-K en una operación de las fuerzas de seguridad en la zona fronteriza con el estado de Arunachal Pradesh. En abril, las fuerzas de seguridad indias acusaron al grupo armado de ser el responsable de un atentado en el distrito de Goalpara en el que murieron tres personas y otras 25 resultaron heridas tras la explosión de una granada. Días después un policía y un integrante del grupo armado murieron en un enfrentamiento armado en este mismo distrito. En noviembre tres soldados murieron durante un choque armado con integrantes del ULFA-I en el distrito de Tinsukia. Finalmente, se registraron enfrentamientos de forma esporádica con los grupos armados de oposición NSLA, UPLA y KPLT en los que resultaron muertos tanto insurgentes como miembros de las fuerzas de seguridad, según informó la prensa local.

La decisión gubernamental de crear nuevos distritos en el estado indio de Manipur acrecentó las tensiones intercomunitarias dando lugar a disturbios y enfrentamientos

sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

El estado indio de **Manipur** continuó afectado por la violencia durante todo el año, aunque **se registró una reducción tanto en el número de episodios violentos como de personas fallecidas como consecuencia de la violencia armada**. A lo largo de 2016 se registraron 51 atentados con bomba y un total de 33 personas murieron como consecuencia de atentados o en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición que operan en el estado. Así pues, se consolida la tendencia en la reducción progresiva en el número de atentados que se constata desde el año 2013, en el que se registraron 76 frente a 107 en 2012. Desde entonces se ha registrado una reducción de forma ininterrumpida. En lo que respecta a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos insurgentes, en abril tres personas –un miembro de las Fuerzas Armadas indias, un insurgente y un civil– murieron como consecuencia de un enfrentamiento en el distrito de Tamenglong entre el grupo armado de oposición ZUF. En mayo seis

miembros de las fuerzas de seguridad indias murieron tras ser atacados por insurgentes pertenecientes a la CorCom, plataforma que agrupa a varios grupos insurgentes que operan en el estado –KCP, KYKL, PREPAK, PREPAK (Pro), RPF y UNLF–. No obstante, los episodios de mayor tensión se vivieron en los meses de noviembre y diciembre, tras la decisión del Gobierno de crear siete nuevos distritos en el estado, dividiendo los nueve ya existentes. Esta decisión acrecentó las tensiones entre las diferentes comunidades étnicas que viven en el estado, especialmente entre la población meitei (mayoritaria) y la población naga. La creación de los nuevos distritos fue percibida como una maniobra del ministro jefe del estado y rechazada por las organizaciones naga, que convocaron un bloqueo de las dos principales carreteras del estado, generando un importante impacto económico y dando lugar a disturbios y enfrentamientos. Además, tres policías murieron y ocho resultaron heridos en dos ataques atribuidos al grupo armado de oposición naga NSCN-IM, que habitualmente opera en el estado de Nagalandia y que se opuso también a la nueva división territorial. Dos importantes líderes sociales naga fueron detenidos, incrementando la tensión y el descontento. El bloqueo se extendió durante los meses de noviembre y diciembre provocando desabastecimiento en los bienes básicos, así como una importante subida de precios. En respuesta al bloqueo convocado por las organizaciones naga, diferentes grupos de población meitei promovieron también otro bloqueo en las carreteras que dan acceso a los distritos habitados mayoritariamente por población naga. Decenas de camiones fueron incendiados.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:

La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

La relación entre India y Pakistán sufrió un notable deterioro a lo largo del año y se registraron diversos enfrentamientos diplomáticos de gravedad así como episodios de violencia en la Línea de Control, frontera de facto que separa a ambos países, y atentados. Además, el incremento de la violencia en el estado indio de Jammu y Cachemira tuvo una repercusión directa en la relación entre ambos Gobiernos.⁶⁹ El año comenzó con un atentado contra la base aérea india de Pathankot el 2 de enero que se saldó con la muerte de seis insurgentes y siete soldados. El atentado fue reivindicado por la coalición de grupos armados United Jihad Council, pero el Gobierno indio responsabilizó directamente a Pakistán del ataque, lo que llevó a la cancelación de un encuentro previsto entre los secretarios de Estado de ambos países. Este incidente y la posterior respuesta diplomática marcaron el tono de las relaciones el resto del año, con repetidas acusaciones por parte de la India a Pakistán de estar detrás de diferentes episodios de violencia y la congelación de las relaciones diplomáticas de alto nivel. No obstante, el Gobierno indio accedió a que un equipo pakistaní se desplazara a territorio indio para investigar el atentado de Pathankot y celebró también las detenciones practicadas por Pakistán de más de una decena de miembros del grupo armado JeM, a quien se responsabilizó de forma directa del atentado. La detención en el mes de marzo de un ciudadano indio en la provincia pakistaní de Baluchistán, acusado de espionaje, llevó a la suspensión

del proceso de diálogo entre India y Pakistán, aunque a finales de abril los dos ministros de Exteriores se reunieron durante la celebración de una cumbre regional asiática en Delhi. El deterioro del conflicto armado en Jammu y Cachemira desde el mes de julio elevó la tensión entre los Gobiernos indio y pakistaní con acusaciones mutuas de terrorismo. No obstante, **la tensión llegó a su máximo epicentro en septiembre como consecuencia de un ataque contra una base de las Fuerzas Armadas indias de Uri que causó la muerte de 19 soldados indios y cuatro insurgentes cachemires, el más mortífero contra las fuerzas de seguridad indias en Cachemira en las últimas décadas.** India señaló que el Gobierno pakistaní era cómplice directo del atentado y anunció que no asistiría a la cumbre de la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (SAARC) prevista para noviembre en Pakistán, boicot al que se sumaron Bangladesh, Afganistán y Bután. Además, anunció que suspendía las conversaciones de la Comisión sobre las Aguas del Indus a lo que Pakistán respondió señalando que consideraría un acto de guerra que la India se retirara de este tratado. En los últimos meses del año se repitieron los intercambios de fuego en la frontera, con algunos episodios graves como la muerte de nueve civiles en Pakistán después de que el autobús en el que viajaban fuera alcanzado por artillería india. Tanto India como Pakistán desplazaron a miles de civiles residentes en las inmediaciones de la frontera en operaciones de evacuación. Además, varios diplomáticos fueron expulsados de los dos países en el marco de múltiples acusaciones mutuas de espionaje.

Nepal	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles

Síntesis:

En 1996 se inició un conflicto armado que durante una década enfrentó al Gobierno nepalí con el brazo armado del partido maoísta CPN-M, el People's Liberation Army (PLA), que buscaba derrocar la monarquía e instaurar una república maoísta, en un país afectado por la ausencia de democracia, la pobreza, el feudalismo y la desigualdad. Tras diez años de conflicto armado y un autogolpe de Estado por el que el rey asumió todos los poderes del Estado en 2005, a finales de abril de 2006 el rey Gyanendra decretó la reapertura del Parlamento después de varias semanas de intensas protestas sociales que costaron la vida a una veintena de personas. Las protestas, que llevaron al derrocamiento del rey, fueron organizadas por una coalición de los siete principales partidos democráticos de oposición y los maoístas. Tras la caída de la monarquía éstos declararon unilateralmente un alto el fuego secundado por el Gobierno provisional. En noviembre de 2006 se firmó un acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado y posteriormente se proclamó la república. En el año 2008 se estableció una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna nepalí, aunque las

69. Véase el resumen sobre India (Jammu y Cachemira) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

sucesivas crisis políticas y la falta de acuerdo sobre aspectos clave del proceso de paz como la descentralización territorial han desembocado en un estancamiento de este proceso.

La situación de tensión mejoró notablemente en Nepal después de que las protestas contra la nueva Constitución aprobada en 2015 y que derivaron en disturbios violentos cesaran en el mes de febrero.

Después de que en enero se produjera la muerte de tres personas madhesi en enfrentamientos con la policía, en febrero se levantó el bloqueo de carreteras promovido por las organizaciones madhesi en protesta por la reorganización territorial promovida por la Constitución y que se había prolongado durante cinco meses. El levantamiento del bloqueo que impedía el abastecimiento de bienes esenciales procedentes de la India alivió la grave situación humanitaria que había generado y permitió un repliegue de gran parte de las fuerzas de seguridad que se habían desplegado durante el apogeo de las protestas contra la nueva Constitución. No obstante, tras el levantamiento del bloqueo, las negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones madhesi opuestas a la reorganización territorial constitucional permanecieron bloqueadas durante varios meses. Finalmente, en el mes de julio el primer ministro KP Oli dimitió después de que se presentara en el Parlamento una moción de confianza. En agosto fue nombrado para el cargo Pushpa Kamal Dahal, antiguo dirigente del grupo armado de oposición maoísta CPN –época en la que era conocido por su alias Prachanda– y que ya ostentó el cargo entre 2008 y 2009, después de que en 2006 finalizara el conflicto armado en el país. El nuevo primer ministro se comprometió a abordar las demandas de los grupos madhesi, janajati y tharu y en noviembre el Gobierno acordaba una propuesta de reforma de la Constitución para acoger las demandas de los partidos madhesi. Esta reforma incluía cuestiones como nuevas delimitaciones de las provincias, para crear una nueva provincia adicional únicamente integrada por distritos de la zona de Terai (mayoritariamente habitada por población madhesi), que parte de la representación en la cámara alta estuviera vinculada a los porcentajes de población, así como el otorgamiento de la nacionalidad a las mujeres no nepalíes casadas con un nepalí, aunque no en el caso de los hombres no nepalíes casados con mujeres nepalíes. Un elevado número de hombres madhesi están casados con mujeres no nepalíes. En paralelo a la cuestión de la reforma constitucional se discutió en torno a posibles fechas para la celebración de elecciones locales sin que al finalizar 2016 se hubiera alcanzado un acuerdo al respecto. La oposición al Gobierno era partidaria de la celebración de elecciones locales previamente a la implementación de las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno, mientras que las organizaciones madhesi sostenían la necesidad de poner en marcha las reformas constitucionales para que las elecciones locales se celebraran con la nueva organización territorial ya aplicada.

Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una convicción exiliándose a Arabia Saudí. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finaliza su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán sigue siendo un país inestable.

Pakistán continuó viviendo un clima de tensión política y violencia a lo largo de todo el año, que tuvo diversos focos. **La ciudad de Karachi continuó afectada por elevadas tasas de violencia y numerosos asesinatos selectivos, aunque se registró un notable descenso en el número de muertes violentas.** Según los datos recopilados por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, en 2016 se registraron 476 muertes violentas lo que representó un descenso de más del 50%, ya que en 2015 se habían producido 1.040 muertes violentas. El distrito de Karachi fue el más afectado por la violencia de todo el país, por encima de otros afectados por conflictos armados como Quetta, Waziristán Norte o la Khyber Agency, entre otros. De hecho, según este mismo centro, la provincia de Sindh, de la que Karachi es capital, registró el tercer mayor número de muertes de carácter sectario de todo el país. Entre los asesinatos registrados durante el año cabe destacar el del defensor de derechos humanos y activista contra el extremismo religioso, Khurram Zaki, tiroteado en la ciudad. **En lo que respecta a esta violencia de carácter sectario, cabe destacar que en el mes de febrero se llevó a cabo la ejecución de Mumtaz Qadri, condenado a pena de muerte por el asesinato del gobernador de Punjab Salman Taseer en 2011.** Taseer se significó por su oposición a la legislación contra la blasfemia y su defensa de una mujer cristiana condenada a pena de muerte acusada de profanar el Corán. Tras la ejecución de

Qadri se registraron protestas en varias ciudades del país, que no recibieron cobertura mediática por orden expresa de las autoridades. Se temía que la ejecución pudiera desencadenar graves disturbios violentos en todo el país, ya que Qadri era considerado un héroe por amplios sectores religiosos del país y los críticos con las leyes contra la blasfemia han sido objeto de amenazas y asesinatos.

Por otra parte, se registraron protestas contra el Gobierno protagonizadas por los seguidores de Imran Khan, que derivaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, como ya sucediera en 2014. Durante la comparecencia del primer ministro Nawaz Sharif ante el Tribunal Supremo para aclarar las informaciones aparecidas acerca de la implicación de familiares directos en el escándalo de los papeles de Panamá, Sharif negó ser titular de ninguna compañía offshore en Panamá. El caso fue presentado ante este tribunal por el partido PTI, que encabeza Khan. 1.800 de sus seguidores fueron arrestados en los días siguientes, en los que se produjeron disturbios después de que se les prohibiera manifestarse en las calles de Islamabad y Rawalpindi y se impusiera un veto de dos meses a las manifestaciones en la capital. Las manifestaciones que tuvieron lugar en emplazamientos autorizados de la periferia fueron reprimidas con gases lacrimógenos. Por otra parte, cabe destacar la decisión del servicio de inteligencia del país, ISI, de llevar a cabo reuniones en las cuatro provincias para trasladar a los servicios desplegados el mensaje de que los servicios de inteligencia militares no deberán interferir cuando se lleven a cabo acciones de carácter legal contra los grupos insurgentes. Según reveló el diario Dawn, esta decisión sin precedentes se tomó después de que en una reunión en la oficina del primer ministro con autoridades militares y civiles para abordar el creciente aislamiento internacional del país, el ministro jefe de Punjab acusara al ISI de interferir siempre que integrantes de determinados grupos eran arrestados para ponerlos en libertad. La prensa señaló que se trataba de unas declaraciones orquestadas por el propio Sharif, para quien el aislamiento diplomático del país por la complacencia con los grupos terroristas, es una amenaza real.

Las reformas iniciadas en Sri Lanka en 2015 se ralentizaron notablemente comprometiendo los avances en derechos humanos y lucha contra la impunidad

Sri Lanka	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social tamil
Síntesis:	
En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras	

la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde entonces miles de tamiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos.

En Sri Lanka, las reformas iniciadas en 2015 tras la conformación de un nuevo Gobierno se ralentizaron poniendo de manifiesto la limitada voluntad política del Ejecutivo para cumplir con las exigencias en materia de derechos humanos y reformas democráticas planteadas por la comunidad internacional y la sociedad civil. Además, persistieron las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y de falta de garantías democráticas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas señaló que la práctica de la tortura era común en Sri Lanka y que se ejercía de manera rutinaria por parte de la Policía. Naciones Unidas y defensores de derechos humanos también expresaron su preocupación por el borrador legislativo sobre contraterrorismo por contener serias restricciones a la libertad de expresión, sobre

todo en lo relativo a la integridad territorial de Sri Lanka. La elaboración de una nueva Constitución se postergó en varias ocasiones y el año concluyó sin que ésta se hubiese iniciado, a pesar del impulso que representaron las reformas constitucionales aprobadas por el nuevo Gobierno en 2015. Además, se produjeron graves casos de corrupción que conllevaron la detención de varios familiares directos del antiguo presidente Mahinda Rajapakse y que involucraron a colaboradores cercanos del actual primer ministro Ranil Wickremesinghe. En lo que respecta a las medidas adoptadas para investigar los crímenes cometidos durante la última fase del conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado LTTE y que concluyó en 2009, cabe destacar que en agosto se aprobó la creación de la Oficina de Personas Desaparecidas para investigar los casos de desapariciones forzadas. El Gobierno accedió a las demandas de establecer oficinas locales en las zonas del norte y el este que resultaron afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos señalaron que la creación de esta oficina pretendía servir de contrapeso ante la comunidad internacional por la decisión de presidente y primer ministro de que la investigación sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado tuviera únicamente un carácter interno sin implicación internacional, tal y como ha exigido Naciones Unidas en repetidas ocasiones. Tanto el presidente Sirisena como el primer ministro descartaron la presencia de jueces

extranjeros en este tribunal como reclamaban también las asociaciones de víctimas. Además, no se constató ningún avance en la desmilitarización del norte y del este de la isla.

Asia Oriental

China – Japón	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Japón

Síntesis:

La disputa entre China y Japón (y, en menor medida, Taiwán) por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración unilateral en 2013 por parte de China de una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluía a las islas en disputa, así como las acciones unilaterales de ambas partes que antecedieron y siguieron a dicha declaración por parte de Beijing, incrementaron significativamente la tensión bilateral y regional en torno a un contencioso histórico que se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta pero que, según varios analistas, contiene el potencial para provocar algún incidente militar entre ambos países e incluso para desestabilizar la región.

A pesar de que se produjeron algunos encuentros al más alto nivel y se reanudaron las conversaciones sobre el establecimiento de mecanismos de cooperación aérea y naval, **durante el año se incrementó la tensión política y militar por la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu, por los numerosos incidentes alrededor de las mismas, por la nueva estrategia de seguridad nacional japonesa, por el rol de EEUU en la región o por el incremento de las actividades de prospección y perforación petrolífera en aguas en disputa en el Mar de la China Oriental.** Respecto a esta última cuestión, Japón elevó numerosas protestas diplomáticas ante Beijing por considerar que China estaba violando un acuerdo de 2008 que exhortaba a ambos países a cooperar en la exploración y explotación de las reservas de gas y petróleo en las aguas cercanas a las islas Senkaku/Diaoyu. Por su parte, China rechazó todas las acusaciones de desarrollo unilateral en la región y afirmó que todas las estructuras y actividades de prospección petrolífera se concentran en aguas que no están en disputa. En este sentido, a principios de año el partido gubernamental japonés instó al Ejecutivo a buscar un arbitraje internacional respecto de las actividades de China en el Mar de la China Oriental. Por otra parte, se registró un notable incremento de la tensión política y

militar acerca de la disputa que ambos países mantienen en las islas Senkaku/Diaoyu. Como en años anteriores, China siguió reivindicando su soberanía y reclamó su derecho a llevar a cabo actividades de patrullaje y pesca o bien de instalar radares en las aguas que las rodean. En este sentido, medios de comunicación japoneses señalaron a finales de año que durante el 2016 más de 120 embarcaciones chinas se adentraron en las aguas territoriales de las islas Senkaku/Diaoyu. Para tener una perspectiva comparativa, en 2008 solamente se registraron dos incursiones, mientras que en 2012 (año en el que se incrementó drásticamente la tensión, después de que el Gobierno japonés comprara algunos de los islotes de las Senkaku/Diaoyu) y 2013 se produjeron 188 incursiones. Según los mencionados medios de comunicación, 2016 fue el primer año en el que se sobrepasaron las 100 incursiones. De igual modo, a principios de agosto el Gobierno japonés hizo público un comunicado en el que sostenía que durante los primeros días de agosto se incrementó sustancialmente el número de guardacostas chinos con presencia en las aguas en disputa y que hasta 230 barcos pesqueros chinos escoltados por seis guardacostas chinos se habían adentrado en las mencionadas aguas. En la misma línea, a finales de junio, el Gobierno japonés señaló que el número de aviones militares japoneses que despegaron ante la cercanía de aviones chinos aproximándose a su espacio aéreo fue de 199 entre abril y junio, una cifra un 80% superior a la del mismo periodo del año pasado e incluso superior a la del trimestre anterior, en la que ya había sido alta. A modos de ejemplo, cabe tomar en consideración que, según Tokio, en 2015 se interceptaron 571 aeronaves chinas.

Por su parte, China se defendió de las acusaciones por parte de Japón alegando que muchas de las mencionadas aeronaves realizaban ejercicios militares normales y tareas de vigilancia de la Zona de Identificación de Defensa Aérea que proclamó unilateralmente China en 2012 y que provocó las protestas de varios países en la región. Uno de los principales problemas que han tenido ambos países desde el año 2012 es que las denominadas Zonas de Identificación de Defensa Aérea se solapan, lo cual ha ocasionado numerosos desencuentros. Además, China también criticó el anuncio hecho por Japón a principios de año sobre su intención de incrementar sus medios de vigilancia y protección en la región de las islas Senkaku/Diaoyu, así como la promulgación de una nueva ley de seguridad nacional, que expande el rol y las funciones de las Fuerzas Armadas japonesas. Por otra parte, la tensión acerca de esta disputa se acrecentó nuevamente después de que China expresara su malestar y preocupación por la intención del Gobierno japonés de que la UNESCO declare patrimonio de la humanidad las islas Amami-Ryukyu. Aunque Tokio ha señalado que las islas Senkaku/Diaoyu no están incluidas en la propuesta que debe presentar formalmente en febrero de 2017 para que su posible designación se haga efectiva en 2018, Beijing considera que ello puede afectar negativamente la gestión y resolución del contencioso que mantiene con

Japón. Finalmente, cabe destacar que **se incrementó la tensión entre China y EEUU por varios motivos**. En primer lugar, por el anuncio a mediados de septiembre por parte de la ministra de Defensa de Japón sobre su intención de iniciar operaciones conjuntas de patrullaje y entrenamiento con EEUU en el Mar de la China Oriental. Algunos medios de comunicación chinos reaccionaron a dichas declaraciones anticipando posibles respuestas por parte de Beijing, como la declaración de una Zona de Identificación de Defensa Aérea en las islas Spratly. Pocos días antes de estas declaraciones por parte de la ministra de Defensa japonesa, habían iniciado los ejercicios militares conjuntos en el Mar de la China Oriental que cada año llevan a cabo China y Rusia. En segundo lugar, por las acusaciones de Beijing a Washington de llevar a cabo vuelos de reconocimiento en áreas costeras chinas. De hecho, en junio EEUU acusó a China de haber interceptado a un avión estadounidense que sobrevolaba espacio aéreo internacional en el Mar de la China Oriental. En tercer lugar, porque en varias ocasiones durante el año el Gobierno estadounidense manifestó su intención de respetar el tratado de defensa bilateral con Japón para defender la soberanía japonesa en caso de agresión contra su territorio, en clara alusión a las islas Senkaku/Diaoyu. Dicho compromiso fue reiterado a principios de año por el nuevo secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, después de que algunos medios de comunicación japoneses mostraron su preocupación por el futuro de las relaciones bilaterales entre EEUU y Japón por la ambigüedad con la que el entonces candidato presidencial Donald Trump se refirió al pacto de defensa bilateral o por la advertencia a Japón y Corea del Sur por su escasa contribución a los varios gastos de defensa, como el estacionamiento de soldados estadounidenses en la región.

Las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur se deterioraron drásticamente a raíz de los dos ensayos nucleares y del lanzamiento de numerosos misiles balísticos llevados a cabo por Pyongyang

la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

A diferencia del año pasado, **no se registraron incidentes militares destacables entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioraron drásticamente a raíz de los dos ensayos nucleares y del lanzamiento de numerosos misiles balísticos llevados a cabo por Corea del Norte**. En

efecto, al día siguiente de que Pyongyang declarara haber llevado a cabo un ensayo con una bomba de hidrógeno a principios de enero, el Gobierno surcoreano cesó los proyectos de cooperación transfronteriza, reanudó la propaganda antigubernamental con altavoces desde la frontera (el año pasado se utilizó esta misma estrategia por vez primera en los últimos 11 años) y limitó la entrada al complejo industrial de Kaesong (situado en Corea del Norte, cerca de la frontera), símbolo de los escasos proyectos de cooperación entre ambos países. Al mes siguiente, después de que Corea del Norte lanzara un cohete de largo alcance (aunque Pyongyang afirmara de

que se trataba de la puesta en órbita de un satélite), Seúl ordenó el cierre de dicho complejo, alegando que la mayor parte de los beneficios del mismo alimentaban el programa armamentístico de Corea del Norte. En respuesta, Pyongyang ordenó la expulsión de todos los ciudadanos surcoreanos del país, congeló los activos de las empresas surcoreanas y amenazó con militarizar el complejo industrial de Kaesong y con cortar las líneas de teléfono directo con Corea del Sur. Además, poco después del mencionado lanzamiento de un cohete, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur lanzaron varios disparos de advertencia contra un navío norcoreano que, según Seúl, había sobrepasado la Northern Limit Line (NLL), que hace las funciones de frontera marítima de facto entre ambos países en el Mar Amarillo (la demarcación fronteriza marítima reivindicada por Corea del Norte está situada algo más al sur que la NLL). La tensión entre ambos países volvió a agudizarse en el mes de marzo, después de que EEUU y Corea del Sur iniciaran unos nuevos ejercicios militares conjuntos, los mayores que jamás habían realizado. Pyongyang declaró nulos todos los acuerdos bilaterales en materia económica, instó al Consejo de Seguridad a abordar dichos ejercicios militares e incrementó notablemente el lanzamiento de misiles balísticos. Poco después, Corea

Corea, RPD – Rep. de Corea

Intensidad: 3

Evolución: =

Tipología: Sistema Internacional

Actores: RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en

del Sur declaró que la península coreana se hallaba en un estado de semi guerra y bloqueó numerosas webs y redes sociales de Corea del Norte. En esta misma línea, en el mes de junio el Gobierno de Corea del Sur denunció que Corea del Norte había llevado a cabo un ataque informático contra decenas de miles de ordenadores de empresas y agencias públicas surcoreanas.

Por otra parte, **las relaciones entre ambos países también se vieron afectadas por el anuncio de EEUU y Corea del Sur sobre su intención de instalar para finales de 2017 un nuevo sistema de escudos antimisiles en territorio surcoreano**, anuncio que también criticaron los Gobiernos de China y Rusia. En este sentido, cabe destacar que a principios de año trascendió a la prensa un presunto ofrecimiento de diálogo de Corea del Norte a EEUU acerca de la posibilidad de sustituir el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea con un tratado de paz. Sin embargo, EEUU rechazó tal ofrecimiento por la negativa de Pyongyang a incluir en las conversaciones su programa nuclear. Según analistas, EEUU habría modificado levemente su posición respecto al diálogo con Pyongyang pues si bien hasta el momento había exigido a Corea del Norte avances en la desnuclearización del país antes de entablar cualquier diálogo, en esta ocasión no pidió pasos previos sino inclusión del tema en la agenda de las conversaciones. En la misma línea, en mayo el Gobierno de Corea del Sur también habría rechazado un ofrecimiento por parte de Pyongyang de reanudar conversaciones militares, también por la negativa del Gobierno a abordar el programa nuclear norcoreano. Por tanto, así como el año anterior se registraron varios incidentes militares pero a la vez se llevaron a cabo numerosas medidas de fomento de la confianza y se mantuvieron abiertos varios canales de comunicación, durante 2016 el diálogo entre ambos países fue prácticamente inexistente.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en

la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

La tensión acerca del programa armamentístico de Corea del Norte se incrementó notablemente respecto de los años anteriores por los dos ensayos nucleares llevados a cabo por Pyongyang durante el año; por el lanzamiento de numerosos misiles balísticos –más de 20, según algunas fuentes– o por los distintos informes que alertan sobre los avances tecnológicos del programa nuclear norcoreano. En efecto, a principios de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución (2270), impulsada por EEUU y China, que ampliaba las sanciones contra Corea del Norte por haber llevado a cabo un ensayo nuclear con una bomba de hidrógeno en enero –a pesar de que algunas voces científicas cuestionaran de que efectivamente se tratara de una bomba de hidrógeno– y por haber puesto un órbita un satélite que, según varios países, en realidad era un cohete que doblaba la capacidad de carga de los anteriores cohetes testados y tenía un alcance de unos 12.000 kilómetros. Además de la aprobación de la resolución, EEUU impuso nuevas sanciones unilaterales a Corea del Norte e inició, juntamente con Corea del Sur, los mayores ejercicios militares de los últimos tiempos. Por su parte, Seúl puso fin a la cooperación transfronteriza y ordenó el cierre del complejo industrial de Kaesong por considerar que las ganancias que generaba eran reinvertidas en el programa armamentístico norcoreano. En plena escalada de la tensión militar y diplomática que se produjo en el primer semestre del año, Corea del Norte disparó misiles de corto, medio y largo alcance en varias ocasiones –provocando una enérgica condena por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y de su secretario general– y canceló todos los programas de cooperación en materia económica con Corea del Sur. Además, el líder norcoreano declaró que la península coreana se hallaba en un estado de semi guerra, instó a su Gobierno a seguir llevando a cabo ensayos nucleares, y anunció haber logrado la miniaturización de las cabezas nucleares para ser adosadas a misiles balísticos, uno de los principales temores de la comunidad internacional. En la misma línea, el propio Kim Jong-un declaró durante el 7º Congreso del Partido de los Trabajadores que se celebró en mayo (el primero en 36 años) que el programa nuclear norcoreano proseguiría. Algunos analistas señalan que actualmente Corea del Norte dispone de entre 12 y 20 cabezas nucleares y que en los siguientes cinco años podrían alcanzar las entre 50 y 100. Además, según estos mismos expertos, Pyongyang dispone actualmente de entre 200 y 320 misiles balísticos Nodong de medio alcance (con capacidad para impactar cualquier ciudad japonesa y las bases militares de EEUU en la región), varios misiles Musudan de largo alcance (con capacidad para impactar en Alaska y en Guam, isla en la que EEUU tiene una importante

base militar) y está desarrollando algunos misiles de largo alcance que podrían alcanzar determinadas partes de la costa oeste de EEUU. En este sentido, en el mes de junio la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) advirtió que varias imágenes por satélite sugerían que el complejo nuclear de Yongbyon, el mayor del país, se había reactivado, por lo que urgió al Gobierno norcoreano a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la propia AIEA. Más tarde, en el mes de agosto, el Gobierno norcoreano reconoció haber reanudado la producción de plutonio, lo cual contraviene varias resoluciones de Naciones Unidas.

En la segunda mitad del año, la tensión se mantuvo en niveles altos por la imposición de nuevas sanciones a Corea del Norte por parte de EEUU y la UE, por el frecuente lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang, por el anuncio de los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur de instalar en territorio surcoreano un nuevo sistema de antimisiles para finales de 2017 y, especialmente, por la **aprobación de una nueva resolución de condena por parte del Consejo de Seguridad en el mes de noviembre, después de que a principios de septiembre Corea del Norte llevara un nuevo ensayo nuclear, el segundo de Kim Jong-un y el quinto en los últimos años.** Dicho ensayo, el mayor de los que han tenido lugar hasta el momento –provocó un sismo de 5,3 en la escala de Richter– provocó la condena por parte de la comunidad internacional, incluida China, pues según algunos analistas demostraría que Pyongyang ya dispone de la capacidad para construir bombas nucleares de la potencia de las que se lanzaron sobre Hiroshima en 1945. Tras este ensayo, el Gobierno de EEUU ordenó que varios de sus bombarderos sobrevolaran la llamada Zona Desmilitarizada, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, siendo la ocasión en la que aviones estadounidenses han sobrevolado más cerca del espacio aéreo norcoreano. Además, EEUU y China decidieron incrementar su cooperación para lograr que Corea del Norte no siguiera violando resoluciones en materia de no proliferación nuclear. En este sentido, a finales de noviembre, el Consejo de Seguridad aprobó, nuevamente por unanimidad, una resolución en la que condenaba el programa nuclear norcoreano e imponía nuevas sanciones. Además de estas medidas, los Gobiernos de Corea del Sur y de Japón anunciaron nuevas sanciones unilaterales. Por su parte, China declaró que se opone a las sanciones unilaterales y advirtió sobre la necesidad de calibrar las consecuencias humanitarias de las mismas. Cabe señalar que previamente el Consejo de Seguridad de la ONU ya había condenado y considerado una grave violación de sus obligaciones internacionales el lanzamiento de tres misiles de medio alcance por parte de Corea del Norte, uno de los cuales había caído en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Japón, lo cual fue considerado una amenaza grave por parte del Gobierno japonés. Como reacción a la nueva resolución por parte del Consejo de Seguridad, a principios de diciembre Corea del Norte llevó a cabo ejercicios militares de gran envergadura y simuló atacar objetivos norcoreanos, incluyendo la

residencia presidencial. A finales de año, durante un discurso dirigido a la población norcoreana, Kim Jong-un declaró que Corea del Norte está en las fases finales de testar un misil balístico intercontinental y advirtió a EEUU que abandone la política hostil hacia Corea del Norte que ha seguido Washington en los últimos años. A pesar de que hasta el momento Pyongyang no ha testado con éxito ningún misil balístico intercontinental, las afirmaciones de Kim Jong-un provocaron una cierta alarma internacional y motivaron la inmediata respuesta del presidente electo de EEUU, Donald Trump, negando la posibilidad de que un misil norcoreano pudiera impactar partes del territorio estadounidense.

Sudeste Asiático y Oceanía

Tailandia	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social en el país. Así, un partido leal a Thaksin Shinawatra ganó los comicios de diciembre de 2007. Sin embargo, durante el año 2008 los numerosos actos de violencia y las movilizaciones masivas en contra del Gobierno convocadas por la Alianza Popular para la Democracias (movimiento conocido como “camisas amarillas”) provocaron la renuncia de dos primeros ministros y la llegada al poder en diciembre de 2008 de Abhisit Vejjajiva, opositor a Thaksin Shinawatra. Desde entonces, se producen de forma periódica manifestaciones multitudinarias del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Como en el año anterior, **no se registraron actos de violencia significativos ni movilizaciones o protestas de consideración, aunque persistieron las críticas por parte de ONG, gobiernos e incluso organismos internacionales como Naciones Unidas por la precaria situación de los derechos humanos, por los presuntos intentos de la Junta Militar –también conocida como Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO)– de perpetuarse en el poder y por las políticas de control y represión de la oposición por parte del Ejecutivo.** Cabe destacar que el 7 de

agosto se aprobó en referéndum la nueva Constitución, redactada por un organismo designado por el CNPO, con una participación del 59% y un porcentaje de apoyo a la nueva Carta Magna del 61%. La mayor parte de provincias sureñas, junto con Bangkok, votaron a favor de la nueva Constitución, mientras que un buen número de provincias del norte y nordeste del país lo hicieron en contra. Además, en dicho referéndum se aprobó (con un 58% a favor) que el Senado eligiera, conjuntamente con la Cámara de Representantes, al primer ministro. El comité encargado de la redacción de la Constitución incluyó finalmente la petición del CNPO de establecer un Senado de 250 miembros designados por el Consejo en un período de cinco años tras las elecciones que deberán elegir al nuevo Gobierno en Tailandia. Según el propio CNPO, esta medida es necesaria para preservar la paz y la seguridad durante la transición de la Junta Militar a un Gobierno civil. En varias ocasiones el CNPO había anunciado su intención de convocar estas elecciones durante el 2017, pero dejó la puerta abierta a posponerlas si para entonces no estaban listas todas las leyes necesarias para su celebración. En este sentido, el actual primer ministro, Prayuth Chan-ocha, que en repetidas ocasiones había manifestado su voluntad de no perpetuarse en el cargo, declaró tras la aprobación de la nueva Constitución que se abría a postularse para el cargo si no había otra persona más cualificada. Cabe destacar que pocos días después de la celebración del referéndum, se produjeron una cadena de atentados en 17 localidades de siete provincias del país. Previamente, el día antes de la celebración del referéndum, también hubo tres explosiones en el sur del país. Si bien al principio hubo algunas voces que vincularon estos atentados con la situación política del país y el proceso de aprobación de la nueva Constitución, las autoridades finalmente responsabilizaron a grupos armados que operan en el sur del país. El año pasado, también en el mes de agosto, 20 personas murieron – dos terceras partes extranjeras– y más de 120 resultaron heridas tras el estallido de un artefacto explosivo en Bangkok, considerado por el Gobierno y varios medios de comunicación como el peor atentado de la historia del país.

Durante el año, pero especialmente durante los meses anteriores al mencionado referéndum constitucional, partidos de la oposición, organizaciones de los derechos humanos e incluso gobiernos u organismos internacionales como Naciones Unidas criticaron las medidas ejecutivas y legislativas destinadas a reprimir a los sectores críticos con el Gobierno, a restringir la libertad de expresión y a impedir un debate con garantías democráticas. Así, **durante el año se endurecieron las penas contra numerosas personas que fueron detenidas por criticar a la Junta Militar.** En los días anteriores al referéndum, 23 embajadores denunciaron la falta de debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, y 117 líderes de organizaciones políticas y sociales instaron al Gobierno a permitir comentarios críticos con este texto. Es especialmente significativo que los ex primeros ministros Thaksin Shinawatra y Abhisit Vejjajiva, en polos opuestos del

espectro político, criticaran tanto los contenidos como el proceso de aprobación de la nueva Constitución. En los días previos al referéndum, el Gobierno cerró una treintena de centros “anti-fraude” que habían sido establecidos por el Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (conocidos popularmente como camisas rojas) para supervisar la votación y además estableció sus propios “centros de paz” en todo el país, oficialmente para garantizar la normalidad en la jornada de votación, pero, según algunas voces opositoras, para condicionar el voto de la población. También en los días previos al referéndum, el CNPO ordenó el cierre de varios medios de comunicación críticos con el Gobierno. Ante esta situación, no se produjeron ni autorizaron movilizaciones sociales ni protestas. Las más significativas del año fueron las que se produjeron en mayo, coincidiendo con el segundo aniversario del golpe de Estado contra Yingluck Shinawatra, en las que unas 200 personas se manifestaron en Bangkok. Finalmente, cabe destacar que a mediados de octubre murió el rey Bhumidol Adulayej, que tras 70 años en el trono fue sustituido por su hijo Maha Vajiralongkorn, que juró el cargo a finales de año como Rama con el primer encargo de ratificar la nueva Constitución.

2.3.4. Europa

Europa Oriental

Moldova (Transdniestria)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia

Síntesis:

Transdniestria, un territorio de 4.000 km² y medio millón de habitantes, de mayoría de población eslava, legalmente bajo soberanía de Moldova y en la práctica independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transdniestria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía. La región se declaró independiente de Moldova, que a su vez proclamó su independencia en 1991. Hubo escalada de incidentes que derivaron en un conflicto armado en 1992. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego ese mismo año, que puso fin a la guerra de varios meses. Las tropas rusas presentes en Transdniestria desde la etapa soviética pasaron a ser tropas de mantenimiento de la paz, mientras Moldova reclamó en años sucesivos su salida. Desde el fin de la guerra las partes negocian de manera intermitente para resolver el conflicto. El conflicto armado iniciado en Ucrania en 2014, país fronterizo con Transdniestria, aumentó las alarmas por los posibles impactos en Moldova y su conflicto no resuelto.

Se redujo la tensión entre Moldova y Transdniestria en relación al año anterior, en que se había asistido a denuncias de militarización y medidas de hostilidad,

en parte por contagio del conflicto vecino en Ucrania. Como elemento positivo, se reanudaron en junio las negociaciones formales de paz, tras dos años de estancamiento en el formato 5+2.⁷⁰ Por otra parte, tanto Moldova como Transnistria acogieron elecciones presidenciales, sin reconocimiento internacional en el caso de la entidad independiente *de facto*. En relación a Moldova, el país celebró entre octubre y diciembre las primeras elecciones presidenciales directas, tras un dictamen del Tribunal Constitucional de abril que cambió la elección parlamentaria por la elección popular directa (sistema en vigor hasta el año 2000). La elección del pro-ruso Igor Dodon como nuevo presidente de Moldova –en la segunda ronda de las elecciones, producidas en noviembre– generó interrogantes sobre sus consecuencias tanto para el conflicto de Transnistria como en la situación general de Moldova. La elección de una figura pro-rusa en la presidencia moldova se produce en un contexto de tensiones políticas y sociales internas entre Gobierno y oposición, y entre sectores de la población y la case política, así como de tensión regional entre las instituciones euroatlánticas y Rusia. Asimismo, en las elecciones de Transnistria, celebradas en diciembre, resultó ganador el presidente del Parlamento, el también pro-ruso Vadim Krasnoselsky.

Por otra parte, en clave interna, continuaron a principios de 2016 las protestas a las que asistió el país en 2015, con nuevas movilizaciones contra la corrupción política y contra el Gobierno, en demanda de elecciones anticipadas y en el contexto de vacío institucional, tras la caída del Gobierno a finales de 2015 a causa de una moción de censura. La designación por el presidente en enero de un nuevo primer ministro considerado cercano al oligarca Vladimir “Vlad” Plahotniuc generó nuevas protestas, incluyendo intentos de irrupción en el Parlamento, con choques con la Policía. El nuevo gobierno designado reafirmó su orientación pro-UE. En una de las protestas en febrero se produjo un lanzamiento de granada contra la sede del Banco Central. Hubo protestas en diversos momentos en meses siguientes, en demanda de elecciones anticipadas. La elección en noviembre del presidente Dodon abrió un nuevo escenario político, con riesgos de antagonismo entre Gobierno y Presidencia y un trasfondo político y social fragmentado.

Ucrania – Rusia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Territorio, Autogobierno, Identidad Internacional
Actores:	Gobierno de Ucrania, Gobierno de Rusia, oposición política y social de Crimea, EEUU, OTAN, UE

Síntesis:

Rusia y Ucrania –territorio históricamente disputado por poderes rivales, anexionada por Rusia a finales del siglo XVIII e integrada en 1922 en la URSS como república socialista soviética– han mantenido relaciones ambivalentes desde la independencia de Ucrania en 1991. Éstas han estado influidas por el interés ruso en mantener bajo su órbita de influencia a Ucrania, vasto territorio de 603 550 km² y 45 millones de personas, al oeste de Rusia y país importador y de tránsito de hidrocarburos rusos. Diferentes regímenes ucranianos han priorizado relaciones de cooperación o de distancia con respecto al Kremlin y, en paralelo, de menor o mayor cercanía a poderes euroatlánticos, como EEUU, la UE y la OTAN. La decisión de no ratificar el acuerdo de asociación con la UE por el presidente ucraniano pro-ruso Victor Yanukovich en 2013, –en medio de presiones rusas y de un contexto de hostilidades entre poderes occidentales y Rusia– y las consiguientes protestas antigubernamentales derivaron en una grave crisis y la caída del régimen de Yanukovich en febrero de 2014. Su salida fue seguida de la toma militar por fuerzas rusas de la península de Crimea –territorio de mayoría de población rusa (58%) y minorías significativas ucraniana (24%) y tártara (12%), históricamente bajo control ruso (imperial y soviético) y transferido por la URSS a Ucrania en 1954, con estatus de autonomía desde 1996, y que acoge la flota naval rusa del Mar Negro. La región de Crimea y la ciudad de Sebastopol se unieron a Rusia tras un referéndum celebrado en un contexto militarizado y sin garantías internacionales. Desde entonces organizaciones de derechos humanos han denunciado persecución contra la comunidad tártara y voces independientes, forzando al exilio a activistas y opositores. La toma de Crimea fue seguida del estallido de una guerra entre fuerzas ucranianas y milicias apoyadas por Rusia en el este de Ucrania. La tensión entre Ucrania y Rusia en torno a Crimea y a sus políticas de vecindad y el conflicto internacional que rodea a la tensión continúan activos.

Se incrementó la tensión entre Ucrania y Rusia en torno a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, con acusaciones mutuas de provocaciones y medidas de militarización, en paralelo a la continuación del conflicto en el este de Ucrania entre las Fuerzas Armadas ucranianas y fuerzas insurgentes apoyadas por Rusia.⁷¹ El Gobierno ruso denunció en agosto diversos intentos de atentados terroristas y sabotaje dentro de Crimea por actores ucranianos bajo órdenes de los servicios de inteligencia ucranianos. Según Rusia, en sendos choques con dichos actores murieron dos miembros de las fuerzas de seguridad rusas, y se practicaron detenciones. Ucrania lo descalificó como alegaciones falsas. El incremento de tensión a mediados de año también fue de la mano de medidas de militarización por ambos gobiernos. **Rusia reforzó su sistema de defensa antiaérea en Crimea**, mediante misiles S-400 Triumf, de largo y medio alcance. Además, llevó a cabo maniobras militares en Crimea entre finales de agosto y comienzos de septiembre, como parte de sus ejercicios militares de gran escala “Kavkaz-2016”, en el sur de Rusia y Crimea. Por su parte, el Gobierno ucraniano puso a sus tropas en situación de máxima alerta terrorista junto a la frontera con Crimea –igual que en Donetsk y Lugansk,

70. Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

71. Véase el resumen sobre Ucrania (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

escenario del conflicto armado—; a lo que se unió un segundo nivel de alerta en otras zonas de Ucrania. La tensión militar entre Rusia y Ucrania en torno a Crimea se enmarcó también en el pulso político y militar entre las instituciones euroatlánticas (gobiernos occidentales, UE, OTAN) y Rusia. Entre otras circunstancias, la OTAN aprobó en julio el despliegue de cuatro batallones en los países bálticos y Polonia y otras medidas en el mar Negro, el mayor refuerzo de defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría. A finales de año se incrementó de nuevo la tensión, con nuevas acusaciones por parte de Rusia de intentos de sabotaje en la península de Crimea, negadas por Ucrania, y varias detenciones en noviembre de personas acusadas de formar parte de un grupo terrorista vinculado al Ministerio de Defensa. Las autoridades ucranianas detuvieron ese mes a tres soldados rusos junto a la frontera con Ucrania. Además, Ucrania anunció en noviembre su intención de llevar a cabo maniobras militares con lanzamiento de misiles antiaéreos de medio alcance sobre las aguas del mar Negro, junto a Crimea. Rusia amenazó con derribar los misiles, considerándolo invasión de su espacio aéreo, y reforzó su sistema de defensas antiaéreas en Crimea. Finalmente, el Gobierno ucraniano desplazó la ubicación de los ejercicios militares. Rusia dispuso a su flota naval del mar Negro en posición de alerta.

Por otra parte, **la situación dentro de Crimea continuó afrontando violaciones de derechos humanos**, según denunciaron organizaciones y activistas. Las autoridades rusas siguieron persiguiendo a sectores de población críticos con la anexión rusa, con impactos en libertad de expresión y asociación.⁷² Entre otros hechos durante el año, **el Gobierno ruso prohibió en abril el órgano de representación de la población tártara, Mejlis, designándolo como organización extremista**. Fueron detenidos durante el año diversos defensores de derechos humanos y representantes tártaros. Activistas y organizaciones denunciaron también intimidación y hostigamiento en relación a las elecciones parlamentarias rusas del 18 de septiembre, celebradas también en Crimea. Asimismo, entró en vigor en enero el bloqueo por parte de Ucrania al comercio con Crimea. Por otra parte, un informe de la Fiscalía de la CPI señaló en noviembre que la información disponible remitía a la existencia de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania y que la situación dentro de Crimea equivalía a un “estado de ocupación”. Tras ello, Rusia se retiró de la CPI, revocando su firma. Asimismo, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre una resolución condenatoria de “la ocupación temporal de Crimea” y de los abusos de derechos humanos (70 votos a favor, 77 abstenciones y 26 votos en contra). Por otra parte, la elección de Donald Trump como nuevo presidente de EEUU generó incertidumbre en Ucrania, ante la posibilidad de un acercamiento

Se incrementó la tensión entre Ucrania y Rusia, con acusaciones de provocaciones en torno a Crimea y medidas de militarización

entre EEUU y Rusia y las posibles consecuencias sobre las sanciones contra esta última.

Rusia y Cáucaso

Armenia	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La ex república soviética de Armenia se independizó en 1991, en el marco de descomposición de la URSS, e inició un proceso de transición convulso, marcado por la guerra con Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj (1992-1994) y por la inestabilidad política. Su participación en dicha guerra le supuso sanciones internacionales, con grave repercusión en su economía, si bien experimentó cierto repunte en años posteriores. Internamente, el país ha afrontado diversas crisis políticas desde su independencia, incluyendo la renuncia en 1998 del entonces presidente Levon Ter-Petrosian, acusado de concesiones a Azerbaiyán en el proceso de paz; o los episodios violentos de 1999 en el Parlamento, en que varios hombres armados mataron al primer ministro, al presidente de la cámara y a seis parlamentarios. Temas recurrentes de tensión en la etapa postsoviética han sido las fricciones entre Gobierno de turno y la oposición sobre irregularidades electorales, las denuncias sobre vulneración de los derechos humanos, especialmente de libertad de expresión y prensa, las críticas al uso de la fuerza en la represión de manifestaciones o a la corrupción. El clima de descontento y polarización se agravó a partir de la crisis electoral de 2008.

Se incrementó la tensión a mediados de año, por la crisis generada en torno al asedio militar y atrincheramiento de un grupo armado en una comisaría de capital, en demanda de dimisión del presidente, que tuvo consecuencias sociales y políticas. El ataque se produjo a mitad de julio, por hombres armados vinculados al movimiento opositor Parlamento Fundacional, y resultó en la muerte de un policía y la toma de diversos rehenes. El grupo reclamó la dimisión del presidente, Serzh Sarkisian, y la liberación del líder de su movimiento, el veterano de la guerra de Nagorno-Karabaj, Zhirayr Serfilian, detenido a finales de junio, poco después de anunciar los planes de creación de un nuevo grupo, Resistencia Nacional, con el que derrocar al Gobierno. La toma de la comisaría se prolongó durante la segunda quincena de julio. Algunos análisis atribuyeron al grupo descontento con la gestión de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj.⁷³ Conforme la toma de la comisaría se prolongó, se sucedieron movilizaciones en apoyo

72. Human Rights Watch, *World Report 2017. Events of 2016*, HRW, 2017.

73. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

a los atacantes, y se produjeron algunos incidentes entre manifestantes y Policía. 75 personas resultaron heridas en las protestas en los últimos días de julio. Finalmente, tras un ultimátum y amenaza de operación de gran escala por las fuerzas de seguridad, el grupo se entregó, a lo que siguió la detención de 20 personas. No obstante, continuaron las protestas en semanas posteriores, en demanda de la liberación de los atacantes. Varios altos miembros del partido opositor Herencia fueron detenidos por las protestas. El partido decidió retirarse de los comicios locales de septiembre en protesta por las detenciones, y finalmente fueron liberados. **La crisis política y social posterior al asedio derivó también en la dimisión del primer ministro**, Hovik Abrahamyan, lo que fue seguido de cambios en el equipo de gobierno. Por otra parte, durante el año Armenia y Rusia reforzaron sus vínculos militares, con el anuncio de Rusia del incremento de su presencia militar en su base en el aeropuerto armenio de Ereburi. Además, el Parlamento armenio ratificó un acuerdo armenio-ruso para la creación de un sistema de defensa aéreo, firmado en diciembre de 2015, que no se aplica sobre Nagorno-Karabaj.

La región de Nagorno-Karabaj asistió al estallido de violencia más grave entre fuerzas armenias y azerbaiyanas desde el fin de la guerra en 1994

violencia se produjo durante los primeros días de abril, e involucró uso de tanques, helicópteros y artillería. El balance de víctimas mortales osciló, según fuentes, entre un centenar y dos centenares, incluyendo civiles. Las partes se acusaron mutuamente de iniciar los ataques y amenazaron con operaciones de gran escala. Diversos análisis y expertos apuntaron a un intento de Azerbaiyán de poner a prueba las capacidades de defensa de Armenia y, a la vez, de forzarles a una negociación desde una posición más debilitada.⁷⁴ Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán tomaron el control de algunas zonas de territorio anteriormente bajo control armenio. Hubo diversas interpretaciones sobre las implicaciones de la violencia, con algunos análisis señalando la falta de cambios sustantivos sobre el *statu quo* militar y político y otros enfatizando que la crisis supone una victoria militar parcial para Azerbaiyán, así como evidencia los riesgos de nuevas fases de violencia elevada. La crisis movilizó apoyos a sus respectivas fuerzas armadas tanto en Armenia y Nagorno-Karabaj como en Azerbaiyán. El Grupo de Minsk de la OSCE –órgano mediador en el conflicto– condenó severamente el estallido de violencia “sin precedentes”. Las partes en conflicto alcanzaron un alto el fuego el 5 de abril. Previamente al estallido de la crisis, en los primeros meses del año ya se habían producido numerosos incidentes violentos de baja intensidad, con acusaciones cruzadas, y diversas víctimas mortales.

Tras el acuerdo de alto el fuego de abril siguieron produciéndose incidentes, con bajas militares. El propio presidente azerbaiyano afirmó en junio que el alto el fuego no era estable. En meses siguientes, los Gobiernos armenio y azerbaiyano se comprometieron a reimpulsar las negociaciones de paz, reforzar mecanismos de observación y crear instrumentos de investigación de incidentes, pero sin concreción práctica,⁷⁵ lo que mantuvo las alertas elevadas hasta final de año ante los riesgos de nuevas derivas de violencia de gran escala. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, denunció la imposibilidad de acceso de su Oficina a la región de Nagorno-Karabaj, incluyendo en la etapa post-crisis de abril. La tensión continuó elevada a finales de año. Entre los incidentes, las autoridades de Nagorno-Karabaj denunciaron en octubre un intento de incursión de fuerzas de Azerbaiyán, acusaciones rechazadas por el Gobierno azerbaiyano. Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán visitaron a sus tropas en torno a la línea de contacto en noviembre. En el marco de esa visita, el presidente azerbaiyano subrayó la necesidad de recuperar el control sobre Nagorno-Karabaj, incluyendo por la fuerza.

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

El conflicto en torno a Nagorno-Karabaj escaló de manera significativa, con la crisis violenta más grave desde el fin de la guerra en 1994. El estallido de

74. Thomas de Waal, “Why we need to contain the Caucasus crisis”, Op-ed, *POLITICO Europe*, 4 de mayo de 2016.
75. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Georgia (Abjasia)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia

Síntesis:

La precaria situación de seguridad en la región responde a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que se enfrentaron en conflicto armado (1992-1994) los líderes locales abjasios, apoyados por Rusia, con el Gobierno georgiano, defendiendo, respectivamente, la independencia de la región y la integridad territorial del país, en el contexto de descomposición de la URSS. Tras el fin de esa guerra, que desplazó a unos 200.000 georgianos, el territorio de Abjasia ha funcionado como un Estado *de facto*. Pese a la existencia de un acuerdo de alto el fuego, un proceso negociador y presencia internacional en esos años (observadores de la ONU y fuerzas de paz rusas), la tensión se mantuvo, alimentada por las tensiones geoestratégicas y de balance de poderes en el Cáucaso entre Georgia y Rusia. Éstas escalaron hasta devenir en una guerra internacional en agosto de 2008, iniciada en Osetia del Sur, tras la cual las fuerzas abjasias consolidaron su control sobre Abjasia y vieron formalmente reconocida su independencia por parte de Rusia. Los incidentes frecuentes de seguridad, el estatus incierto del territorio, el papel de Rusia y el impacto acumulado de ambas guerras son fuente continua de tensión.

Continuó la tensión relativa al conflicto sobre el estatus de Abjasia, así como otras fuentes de tensión internas en la región en disputa. **La situación de seguridad se mantuvo mayoritariamente en calma, si bien continuó la pauta de militarización en la zona.** Entre los incidentes durante el año, un ciudadano georgiano murió en mayo en una localidad bajo control de Georgia (Khurcha), junto a un punto de cruce con Abjasia, por disparos de un guardia de frontera abjasio, lo que generó tensión entre las partes. El Gobierno georgiano señaló a Rusia como responsable último del incidente dado el control de Rusia sobre las fuerzas abjasias. El suceso tuvo lugar poco después del acuerdo alcanzado en marzo en el proceso negociador para la reanudación del mecanismo de prevención y respuesta de incidentes (IPRM), paralizado desde 2012 por desavenencias entre las partes.⁷⁶ Por otra parte, el conflicto continuó inmerso en un contexto de militarización. El Parlamento ruso ratificó en noviembre el acuerdo firmado en 2015 entre Rusia y Abjasia sobre “Partenariado y Alianza Estratégica”, que incluye la creación de un espacio de seguridad y defensa común y la creación de un grupo combinado de fuerzas, bajo el liderazgo de Rusia a través de su base militar en Abjasia. Georgia criticó la medida como un episodio más del proceso de anexión por parte de Rusia, denunciando amenazas a la estabilidad de toda la región. Por otra parte, en el plano internacional, Georgia llevó a cabo ejercicios militares con EEUU y Reino Unido en mayo, que fueron calificados por Rusia

de provocación. Además, Georgia y EEUU firmaron un memorándum en materia de defensa y seguridad. Asimismo, Georgia y la OTAN acordaron en la cumbre de la alianza atlántica en julio en Varsovia dar pasos para fortalecer las capacidades de defensa georgianas, incluyendo en defensa aérea, si bien siguió fuera de discusión la aprobación de un Plan de Acción para la Adhesión (paso previo a la incorporación de un país a la OTAN). Asimismo, Rusia criticó en noviembre como una amenaza a la estabilidad de la región la celebración de ejercicios militares de Georgia y la OTAN cerca de la capital georgiana, Tbilisi.

En clave interna, **la situación en Abjasia continuó afectada por tensiones entre el Gobierno de la autoproclamada república de Abjasia y sectores de oposición**, ya manifestadas en 2014 y 2015. El líder abjasio, Raul Khajimba, firmó un decreto en junio para la celebración de un referéndum a principios de julio en el que decidir si convocar elecciones anticipadas, lo que había sido una demanda de la oposición. No obstante, se produjeron movilizaciones opositoras en julio reclamando el retraso de la consulta, criticando la falta de tiempo para preparar la campaña del referéndum. Las protestas incluyeron el intento de toma de control de la sede del Ministerio de Interior y choques con fuerzas de seguridad, con más de una decena de heridos. La tensión derivó en la retirada del cargo del Ministerio de Interior, acusado por los opositores de tratar de interferir en el referéndum. El líder abjasio rechazó en julio las demandas de posponer el referéndum, si bien este fue finalmente declarado no válido, al no alcanzarse los mínimos requeridos, en un contexto de boicot de la oposición. Siguieron cambios en el Gobierno abjasio en meses siguientes, incluyendo la destitución del primer ministro Artur Mikvabia, sustituido por Beslan Bartsits. En diciembre, y ante nuevas protestas de la oposición en demanda de la dimisión de Khajimba, éste rechazó abandonar el cargo pero ofreció cargos gubernamentales a la oposición. Medios de comunicación señalaron el énfasis puesto por el presidente ruso, Vladimir Putin, en reuniones en Moscú con el liderazgo abjasio sobre la necesidad de estabilidad interna en Abjasia.

Georgia (Osetia del Sur)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia

Síntesis:

La tensión en la región está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que las fuerzas osetias y Georgia se enfrentaron en una guerra entre 1991 y 1992.

76. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Desde entonces, las partes mantuvieron sus posiciones respectivas de defensa de independencia o unificación con Rusia y de la integridad territorial de Georgia, sin lograr resolver por la vía de la negociación el *impasse* de la región, independiente *de facto*. A su vez, el conflicto interno se ha visto alimentado por las tensiones entre Georgia y Rusia —vinculadas a cuestiones de geoestrategia y balance de poderes en la región del sur del Cáucaso—, que en 2008 escalaron hasta derivar en una breve guerra iniciada en Osetia del Sur y extendida después a Abjasia y zonas bajo control georgiano. Tras esa última guerra y el desplazamiento forzado de la mayoría de población georgiana de Osetia del Sur, la posición osetia quedó reforzada. Rusia reconoció su independencia y mantuvo presencia militar en la región. La cuestión de los desplazados de los años noventa y de la segunda guerra, el estatus del territorio y las violaciones periódicas del alto el fuego siguen siendo fuente de tensión.

Se mantuvo la situación de tensión entre Georgia y Osetia del Sur, en torno al estatus de esta última, sin avances en el proceso de paz.⁷⁷ Entre los factores de conflictividad durante el año, sobresalió el **anuncio en abril del líder de la autoproclamada república de Osetia del Sur, Leonid Tibílov, de organizar un referéndum antes de agosto sobre cambios constitucionales que permitirían a la entidad solicitar la unión a Rusia**. Tibílov señaló que tras el referéndum esperarían el tiempo necesario para solicitar dicha adhesión con el fin de evitar generar riesgos políticos a Rusia. La cuestión de un referéndum ya había estado presente en el debate político en Osetia del Sur en etapas anteriores, como en 2015. El Gobierno georgiano criticó el anuncio y advirtió de que ningún referéndum en Osetia del Sur sería legal mientras el territorio continúe bajo control efectivo de Rusia y mientras continúe la situación de desplazamiento forzado. Finalmente, en mayo **Tibílov y el presidente del Parlamento, Anatoly Bibilov, anunciaron que se retrasaban los planes de un referéndum hasta después de las elecciones presidenciales osetias de abril de 2017**. Asimismo, a finales de diciembre, el líder osetio anunció los planes de otro referéndum sobre un cambio de nombre de la región (propuesta de cambio a “Osetia del Sur – Alania”) coincidiendo con los comicios presidenciales de 2017. Por otra parte, respecto a la situación de seguridad, se mantuvo la situación de calma, pese a la tensión crónica vinculada a los obstáculos a la libertad de movimiento, la militarización e incidentes de seguridad. Los arrestos de civiles acusados de cruzar ilegalmente la frontera continuaron siendo uno de los problemas en materia de seguridad humana. Según Georgia, 109 personas fueron detenidas entre enero y septiembre por guardias fronterizos rusos en la frontera administrativa entre Osetia del Sur y Georgia, si bien la práctica mayoría fueron puestas en libertad. En 2015 la cifra anual de detenidos se elevó a 163. El conflicto en torno a Osetia del Sur continuó marcado por la situación

El líder de Osetia del Sur anunció un referéndum sobre cambios constitucionales para solicitar la anexión a Rusia, si bien fue finalmente retrasado a 2017

de conflictividad internacional entre Georgia y Rusia, y entre instituciones occidentales y Rusia. Entre otros hechos, Georgia criticó duramente la celebración de las elecciones parlamentarias rusas en territorio de Osetia del Sur y de Abjasia.⁷⁸ A su vez, Rusia criticó los diversos ejercicios militares de Georgia con socios occidentales y países miembros de la OTAN.

Rusia (Chechenia)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición

Síntesis:

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

Se incrementó la situación de tensión en la república chechena, con un aumento de víctimas mortales vinculado al conflicto entre fuerzas de seguridad y actores armados islamistas, mientras continuó **la represión y hostigamiento contra sectores independientes y población civil** acusada de dar apoyo a la insurgencia. Al menos una treintena de personas murieron en 2016 a causa del conflicto, doblando la cifra del año anterior, según los balances del portal independiente Caucasian Knot. La mayoría de víctimas fueron supuestos miembros de los grupos armados. Se sucedieron los hechos de violencia durante el año, incluyendo operaciones especiales de las fuerzas de seguridad y ataques insurgentes.

Entre los incidentes, enfrentamientos en diciembre en las afueras de la capital, Grozny —y según diversas fuentes, también dentro— causaron la muerte de siete

77. Véase el resumen sobre Georgia (Osetia del Sur) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

78. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en este capítulo.

insurgentes y cuatro policías. ISIS, organización a la que se ha adherido la mayoría de la insurgencia del norte del Cáucaso, reivindicó los ataques. Como en etapas anteriores, los hechos fueron seguidos de **prácticas de castigo colectivo, con la detención de un centenar de familiares de los insurgentes implicados**. Seis policías resultaron heridos en un ataque contra un puesto de control en mayo cerca de Grozny, mientras tiroteos en octubre entre insurgentes y policías resultaron en ocho combatientes muertos y cuatro policías heridos. Asimismo, el líder de ISIS en Chechenia, Aslan Avgazarovich Byutukayev (Amir Khamzat) fue designado en julio “terrorista” por el Departamento de Estado de EEUU.

Por otra parte, la situación en Chechenia continuó caracterizada por las violaciones de derechos humanos y el férreo control sobre la población. A las prácticas de castigo colectivo, se sumaron medidas de hostigamiento contra individuos independientes (entre ellos, ciudadanos que señalaron prácticas de corrupción, periodistas *freelance*, analistas políticos o profesores). Una veintena de hombres con el rostro cubierto atacaron a un grupo de periodistas –incluyendo dos periodistas extranjeros– y varios activistas, entre ellos del Comité para la Prevención de la Tortura. Su vehículo fue atacado e incendiado en la frontera entre Chechenia e Ingushetia tras realizar visitas a personas víctimas de torturas y otros abusos. El líder checheno, Ramzan Kadyrov, obtuvo un nuevo mandato como jefe de la república tras ganar las elecciones de septiembre, celebradas en un contexto de falta de libertades, según denuncian desde hace años organizaciones y activistas de derechos humanos locales e internacionales.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden

los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

Continuó la situación de crisis política y social dentro de Kosovo, con numerosas protestas, incluyendo incidentes de violencia, en contra del acuerdo de descentralización entre Kosovo y Serbia, así como tensiones entre Kosovo y Serbia, ante la falta de implementación del pacto, entre otras cuestiones. El acuerdo de agosto de 2015 entre los Gobiernos serbio y kosovar para la creación de una asociación de municipios de mayoría serbia de Kosovo fue confrontado por la oposición albanokosovar a lo largo de 2016, como ya había sucedido en los últimos meses del año anterior. Los partidos opositores Vetevendosje, Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) y Nisma advirtieron sobre sus intenciones de paralizar ese acuerdo, así como el de demarcación fronteriza con Montenegro. Las críticas se plasmaron en forma de protestas en las calles en diversos momentos del año con llamamientos a la dimisión del Gobierno y algunos incidentes y choques entre manifestantes y la Policía. Así, en torno a 60.000 personas participaron en protestas el 9 de enero en la capital, a lo que se unieron otras movilizaciones entre enero y mayo y fechas posteriores. Además, la oposición política volvió a hacer uso de prácticas de boicot parlamentario (marzo) y de lanzamiento de gases lacrimógenos (febrero, marzo, agosto, entre otros meses) y llamó a elecciones anticipadas. La toma de posesión en abril del nuevo presidente, el ex primer ministro y ex guerrillero Hashim Thaci, elegido en los comicios presidenciales de febrero, transcurrió también entre protestas y boicot de la oposición.

A la crisis por el acuerdo de descentralización se añadieron otros elementos. Filtraciones en agosto por un medio de comunicación sobre supuesto tráfico de influencias por parte del oficialista PDK en la designación de altos cargos del Estado, incluyendo fiscales y jueces, generaron nuevas protestas en agosto y llevaron a la dimisión del líder del partido, y a diversos incidentes violentos de protesta, con lanzamiento de granadas contra el Parlamento y contra la televisión pública. Además, la muerte en prisión bajo custodia en noviembre de un joven activista del partido opositor Vetevendosje –uno de los seis miembros detenidos en las protestas de agosto– generó numerosas críticas y nuevas protestas. Frente a la versión oficial de suicidio por asfixia, sectores opositores reclamaron una investigación internacional independiente. Asimismo, la tensión en Kosovo también se incrementó entre el PDK y su socio serbokosovar en el gobierno de coalición, Lista Serbia, así como entre Kosovo y Serbia. Lista Serbia anunció en diciembre la paralización de su participación en el Gobierno. La crisis había estado motivada por la destitución ese mes de Ljubo Maric,

ministro para la autonomía local de Kosovo y miembro de Lista Serbia, por acompañar al responsable de la Oficina de Serbia para Kosovo, Marko Djuric, en un viaje a Kosovo sin autorización de Pristina. El primer ministro de Serbia emitió a finales de mes un ultimátum para su reintegración. La sucesora de Maric, Mirjana Jevtic, dimitió. Asimismo, el Gobierno de Serbia advirtió en diciembre que si el Gobierno kosovar no avanzaba en la implementación de la descentralización de los municipios de mayoría serbia del norte de Kosovo, la prevista asociación de municipios se constituiría por sí misma en febrero de 2017. La tensión entre el Gobierno y su socio Lista Serbia y entre Kosovo y Serbia estuvo ligada también a la decisión del Parlamento kosovar en octubre de nacionalizar el complejo minero de Trepca, ubicado en Mitrovica, en la frontera con Serbia, lo que generó protestas y al boicot serbokosovar del Parlamento. Ante el contexto de parálisis institucional y la elevada tensión política en Kosovo, analistas, políticos y medios de comunicación especulaban a finales de año sobre la posibilidad de elecciones anticipadas.

Turquía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Turquía, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen

Síntesis:

La actual República de Turquía fue fundada por Mustafa Kemal “Atatürk” en 1923, tras la derrota del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial –y la consiguiente partición de sus territorios (Tratado de Lausanne de 1923)–, y la guerra de independencia (1919-1923). Se fundó bajo principios como el laicismo, el nacionalismo y el estatismo, promoviéndose un estado nación secular con un papel predominante del Ejército, como actor garante. A lo largo de su historia, Turquía –país puente entre Occidente y Oriente, de mayoría musulmana y segundo Ejército de la OTAN– se ha visto afectada por periodos de inestabilidad en torno a diversos ejes y actores. Por una parte, la falta de soluciones a la cuestión kurda ha resultado en rebeliones kurdas de diversa naturaleza y persecución estatal de sectores prokurdos, sobresaliendo la guerra entre Turquía y el PKK iniciada en 1984. Por otra parte, el país ha sufrido diversos golpes de Estado militares (1960, 1971, 1980, 1997). Asimismo, la etapa de poder bajo el islamista AKP (en el poder desde 2002) y el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan (primer ministro entre 2003 y 2014 y presidente desde entonces) ha ido acompañada de medidas iniciales de democratización y de denuncias, en años posteriores, de autoritarismo, incrementándose los niveles de tensión interna social y política. Asimismo, la confrontación creciente entre el régimen del AKP –en el poder desde 2003– y su antigua aliada organización del clérigo musulmán Fetullah Gülen se puso de manifiesto en un intento de golpe militar, en julio de 2016, que resultó fallido y que fue atribuido a

sectores de las FFAA vinculadas a Gülen. La intentona desencadenó la declaración de Estado de emergencia y purgas masivas. La situación de derechos humanos, ámbito de grave preocupación en los años ochenta y noventa, se deterioró de nuevo en el contexto de reinicio de la guerra con el PKK en 2015 y de las medidas de emergencia tras el intento de golpe. Por otra parte, el grave deterioro regional vinculado a las guerras en Siria e Iraq también generó nuevos ejes de conflictividad para Turquía: incremento de atentados atribuidos a ISIS contra objetivos civiles en suelo turco y un complejo escenario de relaciones exteriores.

Turquía hizo frente a una grave crisis, con múltiples focos de conflictividad: un incremento de la violencia atribuida a ISIS; un intento de golpe de Estado por parte de sectores del Ejército; una grave crisis de derechos humanos; y fuerte tensión política en torno a la reforma constitucional, entre otros elementos. Todo ello sumado a la escalada del conflicto armado entre Turquía y la insurgencia kurda del PKK.⁸⁰ **En relación a ISIS, se atribuyeron al grupo diversos atentados de gran escala durante el año, con un balance total de más de un centenar de fallecidos y varios centenares de heridos,** lo que supone un incremento respecto a los últimos años. Los ataques incluyeron un atentado en enero en Estambul en una zona turística, con 11 víctimas mortales; otro atentado suicida en Estambul en marzo en una calle comercial, con unos cuarenta heridos y media docena de muertes; un ataque suicida múltiple en el aeropuerto de Estambul en junio, con 44 fallecidos y 250 heridos; un atentado contra una boda kurda en la provincia de Gaziantep en julio, con 51 muertos y 70 heridos; y un ataque con tiroteo masivo en la madrugada del 1 de enero de 2017 en una discoteca de Estambul, con 39 muertos y 65 heridos. A ello hay que añadir los ataques aéreos lanzados durante el año desde territorio bajo control de ISIS en Siria contra objetivos diversos en la provincia turca de Kilis, que causaron varias víctimas mortales y decenas de heridos. Turquía lanzó ataques aéreos de represalia, con centenares de militantes de ISIS fallecidos, según balances gubernamentales; detuvo a cientos de sospechosos de pertenencia a ISIS en suelo turco; y desde agosto envió tropas a Siria, como parte de su estrategia contra ISIS y, sobre todo, contra las milicias kurdas de Siria, e intentó implicarse en la ofensiva contra ISIS en Mosul (Iraq) pese al rechazo del Gobierno iraquí.⁸¹

Otro gran eje de conflictividad en Turquía durante el año lo constituyó el intento de golpe de Estado el 15 de julio, por sectores del Ejército. Según el Gobierno, la intentona golpista involucró a 8.651 militares y el uso de 35 aviones –incluyendo de combate–, 246 vehículos blindados –entre ellos, 74 tanques–. Edificios como el Parlamento y oficinas de Presidencia fueron atacadas. El propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, escapó a un intento de asesinato, como parte del golpe, en Mármara. El ataque fracasó por la afirmación del poder por el Gobierno, el despliegue de fuerzas de seguridad y la amplia movilización popular. El ataque **causó 265 víctimas**

80. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

81. Véase los resúmenes sobre Siria, Iraq y sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

mortales –161 civiles y 104 participantes en el golpe y en torno a 2.200 heridos. El golpe fallido fue atribuido por el Gobierno al movimiento religioso Hizmet –liderado por el clérigo residente en EEUU Fetullah Gülen–, antiguo aliado del oficialista AKP, calificado posteriormente por el Gobierno de organización terrorista (con las siglas FETÖ), y considerado como un actor de poder con amplia presencia e influencia en Fuerzas Armadas y policiales y sector judicial y burocrático. Gülen negó vinculación con el golpe. El golpe fue condenado por toda la clase política, y los partidos con representación en el Parlamento (AKP, CHP, HDP, MHP) aprobaron una declaración conjunta condenatoria. El Gobierno decretó el Estado de emergencia (prolongado en octubre tres meses más) y derogó numerosas protecciones de la Convención Europea de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Bajo esa legislación de excepción se emitieron decretos en diversos momentos del año que regularon purgas masivas en el Ejército, Policía, sistema judicial y diversos sectores profesionales (educación, medios de comunicación, sector empresarial, entre otros). En torno a 125.000 personas fueron despedidas de sus puestos por supuestos vínculos con el movimiento de Gülen, incluyendo un tercio del personal de las Fuerzas Armadas y una quinta parte del sistema judicial (3.673 jueces despedidos y 2.700 suspendidos de actividad) y unos 28.000 profesores; se emprendió acción legal contra más de 92.000 personas, de las cuales más de 39.000 fueron arrestadas; se detuvo a unos 140 periodistas, otros 2.500 fueron despedidos y se cerraron 177 medios de comunicación (11 reabiertos después); se cerraron unas 1.800 asociaciones, unos 2.100 colegios, universidades y residencias, así como en torno a 690 compañías.⁸²

Turquía hizo frente a múltiples focos de conflictividad, incluyendo atentados atribuidos a ISIS y un golpe de Estado fallido al que siguieron purgas masivas

La dimensión masiva de las purgas generó gran preocupación y llamadas de alerta entre organizaciones de derechos humanos y partidos políticos opositores, entre otros sectores, que señalaron impactos graves sobre libertades de expresión, asociación y asamblea. El partido opositor kemalista CHP compiló 37.000 quejas por trato discriminatorio. El CHP apeló contra artículos de varios de los decretos reguladores de las purgas, mientras se presentaron otros 45.000 recursos individuales. El CHP, Amnistía Internacional y la ONG local Asociación de Derechos Humanos de Turquía alertaron sobre malos tratos y tortura bajo detención. Organismos internacionales también expresaron preocupación. El Estado de emergencia post-golpe y la legislación antiterrorista (considerada demasiado vaga por organizaciones como Amnistía Internacional) ampararon también la persecución de gran escala contra sectores de población civil acusados de vínculos con el PKK, incluyendo cargos electos y representantes políticos, académicos, periodistas.⁸³ **Se**

alertó sobre una situación general de crisis de derechos humanos en el país, reduciéndose significativamente

el espacio para las voces independientes y críticas. Por otra parte, y en paralelo al clima de excepcionalidad derivado del intento fallido del golpe de Estado, se deterioró el clima político. Pese a la unidad política mostrada tras el golpe, se dio paso a un nuevo clima en que el partido pro-kurdo HDP fue excluido de la iniciativa política, dejándole fuera del diálogo político entre los líderes de los partidos políticos promovido por Erdogan. La política frentista se agudizó en meses posteriores, con el impulso del oficialista

AKP a la reforma de la Constitución, con el objetivo de un cambio a régimen presidencialista, frente al rechazo del CHP y HDP y diversos sectores de población. Análisis apuntaron a la configuración de un frente nacional entre el AKP y el MHP. Una comisión parlamentaria aprobó en diciembre las reformas constitucionales, y se esperaba su aprobación por el Parlamento a inicios de 2017, lo que podría abrir las puertas a un referéndum sobre las reformas en la primera mitad de 2017, en medio de una agudización de la tensión política. Asimismo, la fragilidad de la situación general quedó en evidencia también con el **asesinato en Ankara en diciembre del embajador ruso, a manos de un policía de servicio,** sobre el que pasó a investigarse posibles vínculos con el movimiento de Gülen. En un contexto de progresiva recuperación de las relaciones entre Turquía y Rusia, ambos Gobiernos denunciaron que el incidente tenía intencionalidad de dañar las iniciativas diplomáticas que Moscú, Ankara y Teherán impulsaban en Siria y acordaron una investigación conjunta sobre los hechos. En cambio, en contraste con el acercamiento con Moscú, 2016 fue un año de grave incremento de la tensión entre Turquía y otros actores internacionales, como EEUU.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)
Síntesis:	Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza,

82. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, *Post-monitoring dialogue with Turkey - the failed coup in Turkey of 15 July 2016: some facts and figures*, AS/Mon/Inf (2016)14 rev 3/Information note.

83. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría chií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno –en especial en las zonas de mayoría chií del país–, y las autoridades han denunciado la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior, señalando a Irán. El país es escenario de acciones armadas esporádicas de AQPA y, más recientemente, de células vinculadas presuntamente a ISIS.

La situación de tensión en Arabia Saudita en 2016 continuó estando determinada por dinámicas internas y otras vinculadas a su implicación en campañas militares en el exterior, además de su pulso regional con Irán. **La tensa relación con Teherán quedó especialmente expuesta a principios de año tras la decisión de Riad de ejecutar a 47 condenados por delitos de terrorismo, entre ellos el destacado clérigo chií Nimr al-Nimr.** La medida provocó manifestaciones en varios países, entre ellos Bahrein, Líbano e Iraq, y derivó en masivas protestas y ataques contra misiones diplomáticas saudíes en Irán. La escalada llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riad y motivó que varios Estados aliados de Arabia Saudita –entre ellos Bahrein, Sudán y EAU– cortaran o degradaran sus vínculos diplomáticos con la república islámica. Las acciones de represalia de Riad también afectaron la ayuda a Líbano –las autoridades saudíes consideraron que no había reaccionado de manera contundente y suspendieron su apoyo económico al país– y motivaron acciones contra Hezbollah, aliado de Irán, que fue declarado grupo terrorista por el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.⁸⁴

En el marco de esta rivalidad y tensión entre Irán y Arabia Saudita, durante 2016 Teherán también insistió en sus críticas a Riad por su gestión del peregrinaje a la Meca, después de los incidentes en los que murieron cientos de personas en 2015, y algunos funcionarios iraníes plantearon que Riad estaba apoyando a grupos armados que operan en Irán.⁸⁵ Cabe destacar que la ejecución del grupo de condenados por terrorismo –43 sunníes y cuatro chiíes– por parte de Arabia Saudita también generó otras reacciones, entre ellas amenazas de venganza de al-Qaeda por la muerte de algunos de sus afiliados, advertencias de ISIS de que atacaría prisiones donde estuvieran detenidos yihadistas, y también manifestaciones en zonas del

país de mayoría chií, como en la zona de Qatif. **A lo largo del año también continuaron produciéndose periódicos hechos de violencia que dejaron una veintena de víctimas mortales.** Entre estos incidentes cabe mencionar el ataque a una mezquita chií en Mahasen en enero que provocó dos fallecidos; dos atentados reivindicados por una filial de ISIS autodenominada Provincia Najd que dejaron dos personas fallecidas en abril; enfrentamientos de las fuerzas policiales con presuntos militantes que resultaron en otros dos muertos en la provincia de Bisha el mismo mes; acciones de las fuerzas de seguridad contra presuntos milicianos de ISIS que causaron cuatro muertos en mayo, además de otros dos milicianos del grupo armado que se hicieron estallar. Julio fue uno de los meses más cruentos después de que ataques suicidas golpearan tres ciudades del país: Jeddah (contra el consulado de EEUU), Qatif y Medina. En esta última ciudad, lugar sagrado para el Islam, el atacante suicida mató a cuatro funcionarios de seguridad. Otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron en dos episodios, en septiembre y en octubre, tras recibir disparos en la ciudad de Dammam. A lo largo del año las autoridades saudíes también informaron del desmantelamiento de presuntas células de ISIS, de la detención de sospechosos de vínculos con este grupo armado y del enjuiciamiento a más de una treintena de personas por presunto espionaje para Irán. De este último grupo, la mitad fueron condenados a muerte a finales de año.

Paralelamente, Arabia Saudita siguió implicada en la coalición anti-ISIS liderada por EEUU y se mantuvo a la cabeza de la coalición internacional de apoyo al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi en el marco del conflicto armado en Yemen.⁸⁶ En este contexto, el reino saudí fue acusado de múltiples abusos, entre ellos sistemáticas ofensivas contra blancos civiles y uso de armamento prohibido, como bombas de dispersión. Tras el bloqueo de los intentos por reconducir el conflicto a través de negociaciones a mediados de año, las hostilidades se intensificaron en Yemen, se multiplicaron los incidentes

en la zona fronteriza e incluso algunas ofensivas que penetraron en territorio saudí. **Según estimaciones publicadas por medios de prensa, desde la implicación de Riad en el conflicto armado yemení en marzo de 2015 hasta finales de 2016 unos 114 saudíes habrían perdido la vida como consecuencia de ataques de actores armados yemeníes o de minas terrestres.**

Cabe destacar que Arabia Saudita también continuó siendo objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales por sus políticas y abusos en materia de derechos humanos. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron que Riad fuera suspendido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su responsabilidad en la muerte de civiles en Yemen. En un polémico episodio,

Diversos hechos de violencia dejaron al menos una veintena de víctimas mortales en Arabia Saudita a lo largo de 2016

84. Véase el resumen sobre Líbano en este capítulo.

85. Véase el resumen sobre Irán (noroeste) e Irán (Sistán Baluchistán) en este capítulo.

86. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

el informe anual del representante especial de la ONU para los Niños y Niñas en Conflictos señaló a Arabia Saudita por violar los derechos de los menores de edad en su calidad de principal responsable de las muertes de niñas y niños en Yemen. No obstante, tras presiones de Riad, se retiró al país de la lista de países incluidos en el informe, en una acción denunciada por grupos de derechos humanos. Adicionalmente, algunas campañas ciudadanas pusieron en la mira las políticas saudíes discriminatorias hacia las mujeres, entre ellas la que llama al Gobierno a poner fin al sistema de guardianes masculinos, y otras ONG alertaron sobre el extenso uso de la pena capital en el país, donde se habrían ejecutado a un total de 150 personas en 2016, cifra similar a la de 2015 (158).

Bahrein	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las revueltas populares que se propagaron por países del Magreb y Oriente Medio durante 2011 repercutieron también en Bahrein. Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del país que es de confesión chií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las tensiones internas, que se habían incrementado en los últimos años, se convirtieron en una contestación abierta a partir de febrero de 2011. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa a EEUU, que tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago.

Durante 2016 la situación en Bahrein continuó caracterizándose por periódicas manifestaciones contra el régimen que en ocasiones derivaron en incidentes violentos, medidas gubernamentales contra activistas y sectores disidentes que afectaron particularmente a la comunidad chií del país, y tensiones diplomáticas con Irán. Como en años anteriores, y a pesar de un amplio operativo de las fuerzas de seguridad, se produjeron nuevas manifestaciones con motivo de un nuevo aniversario –el quinto– de las movilizaciones contra el Gobierno en el marco de las revueltas árabes. Las protestas, protagonizadas principalmente por la comunidad chií de Sitra, al sur de Manama, fueron dispersadas por la Policía. A lo largo de 2016 tuvieron lugar diversos episodios de violencia, entre ellos un ataque con cócteles molotov contra una estación de

Policía de la capital que dejó un oficial fallecido a principios de año; una explosión que provocó la muerte a una mujer y causó heridas a tres menores en la localidad de East Eker, al sur de Manama, en junio; y la muerte en prisión de un sospechoso detenido por este último ataque, en julio. Durante el año también se anunciaron diversas sentencias de cárcel contra personas acusadas de complot, espionaje, pertenencia a grupos terroristas, intentos de ataques contra las fuerzas de seguridad o por recibir armas y explosivos con el fin de perpetrar ataques en el país. Adicionalmente, continuaron las acciones contra activistas y sectores de la oposición. **Uno de los hechos más significativos del año fue la decisión judicial de suspender las actividades y cerrar las oficinas del principal partido opositor chií, al-Wefaq, organización que acabó siendo disuelta por orden de un corte en julio tras ser acusada de promover la violencia y el terrorismo.** Previamente, la Corte de Apelaciones de Bahrein había decidido doblar la condena de prisión impuesta al principal dirigente opositor y líder de al-Wefaq, el sheikh Ali Salman. Detenido desde finales de 2014, Salman pasó así de una sentencia de cuatro años a una de nueve años de cárcel por “promover un cambio del sistema político por la fuerza”. Al-Wefaq consideró que la medida era una provocación y minaba las posibilidades de resolver la crisis política en el país. Además, y en acciones que motivaron nuevas protestas y algunos enfrentamientos con la Policía, las autoridades decidieron retirar la ciudadanía del ayatollah Isa Qassim, considerado como el líder espiritual de la comunidad chií de Bahrein. Semanas más tarde se anunció que el clérigo sería juzgado por captación ilegal de fondos y lavado de dinero. En paralelo, se produjeron nuevas detenciones de destacados activistas, entre ellos Nabeel Rajab –presidente del Bahrein Centre for Human Rights y crítico de la guerra en Yemen en la que participa Bahrein–, Mohammed al-Tajer –abogado que ha defendido a diversas figuras de la oposición y activistas involucrados en las protestas pro-democracia desde 2011–, Ibrahim Sharif –figura de la oposición secular acusado de pretender el derrocamiento del gobierno– y Zainab al-Khawaja –condenada por insultar y romper una foto del rey. También se denunciaron medidas de acoso y detenciones de periodistas.

En este contexto, **diversas voces desde el exterior llamaron la atención sobre las medidas contra los sectores disidentes y la situación de derechos humanos en Bahrein.** Un informe del Departamento de Estado de EEUU filtrado a la prensa en junio señalaba que los esfuerzos para impulsar una reconciliación nacional en el país estaban en suspenso y que el país no había implementado las recomendaciones sobre la protección a la libertad de expresión. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también alertó sobre el riesgo de escalada de tensión en el país tras la disolución de al-Wefaq y un grupo de expertos independientes de la ONU demandó a Manama que detuviera la campaña de arrestos arbitrarios y liberara a los detenidos por ejercer su libertad de expresión y el derecho a asamblea. Amnistía Internacional también denunció que las

torturas y los malos tratos persistían en Bahrein a pesar de la introducción de algunas reformas. Finalmente, cabe destacar que la relación con Irán fue tensa durante todo el año, pero las diferencias con la república islámica se hicieron especialmente evidentes a principios de 2016. Bahrein decidió romper relaciones diplomáticas con Teherán después de que su principal aliado, Arabia Saudita, hiciera lo propio. La crisis diplomática estuvo motivada por la ejecución por parte de Riad de un destacado clérigo chií, lo que derivó en ataques a misiones diplomáticas saudíes en Irán.⁸⁷ Este episodio también motivó manifestaciones en Bahrein, principalmente en la localidad de Sitra, donde las protestas derivaron en choques con las fuerzas de seguridad. A lo largo de 2016, las autoridades de Bahrein también anunciaron el desmantelamiento de presuntas células con vinculaciones con Irán y Hezbollah que pretendían llevar a cabo ataques en el territorio y conllevaron la deportación de ciudadanos libaneses por su supuesta relación con la milicia chií. Durante el año Irán y Hezbollah también lanzaron advertencias a Manama sobre las consecuencias de algunas de sus medidas contra sectores chiíes, como el retiro de la ciudadanía del ayatollah Qassim, y alertaron que este tipo de acciones podrían alentar brotes de violencia.

Las fuerzas de seguridad de Irán se enfrentaron en varias ocasiones a miembros del PDKI, en los primeros choques con combatientes de este grupo en casi dos décadas en el Kurdistán iraní

Irán (noroeste)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)

Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria.

La tensión entre el Gobierno iraní y grupos armados kurdos que operan en el noroeste del país continuó

motivando hechos de violencia que en 2016 habrían provocado la muerte de una treintena de personas, un balance superior al del año anterior cuando se contabilizó una veintena de víctimas mortales. Como

en períodos previos, el balance de fallecidos en las hostilidades es difícil de precisar dadas las informaciones contradictorias proporcionadas por las diversas fuentes. Los incidentes más destacados se produjeron a partir de mediados de año e involucraron a las fuerzas de seguridad y a miembros del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) y del Partido por la Vida Libre en el Kurdistán (PJAK). Respecto a los choques con el PDKI, en junio miembros de la Guardia Revolucionaria se enfrentaron a combatientes del grupo en la zona fronteriza con Iraq. Según fuentes oficiales iraníes, los combates provocaron la muerte a 11 milicianos kurdos y a tres efectivos militares iraníes. El PDKI, en cambio, cifró en más de una veintena los fallecidos entre las tropas iraníes y reconoció haber perdido a varios combatientes. En julio, nuevos choques en la localidad de Sawlawá, en el Kurdistán iraní, habrían provocado la muerte de dos miembros del PDKI. **Los enfrentamientos entre tropas iraníes y el PDKI fueron los primeros en casi dos décadas** y llevaron algunas fuentes iraníes a sugerir que la reactivación de las actividades del grupo estaba siendo alentada por Arabia Saudita, en el marco de la pugna regional entre Riad y Teherán.⁸⁸ El Gobierno de Riad descartó haberse involucrado en asuntos internos iraníes, aunque un ex alto cargo iraní –el príncipe Turki al Faisal, ex jefe de la inteligencia saudí– se dejó ver en una reunión en Francia de otro grupo opositor, la Mujahedin Khalq Organization (MKO), que busca derrocar al gobierno de la república islámica. El PDKI, en tanto, negó estar recibiendo apoyo saudí y aseguró que se había visto forzado a tomar las armas porque no veía alternativa para asegurar los derechos políticos de la comunidad kurda. Según algunos análisis, el PDKI había despachado varias unidades de combatientes y cadetes a la zona del Kurdistán iraní desde marzo de 2015. Dado que el PDKI tiene a su base política en Erbil (Iraq), Irán advirtió al Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) iraquí que la seguridad fronteriza constituía una línea roja para Teherán y que atacaría las bases del KDPI si el KRG no contenía las ofensivas del grupo.

En cuanto al PJAK –que teóricamente mantiene un acuerdo de cese el fuego con Teherán desde 2011, aunque éste se ha visto afectado por diversas violaciones en los últimos años– miembros de este grupo fueron acusados por Teherán de la muerte de dos efectivos de la Guardia Revolucionaria. En otra acción atribuida al PJAK, miembros del grupo habrían disparado contra el vehículo que transportaba a un parlamentario en la provincia de Kermansha, fronteriza

87. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

88. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

con Iraq, causando la muerte a dos personas. Cabe destacar que también se informó de incidentes en Kermansha que habrían derivado en el fallecimiento de cuatro presuntos miembros de ISIS. Las autoridades iraníes han acusado a miembros de las minorías sunníes del país, entre ellas la kurda, de simpatizar con ISIS y en septiembre informaron que habían evitado que 1.500 personas se adhirieran a las filas del grupo armado. Grupos de derechos humanos denunciaron que los presuntos vínculos con ISIS se utilizan como excusa para perseguir a la comunidad sunní de Irán. Cabe señalar, además, que organizaciones vinculadas al PJAK/PKK combaten contra ISIS en Siria.

Adicionalmente, cabe destacar que **a principios de agosto Teherán ejecutó a 20 prisioneros kurdos en la prisión de Rahai Shahr bajo acusaciones de terrorismo.**

Según fuentes oficiales iraníes, los ejecutados formaban parte del grupo Tawhid y Yihad y estaban acusados de perpetrar 24 ataques armados con un saldo de 21 víctimas mortales entre 2009 y 2011. No obstante, fuentes próximas a los acusados y grupos de derechos humanos negaron estos cargos y denunciaron la obtención de confesiones bajo torturas. La ejecución fue interpretada por algunos analistas como un mensaje intimidatorio de Teherán hacia la comunidad kurda y los grupos armados que operan actualmente en el noroeste del país. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU consideró la ejecución de este grupo de prisioneros kurdos como una grave injusticia y denunció la falta de un debido proceso judicial. El PDKI también condenó las ejecuciones. En contraste con estos acontecimientos, cabe mencionar que durante una visita a la región kurda de Irán, en concreto a Mahabad –antigua capital de la breve república kurda establecida en 1946 y que duró 11 meses–, el presidente iraní Hassan Rouhani prometió más derechos culturales y se comprometió a abrir centros de idioma kurdo en la zona, tras asegurar que la lengua de grupos étnicos debía ser respetada y reconocida.

Irán (Sistán Baluchistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán

Síntesis:

Sistán Baluchistán es una provincia iraní limítrofe con Afganistán y Pakistán –la población baluchi vive a ambos lados de la frontera– y de mayoría sunní, en contraste con el resto del país, donde predomina la rama chií del Islam. La zona se caracteriza por altos índices de pobreza y es escenario de rutas de contrabando y de tráfico de drogas.

Desde 2005 el grupo Jundollah (Soldados de Dios) ha llevado a cabo una campaña insurgente en esta región. La organización, que también se autodenomina Movimiento de Resistencia del Pueblo, fue creada en 2002 y denuncia una persecución sectaria por parte de Teherán. Jundollah asegura que su objetivo es la defensa de los derechos, la cultura y la religión de los baluchis y niega tener una agenda separatista y vínculos con el exterior, como le acusa el Gobierno iraní, que le atribuye conexiones con EEUU, Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita y con la red al-Qaeda. Ante la posibilidad de desestabilización de esta zona, Teherán ha reforzado sus dispositivos de control y ha condenado a muerte a decenas de militantes de Jundollah. Las acciones del grupo insurgente se han reducido desde 2010, tras la captura y ejecución de su líder, pero nuevos grupos armados con una agenda similar a la de Jundollah han continuado operando en la zona, protagonizando esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La provincia iraní de Sistán Baluchistán continuó siendo **escenario de hechos de violencia durante 2016 que se cobraron la vida de al menos una quincena de personas**, según recuentos a partir de informaciones proporcionadas por fuentes oficiales iraníes. La mayor parte de estos episodios estuvieron protagonizados por fuerzas de la república islámica y el grupo insurgente Jaish al-Adl, al que Teherán atribuye conexiones con Arabia Saudita. Así, en junio, un policía y cinco miembros del grupo armado Jaish al-Adl murieron en choques en la zona de Khash. En julio atacantes armados dieron muerte a cuatro guardias fronterizos en la zona de Jakigour, en el distrito de Sarbaz. El incidente fue seguido de enfrentamientos entre combatientes armados y las fuerzas de seguridad que habrían causado varias muertes. En septiembre los enfrentamientos de Guardianes de la Revolución con Jaish al-Adl en el área de Kouhak, fronteriza con Pakistán, provocaron la muerte de cinco integrantes del grupo armado. Durante el año las autoridades iraníes también informaron de la detención en la región de sospechosos de pertenencia a grupos armados y de la confiscación de materiales explosivos. **En julio se anunció el arresto de 40 personas supuestamente involucradas en una célula que pretendía llevar a cabo ataques en el este del país y que había construido un túnel en la zona fronteriza con Pakistán.** En 2016 Teherán también informó de la desarticulación en Sistán Baluchistán de un presunto grupo vinculado a la opositora Mojaheden-e Khalq Organization (MKO). Finalmente, cabe mencionar que según informaciones de prensa en la provincia de Sistán Baluchistán también se produjo la ejecución de todos los hombres de un poblado por su presunta implicación en tráfico de drogas. Las fuentes no precisaron el nombre de la localidad ni el total de personas ejecutadas, pero destacaron que la zona es propensa a las actividades de contrabando de opio y otros narcóticos en la ruta que conecta con Pakistán y Afganistán. La región se encuentra entre las provincias con mayores índices de aplicación de la pena de muerte del país.

Irán – EEUU, Israel ⁸⁹	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015.

Durante 2016 se mantuvo la baja intensidad de esta tensión tras la firma del acuerdo sobre el programa nuclear iraní en julio de 2015, aunque se produjeron algunos incidentes. A principios de año la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) certificó que la república islámica estaba cumpliendo con sus compromisos según lo pactado, lo que condujo a que a mediados de enero se anunciara formalmente el levantamiento de las sanciones contra Irán. En este contexto, y tras meses de negociaciones secretas, Washington y Teherán también alcanzaron un acuerdo para el intercambio de prisioneros. A lo largo de 2016 también se avanzó en las gestiones para permitir el acceso de Teherán a los fondos que habían estado congelados y para promover las inversiones en el país. El presidente Hassan Rouhani visitó Europa, en el primer viaje de un mandatario iraní a la región en 16 años. La república islámica también recibió la visita de representantes europeos, entre ellos la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y se anunció el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre el país asiático y la UE. Reuniones de la Comisión Conjunta en Viena y del G5+1 (los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) en Nueva York permitieron abordar algunas dificultades en la puesta en práctica del pacto nuclear y, en diciembre de 2016, después de una visita a Teherán, el director de la AIEA volvió a confirmar que Irán se mantenía respetuosa

al acuerdo. Pese a los avances en la implementación del pacto, se produjeron algunos hechos de tensión relacionados con actividades de Irán en el desarrollo de misiles y episodios entre naves estadounidenses e iraníes. Respecto a las pruebas de misiles iraníes, EEUU y Francia anunciaron sanciones para individuos y entidades involucrados en estas acciones, que consideraron contrarias a la resolución 2231 sobre la cuestión nuclear iraní. No obstante, las autoridades iraníes defendieron estos desarrollos y subrayaron que el programa de misiles no era negociable por ser parte de las capacidades de defensa del país. Durante 2016 también se registraron diversos incidentes que derivaron en la detención de una decena de marines estadounidenses de dos barcos capturados en aguas territoriales iraníes, en enero; disparos de balizas de advertencia de EEUU durante maniobras de barcos de guerra estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico que se encontraron con cuatro naves militares iraníes, en agosto; y una cuasi colisión entre un patrullero de EEUU y una nave de los Guardianes de la Revolución en el estrecho de Ormuz, en septiembre. En el marco del conflicto armado en Yemen, y tras un ataque con misiles de EEUU contra posiciones al-houthistas –en represalia por un supuesto ataque del grupo armado a un barco estadounidense– Irán desplegó dos barcos de guerra en el Golfo de Adén con el argumento de proteger a barcos comerciales de acciones de piratería.⁹⁰

Hacia finales de año, los cambios políticos en EEUU encendieron las alarmas sobre la posible repercusión de las políticas del nuevo presidente, Donald Trump –electo en noviembre– en las relaciones con Irán y, en particular, en el mantenimiento del acuerdo nuclear. El primer ministro israelí –férreo opositor al acuerdo sobre el programa nuclear iraní– declaró que pretendía discutir con el nuevo presidente estadounidense las posibles fórmulas para revertir el pacto. En este nuevo escenario, tanto la Cámara de Representantes (a finales de noviembre) como el Senado estadounidense (en diciembre) aprobaron reintroducir la ley de sanciones contra Irán –Iran Sanctions Act (ISA)– por un plazo de 10 años. La medida alentó críticas de las autoridades de Teherán, que denunciaron que violaba el espíritu del pacto nuclear y que podría conducir a represalias. La legislación, sin embargo, requería para su puesta en marcha la ratificación del presidente Barack Obama, quien se negó a firmarla. Adicionalmente, cabe destacar que durante 2016 se intensificó la tensión entre Irán y Arabia Saudita, otro de los países que han observado con recelo el pacto internacional con Irán por su programa nuclear. En un contexto de pulso regional alentado por conflictos en países como Siria y Yemen, las relaciones entre ambos países se enturbiaron aún más tras la decisión de Riad de ejecutar a un destacado clérigo chií a principios de año. Este hecho motivó la condena de las autoridades de Teherán y alentó manifestaciones que acabaron con agresiones a las misiones diplomáticas

89. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

90. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

saudíes en Irán. Aunque el Gobierno iraní condenó estos hechos, el episodio llevó a Arabia Saudita a decretar una ruptura en las relaciones diplomáticas, movimiento que fue imitado por otros países aliados de Riad. En este contexto, la Organización para la Conferencia Islámica también denunció la interferencia de Irán en asuntos árabes por su pronunciamiento sobre las decisiones judiciales de Arabia Saudita. Las relaciones entre ambos países también se vieron tensionadas por las manifestaciones en Irán y las críticas de Teherán a Riad por su gestión del peregrinaje a la Meca, tras los incidentes que en 2015 dejaron centenares de víctimas mortales, y por sus insinuaciones sobre el presunto apoyo saudí a grupos armados insurgentes en Irán.⁹¹

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la desaparición de centenares de personas detenidas por las autoridades egipcias

años anteriores, a principios de 2016 las autoridades adoptaron severas medidas de seguridad para prevenir las manifestaciones por un nuevo aniversario de la caída del régimen de Hosni Mubarak. Los Hermanos Musulmanes (HM) – organización proscrita y declarada terrorista– hizo llamamientos a protestar, pero los intentos de los manifestantes de congregarse fueron dispersados por la Policía. A lo largo del año, sin embargo, se produjeron otras movilizaciones por distintas motivaciones: protestas tras el asesinato de un civil por las fuerzas de seguridad, manifestaciones de médicos en denuncia de abusos policiales y marchas de estudiantes, entre otras. **Las protestas más multitudinarias desde 2013 se produjeron en abril, en rechazo a la decisión del Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi de ceder dos islas ubicadas en el Mar Rojo, Tiran y Sanafir, a Arabia Saudita.** La medida alentó las críticas contra las autoridades de parte de sectores que la consideraron como una traición y como una afrenta al orgullo nacional dado el carácter estratégico de las islas y su simbolismo vinculado a las guerras árabe-israelíes. El Gobierno de al-Sisi insistió en que las islas son saudíes y que Egipto asumió su control a petición de Riad en los años cincuenta. La medida fue anulada por una decisión judicial en junio, pero el Gobierno apeló y a finales de año el destino de Tiran y Sanafir seguía siendo incierto. En medio de la polémica, más de 150 personas fueron condenadas a penas de hasta cinco años de cárcel por su participación en las protestas contra la transferencia de las islas a Arabia Saudita. A esto se suma que durante todo el año continuaron las informaciones sobre procesos, condenas, revocaciones de algunas sentencias y nuevas detenciones de dirigentes e integrantes de los HM. En marzo de 2016, más de 30 jueces fueron obligados a retirarse de sus cargos por haber mantenido una posición crítica frente al golpe de Estado que en 2013 expulsó del Gobierno al primer presidente islamista, Mohamed Mursi. Paralelamente, a lo largo de 2016 continuaron las denuncias sobre el cierre o la congelación de actividades de numerosas ONG –en algunos casos por sus presuntos vínculos con los HM, en otros por la recepción de ayudas económicas del exterior, entre otras causas–, el bloqueo a las actividades de académicos críticos y la prohibición de viaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, representantes de la ONU –entre ellos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Relator Especial para la Libertad de Asamblea y Asociación y expertos de la ONU en libertad de expresión–, llamaron a las autoridades egipcias a poner fin a las medidas restrictivas y a la represión a la sociedad civil, alertaron sobre las reacciones desproporcionadas de las autoridades –arrestos masivos, uso de la fuerza– para frenar el ejercicio del derecho a reunión y a protestas pacíficas y advirtieron sobre el uso abusivo de leyes contraterroristas.

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Egipto continuó siendo escenario de una tensión interna caracterizada por múltiples denuncias de abusos a los derechos humanos, persecución y acoso a activistas y sectores disidentes, y movilizaciones de sectores críticos con las políticas del régimen. Como en

91. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también denunciaron el uso de las políticas de “seguridad nacional” como excusa para acosar a sectores disidentes y formularon algunas acusaciones específicas. Amnistía Internacional señaló en julio a la Agencia de Seguridad Nacional por secuestros, torturas y desapariciones forzadas con el objetivo de intimidar a la oposición y acallar a las voces disidentes. En su informe, la organización advirtió de la desaparición de centenares de personas, incluyendo algunos jóvenes de hasta 14 años, documentó casos de torturas – incluyendo uso de violencia sexual– y alertó sobre la connivencia entre las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales para encubrir y bloquear las investigaciones de abusos.⁹² Según las informaciones del Consejo Nacional para los Derechos Humanos de Egipto, entre abril de 2015 y marzo de 2016 se habían contabilizado un total de 266 desapariciones forzadas. Otro informe de HRW también puso el acento en las violaciones a los derechos humanos de personas detenidas y a los casos de muerte de quienes estaban en prisión. En este contexto, cabe destacar que **uno de los casos de mayor notoriedad y repercusión internacional durante 2016 fue el del estudiante italiano Giulio Regeni**. El joven, que desarrollaba una investigación sobre los sindicatos en Egipto, desapareció en El Cairo el 25 de enero y su cuerpo fue hallado el 3 de febrero en los suburbios con evidentes signos de tortura. Las autoridades egipcias negaron tener responsabilidad en los hechos, pero el caso motivó que Italia retirara a su embajador en Egipto ante la falta de colaboración egipcia en la investigación del caso y, posteriormente, llevó a Roma a suspender las ventas de equipamiento militar al país norteafricano. Paralelamente, durante 2016 otras voces alertaron sobre el incremento sin precedentes de los juicios militares contra civiles en Egipto, que desde 2014 ya sumarían más de 7.000 (frente a los 12.000 en las tres décadas de Gobierno de Mubarak).⁹³ Asimismo, el Committee to Protect Journalists identificó a Egipto como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En este escenario, el Parlamento egipcio –que retomó sus sesiones a principios de año, por primera vez desde junio de 2012– aprobó en agosto una extensión por otros cinco años de un decreto –la Ley 136 (2014)– que ha permitido ampliar la jurisdicción militar y, en noviembre, una nueva legislación restrictiva para las actividades de las ONG.

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, PKK

Síntesis:

Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados “territorios en disputa” y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

Como el año anterior, la situación en la región del Kurdistán iraquí estuvo determinada por las consecuencias del conflicto armado en el país, tensiones entre Erbil y Bagdad y pugnas entre actores políticos kurdos. **La campaña contra ISIS, y en particular la operación para recuperar el control de la ciudad de Mosul de manos del grupo armado, motivó unos niveles de cooperación y coordinación sin precedentes entre las fuerzas iraquíes y los combatientes kurdos (peshmergas)** durante el segundo semestre del año, que en cierto modo eclipsaron las diferencias entre las autoridades iraquíes y kurdas. Sin embargo, esta colaboración no estuvo exenta de roces y dificultades, sobre todo en los meses previos al inicio de la campaña. Así, por ejemplo, en julio, poco después de que EEUU suscribiera un memorándum de entendimiento con el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) para proveer ayuda financiera (415 millones de dólares) y asistencia militar a los peshmergas –una medida considerada como un incentivo para su contribución a la ofensiva para retomar Mosul–, el Gobierno iraquí intentó excluir a los kurdos de las reuniones con la coalición anti-ISIS celebradas en Washington y algunos miembros del Gobierno de Bagdad pusieron en duda la participación de las fuerzas kurdas en la campaña contra ISIS en Mosul. Pese a ello, en septiembre Bagdad, Erbil y Washington llegaron a un acuerdo tripartito sobre la cooperación para la campaña en Mosul. Los peshmergas se involucraron en las hostilidades en alianza con las tropas federales iraquíes y trabajaron conjuntamente con milicias chiíes (Fuerzas de Movilización Popular, FMP) en el cerco a la ciudad, en el marco de un acuerdo para el reparto de las áreas a controlar y liberar.

La situación en el Kurdistán iraquí también estuvo influida por la implicación del PKK y de Turquía en Iraq.

92. Amnesty International, *Egypt: ‘Officially, you do not exist’: Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism*, Amnesty International, 13 de julio de 2016.

93. Sahar Aziz, “The Expanding Jurisdiction of Egypt’s Military Courts”, *Sada*, Carnegie Endowment for International Peace, 12 de octubre de 2016.

Uno de los focos de tensión en los que se vio involucrado el KRG durante 2016 estuvo vinculado a la localidad de Sinjar y a la presencia del PKK en esta localidad yazidí. Fuerzas del PKK han permanecido en la zona después de jugar un papel en la asistencia y evacuación de parte de la comunidad yazidí en 2014, cuando fue objeto de un intenso ataque de ISIS. Dirigentes del KRG reiteraron su rechazo a una presencia continua del PKK en la zona –posición en la que coincidirían Bagdad y EEUU–, un área donde también hay desplegados peshmergas. En declaraciones públicas, **el primer ministro del KRG, Nechirvan Barzani, no descartó el uso de la fuerza para expulsar al PKK de Sinjar**, alentando especulaciones sobre la posibilidad de un conflicto armado intra-kurdo.⁹⁴ Turquía también alertó que no permitiría que el PKK constituyera una nueva base en Sinjar similar a la que tiene en las montañas de Qandil, en el Kurdistán iraquí. En este contexto, cabe mencionar que el KRG de Massoud Barzani mantuvo su relación estratégica con Turquía, en un escenario de tensiones entre Ankara y Erbil por la intención del Gobierno de Erdogan de participar en la ofensiva en Mosul y por la presencia de tropas turcas en las proximidades de esta ciudad. El Gobierno de Bagdad rechazó la implicación de Ankara y exigió la retirada de sus tropas de la localidad de Bashiqa. Hasta finales de 2016, sin embargo, las fuerzas turcas no se habían retirado.⁹⁵ En otro hecho vinculado con el conflicto armado, cabe destacar que a principios de 2016 el KRG fue acusado de la destrucción deliberada de miles de viviendas de comunidades árabes en aparente venganza por su presunto apoyo a ISIS en poblados de Nínive, Kirkuk y Diyala. Amnistía Internacional alertó que el desplazamiento forzado y la destrucción deliberada de infraestructuras sin justificación militar podrían constituir un crimen de guerra y se habría producido en zonas recuperadas de ISIS entre septiembre de 2014 y marzo de 2015.⁹⁶

A estos focos de tensión se añadieron las fracturas entre sectores políticos del Kurdistán iraquí, que también tuvieron su reflejo en Bagdad y en posiciones divergentes respecto a la búsqueda de una eventual independencia. Aunque forman una coalición en el gobierno regional, las diferencias entre el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) de Barzani y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) se hicieron evidentes. A mediados de mayo, el PUK y el partido político kurdo Gorran –ambas formaciones partidarias de una aproximación más conciliadora hacia Bagdad– suscribieron una alianza para unir fuerzas tanto en la región del Kurdistán como en Bagdad y juntos pasaron a ser la mayor delegación kurda en el Parlamento iraquí, con 30 representantes frente a los 28 del KDP. Posteriormente, Gorran –que no reconoce a Barzani como presidente del KRG tras la polémica extensión de su mandato en agosto de 2015– rechazó participar en una reunión convocada por el

mandatario para discutir un posible referéndum sobre la independencia del KRG de Iraq. En un contexto de crecientes problemas económicos en el Kurdistán iraquí –que motivaron protestas de funcionarios públicos y profesores por recortes de salarios e impagos de sueldos– Barzani visitó Bagdad a finales de septiembre para discutir la operación en Mosul y cuestiones bilaterales. Dirigentes del KRG insistieron en la vía del diálogo con Bagdad para resolver los temas pendientes y aunque se mantuvo un clima de colaboración, algunos analistas alertaron que las tensiones entre Bagdad y Erbil resurgirán una vez finalice la campaña en Mosul.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión internacional protagonizada por Israel, Siria y Líbano persistió durante 2016 aunque registró menores niveles de violencia que el año anterior, cuando se produjeron los peores incidentes desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah con un saldo de más de una decena de víctimas mortales. En enero la milicia chií libanesa lanzó un ataque con explosivos contra dos vehículos de las fuerzas de seguridad israelíes en la disputada zona de las Granjas de Sheeba, a lo que Israel respondió con fuego de artillería y de mortero. No se reportaron víctimas en el marco de este intercambio. **La acción de Hezbollah fue reivindicada por el grupo como una represalia por el asesinato del destacado dirigente de la organización Samir Qantar en un ataque aéreo en Damasco ocurrido a finales de 2015** y atribuido a Israel. En mayo se informó de la muerte en un ataque

94. Denise Natali, “Is Iraq Kurdistan heading towards civil war?”, *Al-Monitor*, 3 de enero de 2017.

95. Véase los resúmenes sobre Iraq y sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

96. Amnesty International, *Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq*, Amnesty International, 20 de enero de 2016.

explosivo en la capital siria del comandante militar de Hezbollah Mustafa Badreddine, el dirigente del grupo de más alto rango en ser asesinado desde la muerte de su predecesor, Imad Mughniyeh, en una operación conjunta de la CIA y el Mossad en 2008 en Damasco. Aunque las primeras versiones apuntaron a Israel como responsable de la acción contra Badreddine, Hezbollah finalmente atribuyó el ataque a grupos armados sunníes que operan cerca del aeropuerto de Damasco.⁹⁷ En julio un ataque de confusa autoría en la zona de los Altos del Golán fue atribuido por algunas fuentes a Israel, aunque Hezbollah responsabilizó de la acción a milicianos de al-Qaeda. En octubre, el Ejército israelí informó de otro episodio en el que un soldado israelí resultó herido presuntamente tras ser tiroteado desde un vehículo en la zona fronteriza.

Más allá de incidentes de este tipo, la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL) subrayó que en general el clima en su área de operaciones y a lo largo del Río Azul fue de calma, aunque **las partes en disputa mantuvieron una retórica provocativa y desafiante, en un año en que se cumplía el décimo aniversario de la guerra de 2006**. En entrevistas y declaraciones públicas, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que el grupo estaba en posesión de armamento capaz de golpear en cualquier punto de Israel y que continuaba incrementando sus capacidades. La milicia chií, que se mantuvo abiertamente implicada en la guerra en Siria en apoyo al régimen de Bashar al-Assad, agradeció a Irán por el apoyo económico y militar al grupo. Paralelamente, altos cargos de las fuerzas de seguridad israelíes alertaron que la respuesta israelí a cualquier agresión de Hezbollah llevaría a una confrontación de gran escala. En abril y sin dar detalles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también aseveró que su Gobierno había lanzado decenas de ataques en Siria con el objetivo de prevenir transferencias de armas a Hezbollah. A lo largo del año, Israel insistió en denunciar movimientos tendientes a transferir armas a Hezbollah a lo largo de la frontera sirio-libanesa que la ONU no pudo verificar de manera independiente. La UNIFIL también constató que Israel había continuado violando de manera sistemática el espacio aéreo libanés, casi diariamente y en su mayoría a través de aviones no tripulados. Durante el último trimestre, la zona ocupada de los Altos del Golán fue escenario de nuevos incidentes que llevaron a Israel a desplegar su sistema de defensa aérea Iron Dome. Según informaciones publicadas a finales de noviembre, Israel habría lanzado dos misiles que golpearon la zona oeste de Damasco sin que se reportaran víctimas y habría dado muerte a cuatro combatientes sirios presuntamente vinculados a ISIS que habían atacado a tropas israelíes en el Golán.

Líbano continuó viéndose afectado por las dinámicas del conflicto armado en Siria y diversos incidentes, en su mayoría en zonas fronterizas, causaron la muerte de más de cincuenta personas

Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupos armados ISIS y Frente al-Nusra

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

Al igual que en años previos, Líbano fue escenario de una tensión interna determinada por las consecuencias en el país del conflicto armado en la vecina Siria, por incidentes vinculados a la comunidad palestina refugiada en el país, por el persistente *impasse* político que no se resolvió hasta finales de año y, como novedad, por tensiones con Arabia Saudita que afectaron el apoyo económico que

Riad estaba proporcionando a las Fuerzas Armadas libanesas. Respecto a las dinámicas vinculadas con el conflicto armado sirio, además de la participación directa de actores libaneses como Hezbollah en la guerra siria,⁹⁸ cabe desatacar que a lo largo de 2016 se registraron diversos incidentes en territorio libanés, principalmente en zonas limítrofes, que causaron la muerte de más de medio centenar de personas. Uno de los hechos más graves se produjo en febrero, cuando una operación del Ejército en la zona de Aarsal provocó la muerte de seis hombres armados y derivó en el arresto de

16 presuntos combatientes de ISIS. Ese mismo mes y también en Aarsal, la milicia chií de Hezbollah dio muerte a cuatro combatientes del Frente al-Nusra, grupo armado con base en Siria vinculado a al-Qaeda. Otro hecho destacado tuvo lugar en marzo en una zona fronteriza con Siria, cuando los enfrentamientos entre hombres armados y tropas libanesas dejaron nueve personas fallecidas, un soldado y ocho milicianos. En este mismo período también se registraron combates entre el Frente al-Nusra e ISIS que se iniciaron en la ciudad de Jrajeer

97. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

98. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados) y sobre Israel-Siria-Líbano en este capítulo.

en la región montañosa de Qalamoun, en Siria, pero se extendieron a las localidades libanesas de Aarsal y Raas Baalbek, dejando una treintena de combatientes fallecidos. **Uno de los incidentes más significativos del año se produjo a finales de junio, cuando dos ofensivas suicidas perpetradas por ocho atacantes provocaron la muerte de seis personas y dejaron heridas a decenas en la localidad de al-Qaa, de mayoría cristiana y fronteriza con Siria, en una acción no reivindicada pero atribuida a ISIS.**

Las autoridades identificaron a los atacantes como nacionales sirios, lo que derivó en un incremento de las tensiones entre la población libanesa y la comunidad siria refugiada en el país –más de un millón de personas– y llevó a algunos sectores de la comunidad cristiana a hacer llamamientos a la auto-defensa armada. En este contexto se produjeron algunos hechos de violencia, incluyendo ataques a refugiados, además de arrestos masivos, operaciones de rastreo en campos de población refugiada e imposición de toques de queda para personas de nacionalidad siria en la zona del ataque y poblados de los alrededores. En septiembre se contabilizaron varios heridos en choques entre libaneses y refugiados sirios en la zona de Dawhet Aramoon, al sur de Beirut. El primer ministro libanés hizo un llamamiento a la comunidad internacional a diseñar un plan para el retorno de la población refugiada siria antes del “colapso” de Líbano. Cabe destacar que durante el año diversas ONG y agencias internacionales alertaron sobre la precaria situación de la población siria refugiada en el país. En este sentido, se denunció por ejemplo el elevado número de menores de edad que se han visto obligados a trabajar en condiciones de explotación laboral y que la mitad de los niños y niñas refugiados sirios no está recibiendo una educación formal. También en relación con Siria, durante el último trimestre del año se informó de la imputación de dos oficiales sirios por su supuesta responsabilidad en ataques a dos mezquitas sunníes en Trípoli en 2013 que dejaron 40 víctimas mortales y se celebraron protestas por la presunta implicación siria en ataques a sedes de dos grupos políticos libaneses. Además, entre enero y octubre las fuerzas de seguridad libanesas detuvieron a 1.700 personas por su presunta afiliación a grupos extremistas o participación en actividades terroristas. Cabe mencionar que durante 2016 también se registraron algunos hechos de violencia entre la comunidad palestina refugiada en Líbano, en concreto enfrentamientos entre facciones vinculadas a al-Fatah y a grupos islamistas en el campo de Aïn el-Helweh en los que murieron dos personas.

A nivel político, **las diferencias entre las distintas formaciones libanesas y el bloqueo en la elección del presidente se mantuvieron durante casi todo el año. No fue hasta octubre que, después de más de dos años de *impasse*, se acordó la elección de Michael Aoun como nuevo mandatario del país.** El ex general de 81 años sucedió así a Michel Suleiman, que había dejado el cargo en mayo de 2014. Líder del Movimiento Patriótico Libre

y considerado como una figura próxima a Irán y aliado de Hezbollah, Aoun cumple con el singular esquema de reparto de poder establecido en la Constitución libanesa que exige que el presidente sea cristiano, que el primer ministro sea sunní y que el portavoz del Parlamento sea chií. Su designación se desbloqueó después de que el líder del Movimiento Futuro, Saad Hariri, decidiera respaldarlo. Un mes más tarde Hariri fue nombrado como primer ministro y en diciembre se configuró el nuevo gabinete, que definió como sus prioridades preservar la seguridad del país en el contexto de inestabilidad regional y preparar la celebración de elecciones parlamentarias –las primeras en ocho años– que deberían celebrarse en mayo de 2017. Finalmente, cabe mencionar que la situación en Líbano se vio influida por las tensiones con Arabia Saudita, en el marco del pulso regional entre Riad y Teherán. **El reino saudí decidió suspender la ayuda militar a Líbano –por un valor de 3.000 millones de dólares– tras considerar que Beirut no había condenado de manera contundente los ataques contra misiones diplomáticas saudíes en Irán** en enero, agresiones que estuvieron motivadas por la decisión de Riad de ejecutar a un destacado clérigo chií.⁹⁹ Arabia Saudita denunció la influencia de Hezbollah –aliado de Irán– en Líbano y promovió medidas contra la milicia chií. Así, en marzo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Liga Árabe designaron a Hezbollah como una organización terrorista. Asimismo, durante el año varios países del CCG decidieron expulsar a nacionales libaneses de sus territorios por sus presuntos vínculos con la milicia chií y desaconsejaron a sus ciudadanos viajar a Líbano.

Palestina	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	AP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedine al-Qassam, grupos salafistas

Síntesis:

La oposición entre los distintos sectores palestinos en las últimas décadas ha estado protagonizada principalmente por grupos nacionalistas laicos por una parte (Fatah y su brazo armado –las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa–, FPLP, FDLP) y grupos confesionales por otra (Hamas y su brazo armado –Brigadas Ezzedine-al-Qassam–, Yihad Islámica). El enfrentamiento responde a la voluntad de controlar el poder dentro de los territorios palestinos y se ha traducido, a su vez, en diferentes aproximaciones respecto a las relaciones con Israel. Tras años de dominio de Fatah en la política palestina, las acusaciones de corrupción y de no defender los intereses palestinos en el proceso de paz desencadenaron el triunfo de Hamas en las elecciones de enero de 2006. Este hecho precipitó una batalla dialéctica y armada entre ambas formaciones por el control de las instituciones políticas y, sobre todo, de las fuerzas de seguridad. En 2011 Hamas y Fatah anunciaron un acuerdo

99. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

de reconciliación. Sin embargo, las discrepancias entre ambas formaciones han persistido, dificultando la formación de un gobierno de unidad nacional. Los cambios en la región en el marco de las revueltas árabes también han tenido una influencia relevante en los avances y retrocesos del proceso de reconciliación, al que Israel se opone abiertamente.

A lo largo de 2016 **persistieron las divisiones en el liderazgo palestino y las disputas entre Fatah y Hamas.**

Como en años previos, durante el año se informó de iniciativas de mediación que pretendían favorecer la reconciliación entre las partes. Así, en los primeros meses de 2016 y bajo los auspicios de Qatar, ambas formaciones retomaron los contactos para explorar las posibilidades de poner fin a las divisiones y formar un gobierno de unidad nacional efectivo. Fatah y Hamas mantuvieron conversaciones en Doha a principios de febrero con el fin de discutir la implementación del pacto –conocido como Beach Refugee Camp Agreement– suscrito en abril de 2014 y precedido por otros dos acuerdos de unidad fallidos, el de El Cairo (2011) y el de la Meca (2007). No obstante, continuaron las diferencias entre las partes en temas como el control de los cruces fronterizos de la Franja de Gaza o la celebración de comicios legislativos y presidenciales. Según trascendió, se celebraron nuevas reuniones en Doha en marzo –después de que una delegación de Hamas visitara Egipto– y en junio, pero esta última habría concluido con nuevas acusaciones mutuas. Hamas acusó a la Autoridad Palestina (AP) de llevar a cabo una campaña de acoso al movimiento islamista en Cisjordania que habría llevado a la detención de unas 200 personas. Fatah presentó una queja similar sobre el arresto de algunos de sus representantes en la Franja de Gaza. El grupo islamista también fue señalado por la adopción de algunas medidas, como la ejecución de tres personas condenadas por asesinato en mayo sin contar con la aprobación de la AP, como requiere la ley palestina.

En este contexto, **la convocatoria a elecciones municipales volvió a exponer las profundas diferencias entre Hamas y Fatah, que se acusaron mutuamente**

de obstruir las campañas de sus adversarios. Los comicios, que estaban previstos para el 8 de octubre y que habrían sido las primeras elecciones palestinas desde 2006, fueron finalmente suspendidos.

Una decisión de la Corte Suprema palestina, con sede en Ramallah, justificó la decisión bajo el argumento de que la votación no podría llevarse a cabo en Jerusalén Este, además de algunos problemas de procedimiento. La medida se adoptó poco después de que tribunales de Gaza descalificaran varias listas de candidatos de Fatah, tras ser objetadas por Hamas. Aunque la Comisión Electoral recomendó posponer las elecciones por un plazo de seis meses para resolver los obstáculos de la votación, finalmente los comicios fueron postergados indefinidamente por la AP. En consecuencia, ambas formaciones intercambiaron acusaciones respecto al fracaso en la convocatoria electoral. La persistencia de estas divisiones en el liderazgo palestino se produce en momentos en que se ha incrementado la visión crítica sobre la AP entre la población palestina y con crecientes problemas de Hamas para lidiar con la crítica situación en Gaza.¹⁰⁰ Adicionalmente, el Cuarteto para Oriente Medio, en su informe sobre los obstáculos para reactivar las negociaciones de paz y avanzar en una solución de dos Estados, señaló que uno de los problemas era la ausencia de unidad palestina. Pese a las divergencias, una delegación de Hamas aceptó la invitación y participó en el séptimo Congreso General de Fatah, celebrado a finales de noviembre y el primero desde 2009. Durante el encuentro, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, llamó a Hamas a superar las divisiones. Abbas y el líder de Hamas, Khaled Meshaal, se habían reunido nuevamente en Qatar a finales de octubre. En otro hecho destacado ocurrido a finales de año, Abbas decidió retirar la inmunidad parlamentaria a su archirrival Mohamed Dahlan y otros cuatro legisladores, después de ser acusados de tráfico de armas, apropiación de fondos públicos y difamación. Dahlan, que fue expulsado del liderazgo de Fatah en 2011 y vive en EAU, mantenía su cargo de legislador. La decisión de Abbas fue objeto de debate en una sesión extraordinaria del Consejo Legislativo Palestino a finales de diciembre.

100. Véase “Israel-Palestina: la agonía de la solución de dos Estados y el riesgo de mayor violencia a 50 años de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).